

**Benito Juárez**

***Documentos,  
Discursos y Correspondencia***

**Tomo 12, capítulo CCXVIII**

Selección y notas de  
**Jorge L. Tamayo**

Edición digital coordinada por  
**Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva**

Tomo revisado y anotado por  
**María del Carmen Berdejo Bravo**

Versión electrónica para su consulta  
**Aurelio López López**



**Año 2006**

# **Tomo 12, capítulo CCXVIII**

**Anotado y revisado por  
María del Carmen Berdejo Bravo  
(UAM Azcapotzalco)**

## **Capítulo CCXVIII**

### **Proceso y fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía**

**Mayo y junio de 1867**

## **CCXVIII**

### **PROCESO Y FUSILAMIENTO DE MAXIMILIANO, MIRAMÓN Y MEJÍA**

**Mayo y Junio de 1867**

Una vez que el general Escobedo recibió instrucciones de iniciar el proceso contra el archiduque Maximiliano y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, designó, el 24 de mayo, como fiscal al teniente coronel de infantería Manuel Azpíroz, su ayudante de campo. Fue escogida esta persona por su preparación jurídica, toda vez que era abogado; lo que extraña, eso sí, es que en ningún momento en el proceso se hace mención de esta circunstancia.

Ya en funciones, el teniente coronel Azpíroz designa, el 24 de mayo, a Jacinto Meléndez, soldado de la 3ª compañía del batallón guardia de los Supremos Poderes, como escribano.

Parcialmente se publicaron los más importantes documentos del proceso, pero fue hasta 1906 que se dio a conocer íntegra la totalidad del legajo correspondiente. En este capítulo se reproducen los documentos que hemos considerado fundamentales para tener idea precisa del proceso, omitiendo aquellos de secundaria importancia o mero trámite. Incorporamos también documentos tomados del informe que los defensores publicaron, dando a conocer sus gestiones ante el gobierno en la ciudad de San Luis Potosí. Para simplificar en lo posible tan copiosa documentación y facilitar su mejor entendimiento nos esforzaremos por hacer en esta introducción breves comentarios.

Sobre la marcha, a falta de papel sellado, habilita papel común y corriente e inicia desde luego la investigación, por lo que se traslada al Convento de las Capuchinas, donde se encontraban los prisioneros.

En el expediente se sigue un orden cronológico de las diligencias realizadas, pero nos ha parecido preferible, para ayudar al lector,

modificar esta secuencia y de esta suerte pondremos, en primer término, los sucesivos interrogatorios a los que se sujetó a Maximiliano, y más tarde los de las diligencias de los generales Mejía y Miramón.

Se inicia el presente capítulo con el acta del primer interrogatorio a Maximiliano, llevado a cabo por el fiscal, probablemente en la tarde del día 24 de mayo, toda vez que en el expediente no se precisa la hora. A las preguntas del fiscal, manifestó que estaba dispuesto a contestar con franqueza y lealtad, pero que no creía competente al Consejo de Guerra, que solicitaba se le presentara la acusación por escrito, y que se le dieran tres días para estudiarla y escoger abogado que le auxiliara.

El lector podrá observar que Maximiliano dio respuesta a las preguntas de identificación de su persona, pero en cambio se negó a contestar las siguientes por considerar que se trataba de cuestiones políticas a las que negaba jurisdicción al Consejo de Guerra.

Designó, el 24 por la noche, como defensores a los abogados Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, quienes se encontraban en la Ciudad de México, sitiada en esos días por el ejército republicano al mando del general Porfirio Díaz. Solicitó y obtuvo permiso para pasar un telegrama dirigido al barón de Magnus, ministro de Prusia ante el imperio, en que le pedía se trasladara a la ciudad de Querétaro a los abogados antes mencionados y los documentos necesarios.

Los imperiales sitiados en México, empeñados en negar la caída de Querétaro y prisión de Maximiliano, dificultaron la salida de los defensores y del barón de Magnus, lo que pudieron hacer hasta el 2 de junio. El padre Fischer había pedido espontáneamente al licenciado Eulalio Ortega actuara como defensor de Maximiliano, lo que fue aceptado por Riva Palacio y Martínez de la Torre.

El segundo interrogatorio a Maximiliano se llevó a cabo al día siguiente, 25 de mayo y tampoco se adelantó, porque el acusado se negó a contestar a las preguntas del fiscal, por considerarlas de carácter político y por insistir en su negativa a reconocer la jurisdicción del Consejo de Guerra. Ese mismo día, unas horas después, se volvió a interrogar al archiduque para llevar a cabo lo que los penalistas llaman

"confesión con cargos" o sea hacerle preguntas concretando los cargos. Maximiliano se negó a contestarlas por considerarlas de índole política.

También ese mismo día solicitó y obtuvo permiso de transmitir al presidente de la República un telegrama explicando que, por el desconocimiento del idioma español en la terminología jurídica, no se iniciara el proceso hasta la llegada de sus defensores y se le concediera suficiente tiempo para su defensa. Ambos mensajes se reproducen en este capítulo.

Al día siguiente, 26 de mayo, Maximiliano solicitó la presencia del fiscal para que se le precisara cuál era la posición que se le reconocía, toda vez que se había enterado de que en la lista oficial de prisioneros aparecía como ex emperador. Señala que, si se le reconoce ese carácter, no podía ser juzgado por un Consejo de Guerra y sólo por el Congreso, pero que, en caso contrario, debía ser tratado como archiduque de Austria y, en ese caso, tampoco procedía se le juzgara y que debería ser entregado como prisionero a un buque de guerra austriaco. Además insiste en que el presidente de la República le conceda una entrevista "para hablarle de puntos de mucha gravedad".

Claramente se ve que el propósito de Maximiliano es dejar constancia escrita de que desea tener una entrevista personal con el presidente de la República. El fiscal no discute el punto, se limita a consignar la exposición de Maximiliano y agregar que puede dirigirse al presidente de la República y llamar a los representantes de Austria y de Bélgica.

El día que se inició el proceso -24 de mayo-, después del interrogatorio a Maximiliano, y una vez puesto en incomunicación, pasó el fiscal a la celda del Convento de las Capuchinas; donde se encontraba el general Mejía, quien con toda franqueza contestó a las preguntas que le hizo el fiscal, si bien trató de señalar que durante el gobierno del presidente Comonfort pactó con el general Rosas Landa su amnistía pero que el gobierno se negó aceptarla, por lo que no tuvo más remedio que seguir levantado en armas. El lector podrá ver con amplitud la justificación que hace de su conducta, pues los interrogatorios se reproducen en este capítulo.

Parece conveniente destacar el hecho de su insistencia en que había servido al imperio, forma de gobierno que una mayoría del país había escogido, y que no se había ligado con la intervención.

Al día siguiente, 26 de mayo, fue sujetado a un nuevo interrogatorio, llamado de "confesión con cargos". Nuevamente Mejía contestó con toda franqueza a las preguntas, sosteniendo su posición política, confirmando que no se puso de parte de los franceses, y que tampoco hizo la guerra al gobierno republicano.

Insistía en que durante la presencia de los franceses en México se había hecho a un lado y que fue hasta que se retiró la intervención cuando se vio obligado a seguir apoyando al imperio por su concepto de honor y lealtad, pese a que había solicitado su retiro.

Mejía consideró conveniente solicitar de nueva cuenta la presencia del fiscal el 29 de marzo, ya cerrada la investigación "para ampliar su confesión con careos", y fundamentalmente en insistir en que no reconoció a la intervención sino a la regencia y que ésta se instauró "por los votos de representantes de todas las clases y partidos políticos de México".

Terminando el interrogatorio el general Mejía, el 24 de mayo, fue también incomunicado y procedió el fiscal a interrogar en otra celda al general Miguel Miramón, quien contestó con toda amplitud a las preguntas que le hizo el fiscal. Afirmó y sostuvo que consideró legítima la actuación de la Junta de Notables, que designó a Maximiliano emperador de México. Aceptó que Napoleón III tenía la ambición de apoderarse de una parte del territorio nacional, por lo que siempre estuvo en contra de la intervención francesa, pero que no tomó las armas en contra de ella, porque consideró que no se podría hacer esa guerra con buen éxito.

El 26 de mayo, después del general Mejía, se le tomó "su confesión con cargos". En el diálogo entre el fiscal y el general Miramón muestra el talento de éste último, pues insistió en no considerar legítimo el gobierno presidido por el general Juan Álvarez, también sobre que posteriormente perdió su carácter militar, toda vez que el gobierno del presidente Comonfort lo destituyó. Respecto al golpe de Estado de 1857,

señala "que la nación rechazó la Constitución que desconoció al mismo presidente Comonfort".

Paso a paso, el fiscal va examinando las diversas etapas públicas del general Miramón, y al llegar al fusilamiento de los prisioneros en Tacubaya, el 11 de abril de 1859, niega el acusado la responsabilidad de estos crímenes y señala como responsable al general Leonardo Márquez, reconociendo, eso sí, que había estado impedido de poder castigar a Márquez por esos crímenes.

Insiste en que no reconoció la intervención, si bien reconoció al gobierno de hecho, que era la regencia. Que imposibilitado de ser amnistiado por el gobierno republicano ni de vivir en el extranjero "se vio obligado de volver al país, cuya consecuencia fue reconocer el poder que halló en la capital y servirle, porque tampoco le era posible que este poder lo dejase retirado en su casa".

El lector cuidadoso podrá observar en las declaraciones de Tomás Mejía al hombre rudo, franco, fanático con su pensamiento político e intransigente frente al gobierno liberal, no obstante que consideraba perjudicial la presencia de los franceses en México.

En Miramón es notorio su talento y habilidad, pero al mismo tiempo la inconsecuencia con las propias afirmaciones que hace para tratar de justificar su conducta. No se olvide que durante su estancia en Europa ofreció sus servicios al gobierno republicano y en principio éstos fueron aceptados, con la única salvedad de no proporcionarle dinero para volver a México.

El 27 de mayo el fiscal dio por concluido el proceso y lo puso en manos del general Escobedo a las cuatro y media de la tarde de ese día. Inmediatamente fue puesto a la consideración del licenciado Joaquín E. Escoto, asesor del general Escobedo, quien consideró que la causa estaba ya en estado de defensa.

Tanto por el hecho de que los defensores no habían podido salir de la Ciudad de México, como por el deseo del gobierno de dar un plazo mayor para la defensa, se resolvió que el plazo de 24 horas que marcaba la ley de 26 de enero se ampliara en tres días más.



Maximiliano, al no tener respuesta de su llamado a los defensores de México, designó al licenciado José María Vázquez, residente en Querétaro, como defensor.

Maximiliano presentó el 29 de mayo una comunicación al general Escobedo, bastante larga, en que rechazó se le aplique en su caso la ley de 25 de enero de 1863, y tampoco acepta la jurisdicción militar creada por ella.<sup>1</sup>

Separadamente, ese mismo día los generales Miramón y Mejía presentan una comunicación declinando la jurisdicción militar.

A ambas promociones el general Escobedo resolvió devolverlas para que se presentaran ante el fiscal. Los defensores no estuvieron de acuerdo e hicieron nueva protesta.

El general Mejía pidió el 29 de mayo que se hiciera constar que siempre que ha tenido mando de fuerzas ha puesto en libertad a los prisioneros de guerra y que cuando ha habido un jefe superior a él ha hecho todo lo posible por salvarles la vida, por lo que pide se interroge al general Escobedo sobre la conducta observada con él y otros generales prisioneros en El Verde.

El asesor opina que no es conveniente que, dado que el general Escobedo tiene carácter de juez, actuara como testigo.

También la apelación presentada por Maximiliano, rechazando la jurisdicción, es denegada por Escobedo el día 31 de mayo.

Ese mismo día el general Escobedo escribe al presidente Juárez, informándole de todas estas ocurrencias, y haciendo interesantes comentarios.

A los presos que habían estado incomunicados se les levantó esta incomunicación el 31 de mayo y, al día siguiente, se les notificó a Maximiliano, Miramón y Mejía, separadamente, que había sido rechazada su promoción negando la jurisdicción del Consejo de Guerra.

El día 2 de junio se da por terminada la defensa de Maximiliano y al ser notificado, el licenciado Vázquez protesta contra esta decisión.

---

<sup>1</sup> En el proceso únicamente está firmada por Maximiliano, pero en *Memorandum sobre el Proceso de Maximiliano de Austria* aparece como suscrita también por el licenciado José María Vázquez, quien seguramente la redactó.

El 3 de junio se nombra segundo escribano al sargento segundo del cuerpo de cazadores de Galeana, Ricardo Cortés.

Los defensores de los tres detenidos hicieron diversas promociones para prolongar los períodos de defensa, pero el general Escobedo, como juez, se negó a ello, por lo que a las nueve de la noche del 3 de junio se notificó a los defensores de Miramón, licenciados Moreno y Jáuregui, que comenzaba el término de las veinticuatro horas marcadas por la ley para evacuar su defensa.

El día 6 de junio se presentaron ante el fiscal los licenciados Mariano Riva Palacio, Rafael M. de la Torre y Eulalio Ortega, para hacerle saber el nombramiento de defensores de Maximiliano. En la diligencia correspondiente los tres abogados aceptaron el nombramiento pero anunciaron que, no estando conformes en que su defendido fuese sujeto a un consejo de Guerra, por separado presentarían un alegato por escrito.

Ese mismo día se notificó a los defensores que el término de veinticuatro horas empezaba a correr a las cinco de la tarde; éstos indicaron que habían señalado al licenciado Vázquez para que recibiera el expediente compuesto de 130 hojas. Por telégrafo se solicita una prórroga para la defensa, habiéndose concedido tres días más; pero como los defensores consideraron este plazo insuficiente, los licenciados Riva Palacio y Martínez de la Torre resolvieron trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí para entrevistar al presidente de la República, quedando en Querétaro los licenciados Jesús María Vázquez y Eulalio María Ortega, quienes presentaron el 6 de junio un alegato de la defensa declinando la jurisdicción militar. Habiendo oído el parecer del asesor licenciado Escoto, rechazó el general Escobedo la promoción de los defensores.

Los licenciados Riva Palacio y Martínez de la Torre entrevistaron el 8 de junio al ministro Sebastián Lerdo de Tejada y más tarde al presidente Juárez; al día siguiente, a los ministros Iglesias y Mejía, solicitando fueran los tribunales ordinarios quienes juzgaran a Maximiliano.

Al medio día del 9 de junio se les comunicó "que la resolución del gobierno, tomada en junta de la mañana, era la de no alterar en nada el

procedimiento que ya estaba marcado para el juicio, debiéndose marchar en todo conforme a la ley". Por ello comunicaron esa tarde a Querétaro a los otros defensores de Maximiliano, que no se había concedido la prórroga de un mes, por lo que se iba a iniciar desde luego el Consejo de Guerra y que ellos preferían quedarse en San Luis Potosí para pedir el indulto contra la sentencia que esperaban adversa.

Dentro de este propósito sostuvieron varias entrevistas con el presidente y sus ministros, y parece útil reproducir el relato de los defensores:

Narradores fieles de esta triste historia, debemos exponer con toda franqueza que el señor presidente, lo mismo que sus ministros, nos otorgaron siempre todo el tiempo que quisimos para tan largas y frecuentes entrevistas; que a todos nuestros razonamientos se contestaba con otros que acreditaban un estudio detenido y profundo de una resolución que imprimía un trágico fin al imperio.

El perdón de Maximiliano, nos decían, sería la justificación completa de los actos crueles de la intervención, que obró a su nombre; sería el indulto de una multitud, que a la sombra de lo que se llamó gobierno, derramó la sangre, devastó el país, cometió mil depredaciones, etc. Sería la absolución del terrible azote que descargó sobre la sociedad la ley de 3 de octubre de 1865. En cuanto al indulto, todo debe reservarse para cuando se dé la sentencia. Antes, no es posible examinar ese punto, que tiene su oportunidad marcada.<sup>2</sup>

Nuevamente el 10 de junio los licenciados Riva Palacio y Martínez de la Torre presentaron a la consideración del presidente de la República un breve alegato pidiendo que la causa contra el archiduque Maximiliano

---

<sup>2</sup> Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre. *Memorándum sobre el proceso del archiduque Fernando Maximiliano de Austria*. México, 1867, p. 34.

pase a los tribunales de la federación y se suspenda el Consejo de Guerra ordinario.

El presidente de la República se negó a aceptar esta petición, por lo que los mencionados defensores sostuvieron largas conversaciones con el presidente y cada uno de los ministros, solicitando el indulto. Presentaron el 12 de junio un largo alegato pidiendo esta gracia, que se reproduce en este capítulo y que consideran "un resumen diminuto de nuestra exposición verbal".

Se incluye este documento, pero además hemos creído conveniente incluir también el relato que los defensores hicieron de la respuesta del ministro de Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada, que concluye con la frase de "Ahora o acaso nunca, podrá la República consolidarse", que ha dado origen a equivocadas, versiones, presentando a Lerdo de Tejada como firme y a la vez irrespetuoso, y a Juárez titubeante; la lectura de este relato, publicado en 1867, permite precisar el origen y alcance de la feliz y oportuna expresión.

El secretario de Guerra, Ignacio Mejía, contestó el 14 de junio, indicando que el presidente de la República no podía resolver sobre la solicitud de indulto, mientras el Consejo de Guerra no hubiera dado la sentencia.

El 12 de junio, después de varias promociones de los defensores de los tres enjuiciados, tratando de demorar la iniciación del Consejo de Guerra, declara el general Escobedo que el proceso contra Maximiliano, Miramón y Mejía "está en estado de verse en el Consejo de Guerra".

Ese mismo día el general Escobedo designa presidente del Consejo de Guerra al ciudadano teniente coronel Platón Sánchez; y unas cuantas horas después el mayor general J. Hipólito Sierra designó como vocales al comandante capitán José Vicente Ramírez, comandante capitán Emilio Lojero, capitán Ignacio Jurado, capitán Juan Rueda y Auza, capitán José Verástegui y capitán Lucas Villagrana.

Ese mismo día se notificó a las personas designadas su nombramiento y a los defensores se les hizo saber lo anterior.

En la orden general de la plaza de Querétaro, del 12 al 13 de junio de 1867, se dio a conocer que a las ocho de la mañana del día 13 se

celebraría el Consejo de Guerra para juzgar a Maximiliano, Miramón y Mejía.

Iniciado éste, tomó la palabra el licenciado Próspero C. Vega, defensor del general Tomás Mejía, quien pronunció una larga exposición en que fundamentalmente se trató de señalar el modesto origen del acusado, su talento, lealtad a sus convicciones políticas y generosidad con los adversarios vencidos.

Termina la exposición en forma patética de esta suerte:

No mataréis al señor Mejía, no, porque sois agradecidos y no podéis mandar al infamante patíbulo al que supo conservar vivos a vuestros más caros compañeros de armas. ¡Don Tomás Mejía, caudillo reaccionario, salvando siempre la vida de los liberales, y nosotros los liberales no habíamos de salvar la suya! ¡Oh! ¡qué desventajosa fuera para nosotros la contraposición! ¡qué paralelo tan difícil de sostener satisfactoriamente de nuestra parte! ¡No lo permita Dios!

Seguía en el uso de la palabra el licenciado Jáuregui, defensor del general Miramón, quien inició su intervención llamando la atención sobre que es hermano de uno de los mártires de Tacubaya y liberal convencido; que más que defender al general Miramón en realidad venía a defender a la patria, "al pedir el exacto cumplimiento de la Constitución federal que defendemos como la piedra en que descansa nuestro edificio social y por el que hemos peleado a tanta costa. Vengo, no a substraer delincuentes de la pena merecida, sino a que las formas en que consisten las garantías del hombre vayan conformes con el final objeto de la sociedad. Vengo a demostrar que soy verdadero demócrata, y cómo entiendo la democracia. No me saldré un punto de la Constitución estableciendo mis preliminares".

Con objetividad defiende a Miramón de participación en la intervención francesa y concluye pidiendo lo siguiente:

Prisionero después de haber rendido su espada, no se encuentra en el caso de aquellos que se cogen en el calor del combate, y de cuya vida se puede disponer en el acto si se le considera como enemigo peligroso todavía; todos los demás pertenecen a la humanidad según las leyes de la guerra. Escuchemos a la fría razón, y mi defendido se habrá salvado.

Ella mediante, suplico al Consejo se sirva absolver del cargo de traidor a la patria en guerra extranjera, a don Miguel Miramón, e imponerle la pena extraordinaria que merezca por su conducta como partidario en la guerra civil, con arreglo al artículo 48, tratado 8º título 5º de la orden general del ejército, lo cual es de hacerse en estricta justicia que protesto con lo necesario, etc.

A continuación hizo uso de la palabra el señor licenciado A. Moreno, quien examinó la serie de cargos presentados contra el general Miramón. En un alegato débil, principalmente de carácter sentimental, y sobre todo negando seriedad al proceso, e invocando como argumento de mayor peso al juicio que se podría formar en Europa porque se llevara al cadalso al general Miramón.

A continuación se dio lectura al alegato de los defensores de Maximiliano, suscrito por los abogados Eulalio María Ortega y Jesús María Vázquez.

Es una sólida pieza de carácter jurídico, en que se reitera la tesis presentada por los mismos en los días anteriores, en el sentido de que no tiene jurisdicción el Consejo de Guerra, a quien consideran tribunal incompetente; se considera también que la sumaria llevada a cabo no prueba los cargos de que se le acusa.

También se insiste de que se trata de una guerra civil y que "no se puede poner en disputa en el presente siglo, que en el caso de una guerra civil los vencedores no tienen el derecho de quitar la vida a los vencidos; y por lo mismo, sólo queda por examinar si la lucha en que ha sucumbido el señor archiduque Maximiliano tiene los caracteres de una simple rebelión".

Se rechaza el cargo de usurpación de funciones y de filibustero de que se le acusa y se trata de comparar su causa con la de Jefferson Davis; es útil reproducir al respecto los párrafos finales de esta intervención:

Existe en nuestro continente un gran pueblo, maestro profundo en el juego de las instituciones libres, la República de los Estados Unidos y su conducta con Jefferson Davis, usurpador del poder público, como presidente del rebelde Sur, presenta un noble ejemplo qué imitar. Jefferson estaba sujeto al gobierno que procuró derrocar. Maximiliano no había nacido en México, y vino a él creyendo de buena fe ser llamado por la nación para gobernarla. El uno provocó una guerra civil en un país que, desde que había hecho su emancipación política, había gozado de una paz que había llegado a ser proverbial. El otro vino a un país desgarrado hace años por la guerra civil, con la noble intención de procurar ponerle término, y arrebatado por la fuerza de circunstancias ingobernables, se vio arrastrado a tomar parte en la que ya existía. Aquél persiguió cruda y tenazmente a los partidarios del gobierno de la Unión Americana. Éste no sólo toleró, sino que mostró una decidida inclinación, amparó y protegió a sus adversarios políticos, partidarios de las instituciones republicanas. El primero trató de destruir, en el territorio que lo reconocía, los principios adoptados por el gobierno a que intentó sustituirse. El segundo, con la sola excepción del principio monárquico, condición esencial de su existencia política, conservó, defendió y sostuvo, a despecho y disgusto de sus naturales aliados, los principios establecidos por el gobierno constitucional. Sin embargo Jefferson Davis, vencido desde 1865, no ha sido juzgado por un tribunal excepcional, ni por una ley privativa y anticonstitucional, no ha sido privado de las garantías que otorga la Constitución del país cuya paz pública alteró; y después de dos años de vencido, no se ha presentado todavía un acusador público, que en nombre de la ley pida el sacrificio de su cabeza.

Soldados de la República, que acabáis de recoger tanta gloria en los campos de batalla, y de dar días de placer tan inefable a la patria, no manchéis vuestros laureles, no turbéis tan puro regocijo público, abusando de vuestra victoria sobre un enemigo vencido y decretando una ejecución sangrienta, inútil y extraña al noble carácter del compasivo y bondadoso pueblo mexicano.<sup>3</sup>

A continuación el señor Manuel Azpíroz presentó la requisitoria, precisando los cargos contra los acusados. Con objetividad y precisión hace un breve examen de los hechos ocurridos en México a partir de haberse firmado la convención de Londres el 31 de octubre de 1861 y, finalmente, concluye concretando los cargos contra Maximiliano, que por ser poco conocida esta exposición, se reproduce en el capítulo y podrá observarse que resultan trece acusaciones destacándose las siguientes:

Ser instrumento de la intervención francesa en la política interior de México; tomar el título de emperador de México; usurpar los derechos de un pueblo soberano y libremente constituido; haber dispuesto de la fuerza armada con los intereses y los derechos y la vida de los mexicanos; ser responsable por los excesos cometidos por el ejército francés en nombre del imperio; haber utilizado los servicios de extranjeros que no estaban en guerra con la República; ser autor del célebre decreto del 3 de octubre de 1865 y haberlo mandado ejecutar; haber afirmado el 2 de octubre de 1865 que el gobierno republicano había abandonado el territorio nacional y que en vista de eso los patriotas constituían "bandas de salteadores" y deberían ser tratados, como por su decreto antes mencionado lo dispuso; haber continuado la guerra aún después de haberse retirado el ejército francés; el no abdicar y pretender que se conservara una sucesión dentro del mundo imperial; el pretender que se le den consideraciones como "soberano vencido en guerra justa"; negarse a reconocer la autoridad de la ley del 25 de enero y la competencia del Consejo de Guerra y, por último, "la contumacia y

---

<sup>3</sup> Causa de Fernando Maximiliano de Habsburgo, que se ha titulado emperador de México y sus llamados generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. México, 1907, Ángel Pola, editor, p.p. 418 y 419.



rebeldía en que ha incurrido, por no haber querido declarar, ni responder a los cargos que le hizo el fiscal".

Es digno de atención el análisis que este último hace de estos cargos y la justificación que ofrece, para fundarlos.

Contra el general Miramón concreta sus cargos en lo siguiente:

Respecto de Miramón son notables: su reincidencia en la rebelión contra el gobierno (fojas 13, 25 vuelta, 26, 26 vuelta); su infidelidad cuando como militar servía al gobierno emanado del Plan de Ayutla y se pasó a los pronunciados de Zacapoaxtla (foja 25 y 26); el haberse abrogado el supremo mando de la nación (fojas 27 y 28); el no haber reprimido a Márquez por los asesinatos que cometió en Tacubaya el 11 de abril de 1859, en prisioneros de guerra, en médicos que asistían a los heridos y en un ciudadano pacífico, siendo al mismo tiempo ordenado por él el fusilamiento de los oficiales del ejército que habían pasado a servir al gobierno constitucional (fojas 28 vuelta); el de haber ocupado, con el título de presidente que se abrogó, los fondos de la convención inglesa, con violación de los sellos de la legación británica (fojas 29 frente y vuelta); el haberse puesto bajo el amparo de la intervención extranjera, a principios de 62, para eludir el castigo que merecía por sus delitos anteriores (fojas 30 vuelta); y el haber hecho armas contra la República y en defensa de la usurpación de Maximiliano, en Zacatecas, San Jacinto y la Quemada (fojas 13 y 32 vuelta).<sup>4</sup>

Al referirse a Mejía le hace los siguientes cargos:

Mejía en particular es responsable por su obstinación en no reconocer y en hacer la guerra al gobierno legítimo de la República (fojas 7 vuelta, 8 frente y vuelta, 9, 21, 22 y 45), y por haber hecho armas en defensa del llamado imperio contra las

---

<sup>4</sup> *Causa de ... Ob. cit.*, pp.. 444 y 445.

Instituciones Republicanas en San Luis el 27 de diciembre de 1863 y después en Matehuala (fojas 10 vuelta).<sup>5</sup>

Todavía refuerza estos cargos el fiscal contra Mirarmón y Mejía al señalar como "circunstancias agravantes de los delitos que han cometido contra la independencia y seguridad de la nación y contra la paz pública y el orden".

Concluye su larga requisitoria pidiendo se les aplique la ley de enero de 1862 y se les condene a ser pasados por las armas.

Se concedió el uso de la palabra a los defensores presentes para que impugnaran la requisitoria del fiscal con nuevos alegatos; los licenciados Moreno y Vega, defensores del general Tomás Mejía, presentaron protestas por hechos que consideraron indebidos. A continuación, y siendo la una de la tarde del día 14 de junio, pasó el Consejo de Guerra a deliberar.

Los defensores Ortega y Vázquez informaron de lo anterior a Riva Palacio y Martínez de la Torre y horas después le hicieron saber por telégrafo que las deliberaciones del Consejo de Guerra habían terminado a las once y media de la noche y que son pesimistas sobre la decisión final.

El acta del Consejo de Guerra, que figura en este capítulo, muestra que por unanimidad de votos se resolvió condenar a la pena de muerte a Fernando Maximiliano por "delitos contra la nación, el derecho de gentes, el orden y la paz pública"; respecto de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía como responsables "de los delitos contra la nación y derecho de las gentes" con la agravante de haberse cogido *in fraganti*, en acción de guerra. Obsérvese que aun en el proceso, no se hace especial referencia, la sentencia considera que Maximiliano se entregó y no fue capturado *infraganti*, no obstante que se le aprehendió junto con los generales Mejía y Severo Castillo en el Cerro de las Campanas.

---

<sup>5</sup> *Causa de ... Ob. cit.*, p. 445.

En el proceso figura el voto justificado de cada uno de los miembros del Consejo de Guerra, todos ellos resolviendo la condena.

Puesto el expediente a la consideración del general Escobedo en sus funciones de juez, lo turnó a su asesor licenciado José María Escoto, quien produjo un razonado análisis de la sumaria y del Consejo de Guerra para llegar finalmente a la conclusión de que:

encontrando perfectamente fundada la sentencia que el Consejo de Guerra ordinario pronunció el 14 del corriente contra los reos de esta causa, ser de opinión que confirmándose en todas sus partes por los fundamentos en que se apoya, se condena a la pena capital a los reos Fernando Maximiliano de Habsburgo, llamado emperador de México y sus llamados generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía.

En breve nota fechada el 16 de junio el general Escobedo se conforma con el dictamen de su asesor y devuelve el expediente al fiscal para su ejecución.

Los defensores de los tres procesados recurrieron al asesor para emitir opinión sobre la sentencia, toda vez que ya se le supone no "tiene la imparcialidad necesaria para consultar en la revisión". El licenciado Azpíroz, fiscal de la causa, con muy buen juicio aconsejó al general Escobedo que se asesore de otro abogado para "mayor garantía de los reos y para la justificación de los procedimientos".

Es probable que el licenciado Azpíroz no haya quedado satisfecho de la decisión del general Escobedo de no aceptar la acusación del licenciado Escoto y que por ello haya renunciado o el general Escobedo lo haya separado; lo cierto es, y ello aparece en el proceso, que "estando impedido el C. fiscal para seguir conociendo la causa" se designó en su lugar al general Refugio González.

El nuevo fiscal notifica la sentencia a Miramón, quien la considera injusta y anticonstitucional y anuncia que la recusarán sus defensores ante la suprema autoridad del país; Maximiliano se dio por enterado y

contestó "que estaba pronto" y finalmente el general Mejía se dio por informado y nada comentó.

Mientras tanto en San Luis Potosí, al conocer la sentencia rápidamente los defensores Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre presentaron al presidente, el 15 de junio, una solicitud de indulto en que fundamentalmente se señala la conveniencia de dar una muestra de generosidad.

El general Ignacio Mejía, como secretario de Guerra, da respuesta a la petición anterior, indicando que no es posible considerarla mientras no esté ratificada la sentencia por el juez competente.

Al saber la decisión del general Escobedo, el día 16 de junio Riva Palacio y Martínez de la Torre presentan la postrera petición de indulto en que, además de razones de carácter público, se busca tocar la fibra sensible, recordándole a Juárez a su familia y también mencionando a la madre de Maximiliano y a "la desventurada princesa Carlota".

Ese mismo día el ministro de Guerra, Ignacio Mejía, da a conocer la decisión final del gobierno, negando el indulto a Maximiliano "por oponerse a este acto de clemencia las más graves consideraciones de justicia y necesidad de asegurar la paz de la nación". Apesadumbrados Riva Palacio y Martínez de la Torre se lo comunican a los defensores que han quedado en Querétaro.

No hemos localizado en la documentación y publicaciones consultadas la solicitud de indulto presentada por el defensor del general Miramón, pero a ella se refiere el general Ignacio Mejía, al comunicar al general Escobedo el domingo 16 de junio que se ha negado el indulto y que aplaza la ejecución hasta el próximo miércoles 19 de ese mes.

El lunes y martes se hicieron diversos esfuerzos por los defensores de Miramón y Mejía para obtener el indulto. Un grupo de señoras de Querétaro por telégrafo lo solicitaron, así como otro grupo de damas de San Luis Potosí.

El defensor del general Mejía, abogado Próspero Vega, se trasladó a esta última ciudad, y a su gestión recibió respuesta negativa.

La noche del martes 18, llegó también a San Luis Potosí la esposa del general Miramón. Llamó a los señores Riva Palacio y Martínez de la

Torre y les pidió solicitaran que el presidente Juárez le concediera una audiencia.

Juárez, según relato de estas personas, contestó textualmente: "Excúsenme ustedes de esta penosa entrevista, que haría mucho sufrir a la señora con lo irrevocable de la resolución tomada".

En esa entrevista, Martínez de la Torre, al despedirse de Juárez, en forma emocionada le dijo:

Señor presidente; no más sangre; que no haya un abismo entre los defensores de la República y los vencidos; que la necesidad imperiosa de la paz sea satisfecha por el perdón que la aproxima. No habla a usted, señor presidente, el defensor de Maximiliano; lo veo en la tumba como a Mejía y a Miramón. Soy un hombre que ama con delirio a su patria, y ella me inspira esta súplica. Que no se nuble el porvenir de México con la sangre de sus hijos; que la redención de los extraviados no sea a costa de la vida de algunos porque el luto de las familias sería para el partido vencedor el negro reproche de la libertad triunfante.

Juárez, con la serenidad y ponderación de un estadista, contesta con frases que por fortuna la historia recogió:

Al cumplir ustedes el encargo de defensores han padecido mucho por la inflexibilidad del gobierno. Hoy no pueden comprender la necesidad de ella, ni la justicia que la apoya. Al tiempo está reservado apreciarla. La ley y la sentencia son en el momento inexorables porque así lo exige la salud pública. Ella también puede aconsejarnos la economía de sangre, y este será el mayor placer de mi vida.<sup>6</sup>

Y así fue; el gobierno republicano, después de realizar con dolor unos necesarios castigos de ejemplaridad, fue generoso con los vencidos.

---

<sup>6</sup> *Memorándum sobre el proceso de ... Ob. cit., p. 85.*

Simultáneamente y como resultado de gestiones del barón de Magnus, quien a pretexto de que los condenados tuvieran algún tiempo para tomar decisiones de carácter familiar y en realidad esperando que llegara del exterior alguna presión de las grandes potencias, se resolvió que la ejecución que debería llevarse a cabo el domingo 16 de junio por la tarde se transfiriera hasta el miércoles 19.

Por las dificultades de comunicación de la época, se hicieron los preparativos para llevar a cabo el fusilamiento el domingo, y el mensaje aplazando la ejecución llegó en los momentos en que se preparaban los presos a salir hacia el cadalso.

Es dramático el mensaje de los defensores de Maximiliano. Ortega y Vázquez, que transmitieron el domingo 16:

Los tres acusados se habían ya confesado y comulgado cuando llegó la orden de suspensión. Habían, pues, muerto ya moralmente en ese momento en que debían ser sacados para ejecutarlos. Sería horrible darles segunda vez muerte el miércoles, después de haber muerto hoy una primera.

Ese mismo día, con una sorprendente tranquilidad, Maximiliano pidió al señor Carlos Rubio, acaudalado residente de Querétaro, que facilitara dinero al doctor Basch, su médico de cabecera, para el embalsamamiento y traslado de su cadáver a Europa.

También dejó escrita el día 18 una carta al general Escobedo, manifestando su deseo de que el doctor Basch recibiera su cadáver para que fuera embalsamado y conducido a Europa.

Todo era ya inútil, la escena final de la tragedia estaba a la vista y sin embargo Maximiliano, con una gran tranquilidad, envió a Juárez un dramático telegrama pidiendo la vida de Miramón y Mejía, y aceptando resignado el cumplimiento de la condena en su contra.

También Maximiliano escribió, el 18 de junio, cartas a cada uno de sus defensores, agradeciendo las gestiones llevadas a cabo a su favor.

El general Miramón escribió, a su vez, a su defensor licenciado Jáuregui, una sentida carta en que le agradece sus esfuerzos por salvarle y

le pide le defienda del cargo de traidor. En forma dramática, mencionando el hecho de que está próximo a morir, ratifica que la orden que dio se refería a fusilar a los jefes y oficiales aprehendidos en Tacubaya y no a los médicos y particulares.

El sacerdote Manuel de Soria y Beña, monje del Oratorio de San Felipe Neri en Querétaro, fue llamado el 15 de junio por la tarde para que recibiera su "confesión sacramental", pero no se llevó a cabo esa confesión, sino hasta el día siguiente por la mañana y recibió el viático.

El padre Soria, en relato que hizo al doctor Agustín Rivera, explica el origen de la carta al Papa, que se incluye en este capítulo:

El día 17 tratamos de una carta que había de dirigir al Santo Padre, pidiéndole perdón de todas las faltas que había cometido como emperador católico; él se prestó luego a ello de muy buena voluntad, y me dijo: «Redacte usted la carta y yo afirmo». Yo le dije que era mejor que la redactara él para que expresara espontáneamente sus sentimientos; mas él insistió en que la redactara y yo accedí. Al día siguiente, en la mañana, le llevé el borrador de la carta y al llegar a las palabras «su humilde hijo» me dijo: «obediente, obediente, escriba usted», y levantándose de su asiento, me dio un abrazo, diciendo: «¡Excelente!, ¡excelente! Solamente agregue usted que le suplico a Su Santidad que se digne decir una misa por mi alma». Escribí la carta con las adiciones hechas por Maximiliano, el cual la firmó y yo me la eché en el bolsillo para remitirla a Roma<sup>\*</sup>.

Maximiliano se superó en las últimas horas de su vida, consciente de que su destino lo había llevado por una ruta equivocada y quiso morir con dignidad. En las primeras horas del día de su fusilamiento, antes de que apareciera la luz del sol, dictó una carta patética y solemne para el

---

<sup>\*</sup> Agustín Rivera. *Anales Mexicanos. La Reforma y Segundo Imperio*. México, 1963, p. 342.

presidente Benito Juárez. Envío copia de esta carta a cada uno de sus defensores, firmándola con mano segura.

Gracias a la generosidad del señor licenciado José I. Conde podemos disponer de una copia de la carta que aparece entre los papeles del señor Carlos Sánchez Navarro. Es la primera vez que se publica esta reproducción.

Los licenciados Riva Palacio y Martínez de la Torre, comentando esta carta, dicen: "Llamaremos última expresión de su sentimiento; el adiós a sus adversarios, a quienes conjuró a que hagan el bien de su patria reconciliando a los mexicanos".

Llegamos al epílogo de la tragedia: a las siete horas cinco minutos del 19 de junio se cumplió la fatal sentencia sobre Maximiliano, Miramón y Mejía.

En el capítulo se incluye el acta, atestiguando este hecho, que firman el general Refugio González, fiscal sustituto, y el sargento segundo de ambulancia Félix Dávila, a quien también se le nombró escribano.

Estas mismas personas relatan con seriedad y objetividad los últimos momentos de Maximiliano, por lo que vale la pena reproducir sus expresiones.

Marchó a la muerte con la serenidad de quien cree que cumple con un fatal destino. Lloró, por muerte, a la princesa Carlota unos días antes; e insensible después a su propio infortunio, lo fue también para impresiones que antes lo hubieran conmovido. La muerte de la princesa la creyó y dio por cierta. Despertó en su corazón el sentimiento de un inmenso bien perdido, y regó con llanto una memoria santa y triste en todas las vicisitudes de la vida. Eran los últimos días de su existencia, y la noticia de esa muerte, que nadie sabe quién esparció, produjo en su espíritu, herido por la pérdida de una mujer a quien tributó un culto de respeto y afecto, una reacción de cierta indiferencia o filosófica resignación. Dijo, que la mano de Dios le mandaba un lenitivo en



su desgracia: que la muerte de la princesa Carlota le daba más valor para despedirse del mundo.

Antes de morir dio a cada uno de los soldados, encargados de disparar sobre él, un Maximiliano de oro, moneda de a veinte pesos. Abrazó a sus compañeros de infortunio, y dijo con voz sonora: «Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!».

Estas son las palabras que alguna persona fidedigna nos dijo fueron las últimas del desgraciado archiduque; pero en el público se le ha atribuido esta alocución de despedida: «¡Mexicanos! Las personas de mi clase y origen son nombradas por Dios, o para la felicidad de los pueblos, o para ser mártires. Llamado por parte de vosotros, vine para el bien del país; no vine por ambición; vine animado de los mejores deseos por el porvenir de mi patria adoptiva, por el de los valientes a quienes antes de morir agradezco sus sacrificios. ¡Mexicanos! que mi sangre sea la última que se derrame, y que ella regenere este desgraciado país».<sup>7</sup>

Con tranquilidad, sin ningún rencor Juárez escribe a Santacilia el día 17 de junio informándole que ha sido denegado el indulto a los condenados y que serían fusilados dos días después.

Ese mismo día escribe al general Ramón Corona y explica por qué, pese a las diversas peticiones que se hicieron para indultar a Maximiliano, Miramón y Mejía, el gobierno resolvió ejecutarlos.

Pocas horas después del fusilamiento el barón de Lago, ministro de Bélgica ante el imperio, pidió se le entregara el cadáver de Maximiliano, lo que se le negó porque previamente se habían dado instrucciones al general Escobedo para que dispusiera que el cadáver fuera embalsamado y conservado bajo la vigilancia de la autoridad; en cambio, que si los

---

<sup>7</sup> *Memorándum sobre el proceso de... Ob. cit.*, pp. 88 y 89.

deudos de los generales Miramón y Mejía pedían sus cadáveres, se les entregaran.

El barón de Magnus insistió, días después, sobre lo mismo, en igual forma el doctor Samuel Basch, y a todos ellos se les contestó en forma negativa, justificando la decisión por graves consideraciones que el gobierno se reservaba.

Juan José Baz, al enterarse del fusilamiento de Maximiliano, escribe desde México a Juárez pidiéndole disculpas por la carta que le había escrito un mes antes culpando al gobierno de timidez y falta de energía para juzgar y castigar a Maximiliano y demás importantes jefes aprehendidos.

Al reproducir documentos tomados del expediente del proceso, que fueron transcritos por Ángel Pola, encontramos que los escribanos, personal improvisado, abusaron de los guiones y mayúsculas; además la puntuación es sumamente complicada. No habiendo tenido a la vista el expediente original del proceso, se dificultaba hacer cualquier cambio de presentación; preferimos dejar el texto como lo transcribió Pola.

# **DOCUMENTOS**

**Mayo y junio**  
**De 1867**

## PRIMER INTERROGATORIO A MAXIMILIANO

(Querétaro, mayo 24 de 1867)

En seguida trasladado el ciudadano fiscal conmigo, el escribano, a la prisión militar, establecida en el ex convento de Capuchinas, hizo comparecer ante sí y el escribano que suscribe, a uno de los presos quien preguntado por su nombre, origen, edad y demás generales de la ley.

Respondió que está pronto a contestar a todo con franqueza y lealtad, pero que le parece de su deber observar que en el caso de un proceso, cree deber tener, conforme a la ley, el derecho de pedir que se le presente la acusación formulada por escrito que se haya hecho de él y el término de tres días para estudiarla y elegir abogado que le defendiese y, en segundo lugar, que no cree competente al Consejo de Guerra para juzgarle, porque los cargos que podrían hacérsele son del orden político y porque la posición que ha tenido en el país, desde hace tres años, le pone según cree fuera de la competencia de un tribunal militar. Añadió y pidió que no se tomen sus palabras, ni el no haber contestado categóricamente a la pregunta que acaba de hacérsele, como efectos de falta de calma o de ideas pequeñas, sino de derechos que juzga tener y usa en su defensa legal.

El ciudadano fiscal dijo entonces al preso que tenía delante que aceptaba el ofrecimiento que acababa de hacérsele de responder a todo con franqueza y lealtad y, en tal virtud, por segunda vez le preguntó por su nombre, origen, edad y demás circunstancias de ley, a lo que respondió el preso:

Que se llamaba Fernando Maximiliano José, nacido en el Palacio de Schönbrunn, cerca de Viena, el 6 de julio de 1832, como archiduque de Austria, príncipe de Hungría y Bohemia, conde de Habsburgo y príncipe de Lorena y que llevó desde tres años ha, hasta la publicación de

su abdicación, el título de emperador de México con el nombre de Maximiliano.

Preguntado por el motivo y circunstancias de su prisión, respondió que cree está preso por haber sido emperador de México y que las circunstancias del acto de su prisión fueron las siguientes: que en el Cerro de las Campanas, considerando que la prolongación del combate habría sido causa de que se derramase más sangre inútilmente, hizo enarbolar bandera blanca y tocar parlamento; en cuya consecuencia vino un general, cuyo nombre no recordaba, a quien se entregó para que lo condujese a la presencia del general en jefe de los sitiadores, el cual lo excitó a que rindiera la espada como lo hizo en sus manos el declarante.

Preguntado por qué motivos vino al país.

Respondió: que siendo ésta ya una cuestión política, cree no poder contestar sin consultar previamente documentos relativos que tiene en su poder.

Interpelado para que diga lo que recuerde con exactitud respecto de los motivos de su venida a México.

Respondió: reproduciendo el dicho anterior.

Vuelto a interpelar para que responda categóricamente sobre los motivos de su venida al país hasta donde se lo permita la memoria.

Respondió: que siendo esta una cuestión política, cree que su conciencia no le permite responder a ella ante un juez militar ni antes de consultar los papeles que ha dicho.

Preguntado dónde existen los documentos o papeles a que se refiere.

Respondió: que según las órdenes que dio deben estar hoy en las manos del ministro de Prusia, acreditado cerca de él y residente en México.

Preguntado por qué título se ha llamado emperador de México.

Respondió en los mismos términos que antes, por ser ésta también una cuestión política.

El ciudadano fiscal, en vista de su negativa, le formuló por otras dos veces la pregunta anterior y, en ambas, Maximiliano dio una respuesta idéntica a la que precede.

Entonces pasó el fiscal a preguntarle: por qué motivo había hecho la guerra a la República Mexicana.

A lo que respondió: que siendo esta pregunta también política no podía contestar a ella por las mismas razones antes expuestas.

El fiscal repitió otras dos veces la misma pregunta y las dos, Maximiliano reprodujo su respuesta.

En seguida, el fiscal lo excitó de nuevo a que contestara a las preguntas hechas y a otras del mismo carácter que debe hacerle, advirtiéndole que su contumacia no le daría más resultado que renunciar él mismo a su defensa y poner al juez en el caso duro pero inevitable de juzgarle en rebeldía, conforme a las leyes generales de México y a las particulares que deben gobernar la formación de este proceso; esto es, tanto las del fuero común como las militares; a lo que Maximiliano respondió, repitiendo, que la conciencia y la falta completa de documentos no le permiten contestar a preguntas meramente políticas, por ahora; tanto menos cuanto que no cree poder atribuir competencia para juzgarlo a un tribunal militar. Y no pudiendo adelantar más el fiscal en la averiguación presente, la dio en este punto por suspensa y concedió a Maximiliano un término que se vencerá mañana a las diez del día, para volverlo a interrogar después del tiempo necesario para la meditación. Y para que conste lo firmó con Maximiliano y el escribano que suscribe.

Manuel Azpíroz

Maximiliano

Ante mí,  
Jacinto Meléndez

## SEGUNDO INTERROGATORIO DE MAXIMILIANO

(Querétaro, mayo 25 de 1867)

En la misma fecha volvió el fiscal acompañado de mí, el escribano, al separo de Fernando Maximiliano, a fin de evacuar la declaración que ayer quedó suspensa y teniendo presente. —Preguntado si ofrecía decir verdad en lo que supiera y fuera interrogado.

Respondió: que sí lo ofrecía en todas las preguntas que no fueran políticas, pero que en las que tendrían este carácter no podría por ahora contestar por las mismas razones emitidas ayer. Añadiendo que, por ignorar la legislación porque se le juzgaba, necesitaba tener a la vista las leyes que sobre el particular había dictado el señor presidente Juárez y, sobre todo, necesitaba de persona o personas inteligentes que lo dirigieran en este asunto de tan grave importancia, por lo que deseaba que se le proporcionasen estas leyes y se le permitiera nombrar defensor o defensores; que, entretanto, no debían pararle en perjuicio estas actuaciones; que no renunciaba ninguna excepción o privilegios y, antes bien, dejaba expresamente a salvo todos los recursos que el derecho le concedía, incluso el de incompetencia.

El ciudadano fiscal, antes de encargarse de los puntos que contenía la petición y protesta que precedían del interrogado, le amonestó por dos veces para que declarase a las preguntas que tenía que hacerle sobre asuntos de política, apercibiéndole de los efectos de su contumacia en los propios términos que le había apercibido y amonestado ayer y, no logrando que Fernando Maximiliano se dispusiera a responder, excusándose en los mismos términos que repetidas veces se había excusado, el fiscal dio por concluida la práctica de esta diligencia preparatoria y pasando a encargarse de la solicitud y protesta que, quedaban sentadas, el fiscal puso en las manos de Maximiliano el tomo



III de la Ordenanza General del ejército, la ley de 15 de septiembre de 1857 y la de 25 de enero de 1862 y le ofreció buscar y facilitarle las demás leyes que juzgaría necesarias. En cuanto al permiso que pedía Maximiliano para nombrar defensor o defensores, el fiscal hizo notar que ya había sido otorgado y que, en consecuencia, se había dado curso al telegrama dirigido en la noche anterior al barón de Magnus y que conservaba Maximiliano la facultad de hacer nuevo nombramiento de defensores, sin perjuicio de correr, para la práctica de estas actuaciones, el término fijado por la ley de 25 de enero de 62, que daba al fiscal 60 horas para la instrucción del proceso y 24, en seguida, para la evacuación de la defensa.

En cuanto a la excepción de incompetencia y protesta de emplear otras excepciones y usar de los derechos y privilegios que podían favorecer al procesado, el fiscal manifestó que no podía hacer otra cosa que consignarlas, como ya las había consignado, para que surtiesen los efectos legales, sin perjuicio de continuar este proceso como estaba obligado a verificarlo, en cuya virtud procedía ahora a tomar a Fernando Maximiliano la confesión con cargos que según derecho correspondía. Y pava que constara firmaron esta acta Maximiliano, después de haberse ratificado en cuanto constaba en ella haber dicho, con el fiscal y el escribano.

Manuel Azpíroz

Maximiliano

Ante mí,  
Jacinto Meléndez

CONTINUACIÓN DEL INTERROGATORIO.  
CONFESIÓN CON CARGOS

(Querétaro, 25 de mayo de 1867)

El ciudadano fiscal preguntó a Maximiliano si quería hacer nuevo nombramiento de defensor o defensores, a lo que el interrogado respondió que, por ahora, se atenía al nombramiento que había hecho en la noche y recayó en los licenciados Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, residentes en México. El fiscal le advirtió que, si pasado el término legal para dejar el proceso en estado de defensa, no se hallaban presentes en esta ciudad los abogados elegidos y manifestado la aceptación de su nombramiento, el procesado podría nombrar defensor o defensores de entre las personas residentes en esta ciudad o dejar al fiscal que se los nombrase de oficio.

Preguntado en seguida Maximiliano si prometía decir verdad en lo que supiera y fuera interrogado.

Respondió repitiendo que sí, en todas las cuestiones que no fueran de política.

Preguntado sobre el cargo que le resultaba por haberse prestado a ser el principal instrumento de la intervención francesa para llevar a cabo los planes de ella, que fueron los de alterar la paz de México por medio de una guerra injusta en su origen, ilegal en su forma, desleal y bárbara en su ejecución, para levantar en México al partido que siempre había sacrificado los intereses y derechos nacionales para satisfacer los suyos particulares y que ya estaba vencido e impotente para levantarse de nuevo sin auxilio de armas extranjeras; para destruir al gobierno constitucional Republicano elegido por la nación, establecido y expedito en el ejercicio de todas sus funciones, reconocido por las potencias extranjeras y hasta por los mismos invasores franceses; para sustituir a la

República una monarquía que secundase la política de Napoleón III, dirigida a contrariar la democracia americana y a favorecer bastardos intereses del gobierno francés y de hombres que, como Jecker, no habían tenido otro propósito que el de obtener tan torpe como inicua ventajas de la guerra que se había llamado de intervención; cuyos hechos que constituían este primer cargo, así como los demás que formaban los cargos siguientes estaban de pública universal notoriedad. A lo que Maximiliano respondió: que por ser ésta una cuestión meramente política, se refería a las contestaciones que había dado. El fiscal, previas las amonestaciones ya empleadas, formuló el cargo que acaba de hacer a Maximiliano otras dos veces, sin obtener otra contestación que la ya expuesta.

Preguntado Maximiliano y excitado a que contestara al cargo que le resultaba de haber venido a secundar y poner en práctica, en la parte que le correspondía, las miras ya indicadas del gobierno francés, sin más títulos que la fuerza armada del mismo gobierno algunos votos que había pretendido llamar expresión de la voluntad nacional, a pesar de que en la forma y en la sustancia adolecían de vicios que a nadie podían ocultarse; pues que constituido como lo estaba aún el pueblo mexicano por su Carta Fundamental de 1857, la única expresión legítima de su voluntad soberana era la que estaba definida en la misma Carta y arreglada por las leyes electorales de conformidad con ella, siendo la forma establecida por dicha suprema ley y los reglamentos respectivos, la única legítima para conocer la soberana voluntad del pueblo mexicano y no los votos de algunas personas constantes en las actas levantadas en algunos pueblos y en la de la extraña, diminuta e incompetente Junta de Notables, que se habían tenido maliciosamente como la genuina manifestación de la voluntad del país y se había pretendido que sirviesen de título legítimo al llamado imperio mexicano y porque, cualquiera que fuese la forma adoptada para la proclamación de la monarquía y de Maximiliano, los votos recogidos en presencia y bajo la presión de las armas francesas, no podían ser considerados como la emanación deliberada y espontánea de la voluntad del pueblo. La falsificación de esta voluntad para el establecimiento del imperio estaba ya prevista por nacionales y

extranjeros desde el principio de la guerra de intervención, pues estaban del mundo conocidas y fueron desde entonces denunciadas por la prensa de Europa y de América las gestiones de algunos malos mexicanos como Almonte y Gutiérrez Estrada y los trabajos diplomáticos del gabinete de las Tullerías para derrocar a toda costa al gobierno republicano de México y fundar por medio de la fuerza una monarquía mexicana, a cuya cabeza había resuelto poner el gobierno francés a un príncipe que aceptase la corona y puso, en efecto, al príncipe que estaba presente.

Respondió lo mismo que con ocasión del cargo anterior, manifestando que no sería otra cosa su respuesta a los demás cargos que se le hicieran, si tenían el carácter de cuestiones políticas. El fiscal repitió otras dos veces el último cargo hecho y pasó a formular al procesado el tercer cargo: De haber aceptado voluntariamente el archiduque Maximiliano la responsabilidad de un usurpador de la soberanía de un pueblo, independiente y libremente constituido; responsabilidad severamente condenada por la legislación de todas las naciones y prefinida en varias leyes de la República Mexicana, de las cuales la última es la de 25 de enero de 1862, vigente hasta ahora.

El fiscal repitió otras dos veces este cargo y pasó a hacer al procesado el cuarto cargo: De haber dispuesto, con la violencia de la fuerza armada, de las vidas, de los derechos e intereses de los mexicanos.

El fiscal repitió el cargo otras dos veces y pasó a hacer el quinto cargo: De haber hecho Maximiliano la guerra a la República Mexicana al lado y aun bajo la dirección, en muchos casos, del general en jefe del ejército francés, ejecutando, autorizando o consintiendo las vejaciones y los horrores de todo género que se pusieron en práctica para oprimir al pueblo mexicano e imponerle la voluntad del príncipe elegido en los consejos del soberano francés para dominar a México.

El fiscal hizo aquí notar el espantoso número de ejecuciones de muerte a que fueron condenados, en nombre de Maximiliano, por las cortes marciales los mexicanos que defendían la causa de la República y los saqueos e incendios de pueblos enteros en todo el territorio mexicano, especialmente en los Estados de Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Lo repitió el fiscal otras dos veces y pasó a hacer al procesado el sexto cargo: De haber hecho también por sí una guerra de filibusteros, invitando y trayendo a extranjeros de muchas naciones, principalmente austríacos y belgas, súbditos de potencias que no estaban en guerra con la República Mexicana.

Repetido este cargo otras dos veces, el fiscal hizo al procesado el séptimo cargo: De haber fulminado y ejecutado sobre los mexicanos que no se sujetasen a su poder, el decreto del 3 de octubre de 1865, en el cual se hallaban las bárbaras prescripciones de que cualquiera jefe de armas del llamado imperio diese muerte irremisiblemente a los prisioneros, cualesquiera que fuesen el número y la categoría de ellos, la organización y denominación del cuerpo que formasen y la causa que sostuvieran con las armas, sin excluir a los simples acompañantes de la fuerza armada ni a los ciudadanos que le prestasen auxilio directo o indirecto.

Repetido otras dos veces este cargo, hizo el fiscal a Maximiliano el octavo cargo: De haberse atrevido a firmar en su manifiesto de 2 de octubre; que servía como de preámbulo al bárbaro citado decreto, que el personal del gobierno constitucional Republicano había abandonado al territorio nacional, deduciendo de este hecho enteramente falso extrañas consecuencias en favor de su tiranía y para la persecución y vilipendio de los patriotas constantes que defendían la bandera de la República.

Repetido el cargo otras dos veces, hizo el fiscal a Maximiliano el noveno cargo: De haber querido sostener su falso título de emperador después que se retiró de México el ejército francés y cuando vio levantarse contra el pretendido imperio a toda la República, para lo cual se rodeó de algunos de los hombres que se hicieron más famosos por sus crímenes en la guerra civil de México, empleó medios de violencia, de muerte y de desolación, se encerró en esta plaza de Querétaro para detener a los republicanos victoriosos desde las fronteras del norte hasta aquí y no entregó su espada sino cuando, tomada la plaza por los sitiadores con excepción del Cerro de las Campanas próximo a ser también asaltado, en cuyo fuerte se refugió acompañado tan sólo de dos de sus generales y un puñado de otros oficiales, ya no contaba con tropas

que en su totalidad estaban prisioneras o dispersas, ni con elemento alguno para prolongar su defensa.

Reproducido otras dos veces este cargo, el fiscal hizo a Maximiliano el décimo cargo: De haber abdicado el falso título de emperador para que esta abdicación tuviese efecto, no desde luego sino para cuando fuese vencido, esto es, para un tiempo en que, ya no por su voluntad sino por la fuerza, había de quedar despojado con o sin la abdicación del título usurpado de soberano de México.

Hecho otras dos veces este cargo, el fiscal pasó a formular al procesado el undécimo cargo: De pretender aún, según daba a entender, que se le guardara la consideración debida a un soberano vencido en guerra, cuando para la nación mexicana no lo había sido ni de derecho, por la falsedad del título de emperador que se había abrogado, ni de hecho por su impotencia absoluta para sostener su título por fuerzas propias.

A este respecto el fiscal le hizo notar los hechos siguientes: que Maximiliano no había podido establecer la paz bajo su dominación, ni con el auxilio del ejército francés; que de la evacuación completa de México por dicho ejército a la caída de Maximiliano no había pasado más de tres meses; que el gobierno republicano se había mantenido sin interrupción de un solo momento, a pesar de los esfuerzos que los franceses y Maximiliano habían hecho para destruirlo y que la guerra de México contra la intervención francesa y contra el llamado imperio, su hechura, se había hecho también sin interrupción de un solo instante, por más de cinco años y siempre en nombre de la República con autorización y bajo la dirección posible del gobierno republicano.

El fiscal repitió otras dos veces este cargo y pasó a hacer a Maximiliano el duodécimo cargo: De no reconocer la competencia del Consejo de Guerra que establecía la ley de 25 de enero de 1862, para juzgar a los reos de los delitos en ella expresados, delitos que casi en su totalidad había cometido Maximiliano y ley que lo comprendía y le estaba aplicable en todo derecho, porque ya existía cuando él vino a México a cometer los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, contra el derecho de gentes, contra la paz y el orden público y

contra las garantías individuales, estaba vigente y la que había aplicado usando de un derecho incontestable como inherente a la soberanía del país, el gobierno de la República en la guerra que había sostenido en defensa de la independencia nacional, contra la intervención francesa y de su soberanía interior, contra la usurpación de Maximiliano, sin que haya razón para que la ley dejara de cumplirse en este caso.

El fiscal, reiterado otras dos veces el presente cargo, hizo al procesado el décimo tercio cargo: De su contumacia y rebeldía, a pretexto de la pretendida incompetencia del Consejo de Guerra y del general en jefe para juzgarlo, cuando la nación por sus leyes antiguas y modernas había depositado en ellos la administración de justicia en estado de guerra, para juzgar y sentenciar a los que por haber sido en ella vencidos o por otros motivos expresos, quedaban sometidos al fuero militar.

El fiscal le llamó la atención sobre la inconsecuencia en que incurría negando la jurisdicción sobre él al general en jefe a quien él mismo se había rendido a discreción.

Hizo las otras dos veces este mismo cargo, lo requirió de nuevo para que lo contestase, así como a los anteriores; apercibiéndole de nuevo que, por su contumacia y rebeldía, las leyes del país consideraban confeso en el conocimiento de los cargos no contestados a los que rehusaba defenderse o respecto de los que guardaba un silencio inútil y, no habiendo obtenido de Maximiliano otra respuesta que la ya expresada de que no podía contestar a los cargos (que) se le habían hecho por ser todos del orden político y porque no debía conceder, según creía, competencia a un juez militar para el conocimiento de su causa, se dio por evacuada y terminada la presente confesión con cargos que firmaron el fiscal y Maximiliano con el escribano que suscribió.

Manuel Azpíroz

Maximiliano

Ante mí.  
Jacinto Meléndez

MAXIMILIANO PIDE PLAZO AMPLIO  
PARA SU DEFENSA

Querétaro, mayo 25 de 1867

Ciudadano presidente de la República

Señor:

No conociendo bastante el idioma español en el sentido legal, deseo que en el caso de que mis defensores lleguen un poco tarde, se me conceda el tiempo necesario para mi defensa y arreglo de mis negocios privados.

Maximiliano



## LLAMA MAXIMILIANO A SUS DEFENSORES

Telegrama remitido de San Juan del Río, mayo 25 de 1867, recibido en Guadalupe Hidalgo a las nueve y doce minutos del día.

Al barón de Magnus,  
ministro de Prusia en México

Tenga usted la bondad de venir a verme cuanto antes con los abogados don Mariano Riva Palacio y don Rafael Martínez de la Torre u otro que usted juzgue bueno para defender mi causa; pero deseo sea inmediatamente, pues no hay tiempo que perder. No olviden ustedes los documentos necesarios.

Maximiliano

## EXPOSICIÓN VERBAL DE MAXIMILIANO

(Querétaro, 26 de mayo de 1867)

En la misma fecha Maximiliano solicitó la presencia del fiscal, ante quien, así como ante el escribano que suscribe, dijo:

Que oídos por él anoche los cargos que se le hicieron y ahora el procedimiento que por ellos se trata de seguir, pide que se declare formalmente si es considerado como ex emperador, título que le fue concedido en la lista oficial de los prisioneros y por el cual fue reconocido de casi todos los gobiernos del globo o a lo menos como jefe de una parte de la nación a consecuencia de las innumerables actas de adhesión de todos los puntos del país que se encuentran originales en Londres y que jurisconsultos declararon que comprendían la mayor parte de la nación; que, en el caso de no ser considerado como ex emperador, no puede ser tratado de otra manera, que como corresponde a un archiduque de Austria, con cuyo título nació y que ningún poder puede quitarle; que, por lo mismo, apela formalmente a la faz del mundo entero, a la justicia conocida del general en jefe y, después, directamente a la del presidente, para que en el primer caso mencionado lo juzgue el Congreso como la sola autoridad competente para fallar sobre puntos de tanta trascendencia y de tan alta política como envuelve la consideración del que ha sido soberano, puntos que no pueden ser discutidos por jueces meramente militares o para que, en el segundo caso, no se olvide el derecho internacional ni las inmunidades consagradas por él, de que goza en todas ocasiones un archiduque de Austria, quien, en virtud de tales derechos y privilegios, solamente puede ser entregado prisionero a un buque de guerra austriaco.

Añadió y declaró que, en cualquiera caso, no conoce bastante el idioma legal ni las leyes de la República; que le falta salud para defenderse sin la ayuda y dirección formal de buenos legistas, que sean al propio tiempo políticos capaces de juzgar de las situaciones pasadas; que desea y necesita para bien del país una entrevista personal con el presidente, para hablarle de puntos de mucha gravedad; que, teniendo que arreglar negocios de familia que tienen el carácter de internacionales con Austria y Bélgica y habían debido ser concluidos hace mucho tiempo, necesita conferenciar con el barón de Magnus y los representantes de Austria y Bélgica que estuvieron acreditados cerca de su persona; finalmente pidió copia de los cargos que se le hicieron anoche para poder estudiarlos con calma.

El fiscal dispuso que se consignase en el proceso esta exposición de Maximiliano para que, constando debidamente, pueda producir los efectos que de derecho procedan; en seguida, pasando a encargarse de los puntos contenidos en la exposición consignada, sobre los cuales se juzga con derecho a dar una resolución o indicar un medio que llene los deseos de Maximiliano a que ellos se refieren, manifestó: que podía dirigirse al ciudadano presidente de la República en solicitud de la entrevista y llamar a los representantes de Austria y Bélgica que estuvieron acreditados cerca de su persona, así como repetir el llamamiento del barón de Magnus y de los abogados que ha nombrado para que le defiendan o de otros nuevos residentes fuera o dentro de esta ciudad, por el telégrafo o por cualquier otro medio de comunicación, en la forma epistolar privada o en la que más le convenga, valiéndose de alguna persona particular que le sirva de conducto o bien de el del ciudadano general en jefe, cuya buena disposición para servirle, hasta donde alcanzan sus facultades, conoce sin más requisito que dar conocimiento de lo que ejecute sobre estos particulares al fiscal que le dirige la palabra y que se le dará testimonio de la confesión con cargos que solicita y de cualquiera otra pieza de su proceso que necesite; salva, en todo caso, la obligación del fiscal de proseguirlo en la forma y dentro de los términos

que las leyes le demarcan. Enterado de todo lo cual, Maximiliano firmó con el fiscal y presente escribano.

Manuel Azpíroz

Maximiliano

Ante mí,  
Jacinto Meléndez

## DECLARACIÓN PREPARATORIA DE TOMAS MEJÍA

(Querétaro, mayo 24 de 1867)

En seguida el ciudadano fiscal puso incomunicado y separó a Maximiliano y pasó al aposento de otro de los presos, acompañado de mí, el escribano; teniéndole presente le preguntó si ofrece decir verdad en lo que supiere y fuere interrogado y el preso, —Respondió: que sí lo ofrece. —Preguntado por sus generales, —Respondió: llamarse Tomás Mejía, ser natural del Pinal de Amoles, de cuarenta y siete años de edad, viudo, general de división en el ejército que estuvo sitiado en esta plaza. —Preguntado por el motivo y circunstancias de su prisión, —Respondió: que el motivo es el haber sido vencido dicho ejército y, en consecuencia, hecho prisionero el declarante en el Cerro de las Campanas. —Preguntado si sabe por qué causa se le va a poner en Consejo de Guerra, a cuyo efecto se le instruye el presente proceso, —Respondió: que cree que por haber defendido al gobierno imperial. —Preguntado por qué llama gobierno imperial a la causa que dice haber defendido, qué razones ha tenido para tomar las armas en su defensa y hacer la guerra al gobierno republicano establecido desde antes que se inaugurase lo que él llama gobierno imperial, —Respondió: que llama gobierno imperial, a la causa que defendió por haber sido llamado por varios mexicanos el archiduque Maximiliano para gobernar el país con el título de emperador; que tomó las armas en favor del imperio, porque le parecía que éste había de salvar al país de la anarquía en que se encontraba y por lo mismo hacía la guerra al gobierno republicano, como desde antes del imperio ya se la había hecho, por la persecución que dicho gobierno le había declarado. —Preguntado: si sabe por qué aun antes de la venida de Maximiliano y de los franceses, el gobierno republicano le había

declarado la persecución que dice, —Respondió: que por haber defendido siempre al gobierno que en el país se ha llamado conservador. —Preguntado: si cree que ha existido en el país constantemente el gobierno que se ha llamado conservador, de modo que no hubiese dejado de existir ni un solo momento desde que él tomó las armas para hacerle la guerra al que después le ha perseguido, —Respondió: que no cree que haya permanecido constantemente en el país el gobierno conservador; que cuando ha regido al país, el declarante lo ha servido con lealtad; que cuando aquel gobierno ha caído, el mismo declarante ha depuesto las armas, que no ha vuelto a empuñar contra el gobierno que ha sucedido, sino estrechado por la persecución que éste le ha declarado a causa de su conducta anterior. —Preguntado: si nunca ha tenido otro medio que el de tomar las armas para librarse de la persecución del gobierno a quien ha hecho la guerra, —Respondió: que no ha tenido otro medio y que a este respecto refiere lo siguiente: que la última vez que cayó el gobierno conservador y el declarante se hallaba en paz en la sierra, entregadas las armas de que él había dispuesto a los particulares cuyas eran, fue sin embargo en su persecución el general Rosas Landa, enviado por el presidente Comonfort o Juárez, pues no recuerda quién a punto fijo; que el declarante entró en capitulaciones con dicho general, comprometiéndose a recoger de nuevo y entregar al gobierno las armas de la sierra, como lo verificó, sin exigir él, más que la libertad de permanecer en su casa y en paz; pero que el gobierno negó su aprobación a la capitulación referida, envió de nuevo fuerzas en persecución del declarante y de esta manera lo puso en la necesidad de andar prófugo por algún tiempo y, al fin, de volver a tomar las armas, en cuya actitud se ha conservado hasta estos últimos días. —Preguntado: si se acogió a la amnistía que en diferentes ocasiones el gobierno liberal ha concedido al partido que le ha hecho la guerra y principalmente a la amnistía que el mismo gobierno otorgó a sus enemigos al principio de la guerra que los franceses trajeron a la República con el nombre de intervención,— Respondió: que nunca se ha acogido oficialmente a la amnistía del gobierno; pero que en lo privado y a excitativa del señor Doblado, al principio de la guerra con los franceses, ofreció no tomar las armas en

favor de éstos, si la guerra era nacional y peligraba la independencia de México, ofrecimiento que cumplió religiosamente, permaneciendo en la sierra, aunque con las armas en la mano, neutral entre el gobierno y los franceses, por todo el tiempo que el gobierno constitucional ha permanecido en la capital de México y que sólo después que el gobierno ha salido de la capital, ha empleado las armas en favor de la intervención francesa, asegurado de que ésta no tenía por objeto destruir la independencia de México, sino sólo de favorecer al partido o al gobierno que proclamase la nación; que después, juzgando que Maximiliano había sido llamado por la nación, no tuvo inconveniente en defender al imperio, como lo ha hecho hasta aquí. —Preguntado: si juzgó al gobierno constitucional legítimo mientras permanecía en la capital de México y si juzgó después que el mismo gobierno había perdido sus títulos a la legitimidad por su sola separación del lugar de su ordinaria residencia, —Respondió: que nunca consideró legítimo al gobierno constitucional, pues aun antes de la salida de éste de la Ciudad de México, reconocía como legítimo al que representaba don Félix Zuloaga. —Preguntado si dejó de reconocer como legítimo al llamado gobierno de Zuloaga cuando vinieron los franceses o sólo desde que se trató de establecer el imperio en México, —Respondió; que sólo dejó de reconocer a Zuloaga como presidente legítimo desde que fue nombrado emperador Maximiliano, —Preguntado: si creyó que la nación tenía libertad para proclamar el imperio en presencia de las armas francesas, —Respondió: que sí.

—Preguntado: si cree de buena fe que la mayoría de la nación proclamó el imperio y llamó a Maximiliano, —Respondió: que cree que los representantes de una gran mayoría de los habitantes del país se decidieron por el imperio y por Maximiliano, aunque ignoraba si estos representantes estaban competentemente autorizados por los departamentos respectivos. —Preguntado: si después de haberse retirado de México el ejército francés el llamado imperio era a su juicio el gobierno nacional y si en esta creencia permaneció hasta el fin del sitio de esta plaza, no obstante que Maximiliano y su ejército no han podido sostenerse en ninguna parte desde que perdieron el apoyo de las armas de Francia, —Respondió: que reconoció hasta el último momento al imperio

como gobierno nacional y aunque últimamente preveía ya su caída, él, como hombre de honor, se resolvió a sacrificarse y caer con él. — Preguntado: qué mando de armas y qué comisiones públicas ha tenido desde el principio de la guerra de intervención hasta el sitio de esta ciudad, —Respondió: que al principio de la guerra de intervención, como ya ha dicho, sin mezclarse en ella, tenía el mando de las fuerzas de Sierra Gorda; que proclamado el imperio tomó el mando de la división de su nombre, con la cual permaneció hasta su salida de Matamoros, a consecuencia de la derrota que sufrió el general Olvera en las lomas de Santa Gertrudis; que de dicho puerto se retiró con los restos de su división que puso a disposición del gobierno imperial, quedando en receso durante tres meses; que después fue nombrado comandante militar de San Luis Potosí, en cuya comisión sirvió dos meses y se retiró hasta esta plaza, donde entregó el mando que ya tenía del tercer cuerpo de ejército, al general Miramón y que, finalmente, cuando vino el emperador a esta ciudad, recibió el mando de la división de caballería del ejército sitiado. —Preguntado: qué acciones de guerra ha tenido desde que se puso al servicio del llamado imperio, —Respondió: que la defensa de San Luis en veintisiete de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres, la batalla de Matehuala contra el señor Doblado y el sitio de Querétaro. — Preguntado: si tiene que añadir algo a esta declaración, —Respondió: que no y que en ella se ratifica y firmó con el fiscal y el presente escribano.

Manuel Aspíroz

Tomás Mejía

Ante mí,  
Jacinto Meléndez



## CONFESIÓN CON CARGOS DE DON TOMÁS MEJÍA

(Querétaro, 26 de mayo de 1867)

En la mañana del veintiséis se trasladó el fiscal acompañado de mí, el escribano, al aposento de don Tomás Mejía, a quien teniéndole presente dijo: que podía nombrar defensor. El interpelado nombró para que le defienda al licenciado Próspero Vega, residente en esta ciudad.

En seguida el fiscal manifestó a don Tomás Mejía, que debiendo ser puesto en Consejo de Guerra, venía a hacerle los cargos que le resultan de los delitos por (los) que está procesado y antes de verificarlo le puso a la vista las piezas que le conciernen de este proceso. En seguida. —Preguntado don Tomás Mejía sobre el cargo que le resulta de haber hecho constantemente la Guerra al gobierno constitucional de la República, sin que le sirva de excusa que a ello se vio forzado por la persecución que el mismo gobierno le tenía declarada y él no hallaba otro medio de librarse de ella que el de las armas, porque además de otras consideraciones que ocurren sobre la ilegalidad de este medio, hay la de que el declarante incurre en contradicción cuando confiesa que jamás se ha acogido a la amnistía del gobierno, pues este camino de indulto estaba para él abierto, como lo estuvo para muchos, como lo confiesa. El fiscal añadió: que jamás con mayor obligación y honra pudo el procesado acogerse a la amnistía del gobierno, como se acogieron muchos jefes del bando reaccionario, que al comenzar la guerra de intervención que trajeron al país los franceses y, sin embargo, entonces mismo rehusó deponer las armas y contribuyó con su conducta a la realización de los planes de la intervención francesa, —Respondió: que de la amnistía otorgada por el gobierno a sus contrarios antes de anunciarse la guerra de

intervención, fue él expresamente excluido en unión de los señores Miramón y Márquez y con ellos puesto fuera de la ley y, en consecuencia, tenazmente perseguido y que al principio de la guerra de intervención, si bien no se sometió al gobierno, tampoco le hizo la guerra ni tomó parte con los franceses, como lleva dicho en su declaración preparatoria. —Reconvenido por qué no responde al cargo que le resulta de no haberse acogido a la amnistía cuando vinieron los franceses y sí prefirió seguir con las armas sin someterse al gobierno, contribuyendo así de algún modo a la realización de los planes de los invasores, —Respondió: repitiendo, que no había hecho entonces la guerra al gobierno, no obstante que podía hacérsela porque conservaba sus fuerzas y permaneció neutral, como ya ha dicho. —Preguntado: sobre el cargo que le resulta de lo que él llama neutralidad entre el gobierno y los franceses cuando temía, según su propia confesión, que pudiera peligrar la independencia de México por la invasión de éstos, pues su deber como mexicano era el de emplear las armas en defensa de esa independencia que en su, concepto podía peligrar y prefirió conservarlas inútiles contra el invasor, mientras por la actitud que él conservaba distraía la atención del gobierno y era un embarazo, por lo menos, para la defensa de la independencia de México, —Respondió: que esta conducta que se le inculpa, fue tal vez nacida de nuevo de un error de tantos a que están sujetos los hombres, pues creyó que no faltaba a su deber, esperando desengañarse de la existencia de este peligro. —Preguntado sobre el cargo que le resulta de no haber querido reconocer jamás al gobierno constitucional de la República y de haber estado defendiendo o dispuesto a defender siempre al partido que en el país se ha llamado conservador, aun después de haber sido vencido, como cuando se intitulaba presidente don Félix Zuloaga, —Respondió: que no había reconocido como legítimo al gobierno liberal, porque no se había establecido bien en el país y que, por lo mismo, sólo puede hacérsele este cargo por no haberlo reconocido cuando se estableció últimamente y sólo quedaban haciéndole la guerra algunas partidas en la época que se ha mencionado de Zuloaga; pero que entonces se vio obligado, como ya ha dicho, a seguir haciendo la guerra por la persecución que se le hacía y por la conducta que observó el

gobierno con él desaprobando los convenios celebrados con Rosas Landa. —Preguntado sobre el cargo de haber reconocido al llamado imperio de Maximiliano, de haberle servido como instrumento de guerra para la ruina de las instituciones nacionales y para la persecución de los defensores de la República, —Respondió: que reconoció al imperio porque creyó que se lo había dado la nación y entendía también que se retiraban desde entonces los franceses y que el imperio quedaría constituido por la voluntad de los mexicanos. —Reconvenido: cómo dice que creyó que el imperio había sido proclamado por la nación, cuando ha confesado que no estaba seguro de la legitimidad de la representación que pretendieron tener del pueblo mexicano los que dieron sus votos en favor del imperio y cómo era posible que creyera de buena fe que el pueblo mexicano proclamaba el imperio por su libre voluntad, cuando los votos que se recogieron en favor del imperio fueron recogidos en presencia y bajo la presión de las bayonetas francesas, —Respondió: que el sentido de su declaración es que no estaba seguro de la legitimidad de algunos representantes y que tampoco creía que los votos dados en favor del imperio eran arrancados por la fuerza de las armas francesas y que lo que principalmente obró en él fue la confianza que tenía en la buena fe de Almonte y otros personajes, que aseguraban que la intervención francesa no comprometía la independencia nacional y que el imperio era conforme a la voluntad del pueblo mexicano. —Preguntado: si con el transcurso del tiempo no llegó a persuadirse de todo lo contrario, esto es, que la invasión de los franceses atacaba la independencia de México, que el imperio fue rechazado por la nación y que no merecían fe los dichos de Almonte y de las otras personas que lo engañaron, —Respondió: que ni con el transcurso del tiempo se persuadió de que los franceses atacaran la independencia de México; pero que sí llegó a conocer que el imperio era rechazado por la nación a causa de su debilidad para permitir la permanencia de los franceses y que se equivocó también en dar crédito a las seguridades de las personas que ha dicho. —Reconvenido: cómo si llegó a persuadirse de que el imperio fue rechazado por la nación, sin embargo constantemente lo defendió con las armas y no se separó de él, como era su deber, para no ser instrumento de la usurpación y seguir

derramando la sangre de los que, obsequiando la voluntad nacional, hacían la guerra al imperio, —Respondió: que su propósito fue entonces separarse y a este efecto hizo varias veces renuncia del mando de armas que tenía; pero que en lugar de que se la admitieran, el ministerio de la Guerra no le daba ni aun respuesta a las comunicaciones que con este fin le dirigía; que en tal caso no le quedaba otro medio que el de la deserción del ejército imperial y este medio era contrario a las ideas de honor que siempre ha tenido. —Reconvenido: por qué lejos de justificarse del cargo anterior está manifestando que conociendo ya la ilegitimidad del imperio, sin embargo le reconocía de nuevo al dirigirse al ministerio de la Guerra para que le admitiese su dimisión y por qué el falso honor que lo comprometió a seguir siendo cómplice de la usurpación antes que desertarse como dice, no puede ser racional excusa sino antes bien una nueva culpa que tiene, —Respondió: que no puede contestar a ese cargo sino diciendo lo que ha dicho; que su honor, falso o verdadero, pero que siempre ha sido el mismo, no le permitió adoptar el medio de la deserción y siempre creyó que su conducta era arreglada al deber. —Preguntado sobre el cargo que le resulta de complicidad con los franceses y con el usurpador Maximiliano en los asesinatos, incendios y crímenes de todo género que han cometido o autorizado durante cinco años; por la cooperación constante y eficaz que ha prestado a la intervención francesa y al llamado imperio y también por el cargo que pesa sobre él directamente por la sangre mexicana que ha derramado en los diversos mandos importantes de armas que ha tenido desde el año de sesenta y dos hasta la toma de esta plaza, —Respondió: que no se juzga cómplice en delitos que él personalmente no ha cometido, como en efecto no lo ha hecho ni ordenado y que si bien ha derramado sangre en las acciones de guerra que ha tenido, su deber así lo exigía y hace notar que en todo el tiempo que ha estado al servicio del imperio, se ha limitado a defenderse cuando lo han atacado, pero nunca se ha convertido en agresor.—Y habiendo leído esta su confesión y no teniendo nada que agregar, dijo que era la verdad y en ella se ratificó, firmando con el fiscal y presente escribano.

Manuel Aspíroz

Ante mí,  
Jacinto Meléndez

Tomás Mejía

## AMPLIACIÓN DE LA CONFESIÓN CON CARGOS A MEJÍA

(Querétaro, mayo 29 de 1867)

En seguida, trasladados el fiscal y presente escribano a la prisión de don Tomás Mejía, fue éste instruido de que se iba a proceder a ampliarle su confesión con cargos como lo ha solicitado y —Preguntado si ofrece decir verdad en lo que va a declarar, —Respondió: que sí ofrece. —Preguntado, qué tiene que añadir a las respuestas que ha dado a los cargos que le tienen hechos, —Respondió: que quiere consignar en este proceso, que no reconoció a la intervención francesa sino a la regencia, que fue establecida por los votos de representantes de todas las clases y partidos políticos de México; por lo que veía en la regencia un gobierno que podía fundarse en la voluntad de la nación y que reuniría a los diferentes partidos que se han hecho la guerra en el país. —Preguntado: si antes o después de reconocida por él la regencia, militó bajo las órdenes del comandante en jefe del ejército de la intervención francesa, —Respondió: que antes de reconocer a la regencia no militó bajo las órdenes del jefe del ejército francés; que después él se dirigía siempre en sus operaciones militares al presidente de la regencia, de quien también recibía órdenes y que una de éstas fue la de que participara igualmente sus operaciones al general francés, como se vio obligado a hacerlo; que cuando recibía órdenes directas del jefe francés, las cumplía si no eran inicuas, como la de dar muerte a los prisioneros y otras semejantes y que las que cumplía por no tener ese carácter, eran por él transcritas a la regencia. En todo el tiempo que gobernó Maximiliano con el título de emperador, se condujo constantemente de la misma manera que durante la regencia. —Reconvenido, cómo dice y pudo creer que no reconoció la intervención francesa, cuando en virtud de ésta sólo pudo haber en México lo que se ha llamado regencia e imperio, que confiesa

haber reconocido, porque la ejecución de estos simulacros de gobierno por el ejército francés, es precisamente la intervención que dicho ejército tomó en los negocios políticos de la soberanía interior de México, — Respondió: que el establecimiento de la regencia y del imperio no ha sido para él la obra de la intervención francesa, sino de los mexicanos que le dieron sus votos y llamaron a Maximiliano; que repite que se apresuró a reconocer al nuevo gobierno, porque veía en él un centro de unión de todos los mexicanos; que si los mexicanos promovedores del nuevo orden de cosas estaban de acuerdo con la intervención francesa, él lo ignoraba. —Vuelto a reconvenir: por qué dice que no consideró como obra de la intervención francesa lo que llama regencia e imperio, sino como resultado del voto nacional, porque, como ya se le ha dicho en uno de los cargos que se le hicieron, la voluntad nacional no podía conocerse en presencia y bajo la presión de las armas francesas, ni menos podría reputarse libre y legítimo sino más bien, por lo mismo, arrancado por la fuerza; que la complicidad de Almonte y los demás promovedores del establecimiento del imperio, era conocida de todo el mundo y fue declarada por el gobierno de la República y por la prensa, precisamente para que los incautos no cayeran en un error, ni pudieran disculparse con la ignorancia los que se unieran a Almonte y a los demás cómplices de la intervención francesa, —Respondió: que en cuanto al juicio que formó de la nacionalidad del imperio, ya ha dicho bastante y reproduce las razones que tuvo y, en cuanto a la complicidad de los promovedores del imperio con la intervención francesa, él la ignoraba, porque retraído y a la distancia que se hallaba en la sierra, no pudo llegar a su conocimiento la declaración del gobierno. —Vuelto a reconvenir, por qué lejos de responder al cargo da lugar a que de nuevo se le haga la de su rebelión contra el gobierno constitucional, la que, si en efecto pudo ser causa de que ignorase las resoluciones del gobierno, nunca podrá servirle de excusa; además, porque si la actitud hostil que guardaba en la sierra le hubiese impedido en realidad conocer las disposiciones del gobierno y los anuncios de la prensa de todo el mundo, igualmente habría ignorado la venida de los franceses y todas las circunstancias de la intervención, lo que no podrá decir con verdad. —Respondió, repitiendo lo que ya en

varios lugares ha expresado: que no reconocía al gobierno constitucional, que tampoco le hizo la guerra ni tomó parte con los franceses y que reconoció y sostuvo al imperio en el concepto que era el gobierno nacional; que, por último, advierte, que para él, el único objeto de la intervención francesa fue el hacer las reclamaciones que se propusieron las tres potencias aliadas y que este objeto quedó cumplido desde la ocupación de la Ciudad de México por el ejército francés.

Preguntado qué tiene que añadir a su confesión con cargos, respondió: que también quiere dejar consignado como prueba de que en su conducta política no se ha propuesto más que la unión de los partidos; que siempre que ha tenido mando ha puesto en libertad a los prisioneros de guerra y cuando ha estado a las órdenes de otro jefe ha hecho cuanto ha estado de su parte para salvarles la vida y lo ha conseguido en muchos casos; que como prueba de esto, pide al señor general Escobedo se sirva declarar la conducta que ha observado con él, con el general Treviño y con los demás jefes y oficiales que los acompañaban en Rioverde, cuando cayeron en su poder, que (de) la misma manera se condujo con el general Arteaga en esta ciudad y con otros varios de sus enemigos.

Preguntado: si tiene más que añadir, respondió que no y que lo dicho es la verdad, en que se ratificó, firmando con el fiscal y presente escribano.

Manuel Azpíroz

Tomás Mejía

Ante mí,  
Jacinto Meléndez



## DECLARACIÓN PREPARATORIA DE MIGUEL MIRAMÓN

(Querétaro, mayo 24 de 1867)

Separado y puesto en incomunicación igualmente don Tomás Mejía, el fiscal, acompañado de mí, el escribano, pasó al aposento de otro de los presos y teniéndole presente le - Preguntó: si ofrece decir verdad en lo que supiere y fuere interrogado y el preso - Respondió: que sí ofrece. Preguntado por su nombre, edad y demás generales, - Respondió: que se llama Miguel Miramón, es natural de México, de treinta y cinco años de edad; casado, general de división. - Preguntado: por el motivo y circunstancias de su prisión, - Respondió: que fue hecho prisionero en la plaza de Querétaro estando en la casa de un médico, a quien ocurrió para que le sacase una bala de la cara, donde fue herido levemente. — Preguntado: por el motivo de su concurrencia a la defensa de Querétaro, —Respondió: que mandando las fuerzas del interior, tuvo que retirarse después de la derrota de San Jacinto a Querétaro. —Preguntado: cuál es la causa que ha sostenido con las armas en esta ciudad, —Respondió: que la del imperio. —Preguntado: si ha tenido como legítimo al llamado imperio de México y diga las razones que para ello ha tenido, — Respondió: que habiendo salido del país para el extranjero el año de sesenta y uno, cuando volvió a México en sesenta y tres halló establecido en la capital y reconocido por la mayoría del país el imperio; cuyas circunstancias le hicieron formar el concepto de que éste era el gobierno legítimo de México. —Preguntado: si sabía que existía dentro del territorio mexicano, en la época a que se refiere, el gobierno constitucional de la República, —Respondió: que sí lo sabía. — Preguntado: si sabía, en la misma época, que el gobierno constitucional de la República sostenía la guerra contra el llamado imperio y contra el ejército francés que vino a tratar de establecerlo y que fue su principal

apoyo, —Respondió: que sabía que el gobierno constitucional quería mantener la guerra, pero no sus generales, pues vio documentos de Uruga, Vidaurri, Comonfort y Doblado, que probaban la resolución de éstos de tratar con Bazaine. —Preguntado: si creía que la nación había proclamado el imperio y si lo creía, diga qué razones pudo tener para juzgarlo así, —Respondió: que creyó que la nación había proclamado el imperio, a causa de las actas de los pueblos y de la Junta de Notables que a efecto de establecerlo tuvieron lugar en México. —Preguntado: si cree de buena fe que la Junta de Notables representaba legítimamente la nación y que las actas a que se refiere eran la expresión verdadera y libre de la mayoría de los mexicanos, estando como estaban bajo la opresión de las armas francesas, —Respondió: que sí. —Preguntado: si tuvo este mismo concepto de la legitimidad del imperio después de haberse retirado el ejército francés, no obstante que desde entonces el llamado imperio no ha podido sostenerse sin el apoyo de los extranjeros hasta su desaparición como causa política, consumada con la ocupación de Querétaro por el ejército republicano, —Respondió: que cuando se marcharon del país los franceses, juzgó que el imperio podría sostenerse mejor que con ellos. —Preguntado: por qué juzgaba que sin los franceses podría sostenerse mejor el imperio, —Respondió: que lo creía así porque los excesos que cometieron en el país los franceses habían enajenado al imperio las simpatías, mientras que sostenido por un ejército mexicano el imperio debía ser un gobierno nacional. —Preguntado: si sabe que el gobierno constitucional Republicano ni un momento ha dejado de existir en México y que la guerra que con su autorización se ha hecho contra los franceses y contra el imperio, tampoco ha cesado un solo instante, —Respondió: que durante el imperio, el declarante permaneció en Europa hasta hace cosa de seis meses y allí recibió noticias diversas sobre la ocupación entera del país por el ejército imperial y sobre la desaparición del gobierno republicano. —Preguntado: si cuando volvió a México supo la realidad de los hechos a que se refiere la pregunta anterior, —Respondió: que sí la supo y era la de que se había mantenido la guerra constantemente y el gobierno republicano ni un momento había abandonado el territorio nacional. —Preguntado: qué juzga del fin que se

propusieron y medios de que se valieron los franceses que trajeron la guerra al país, —Respondió: que en su concepto el fin que se propuso Napoleón Tercero fue la adquisición de parte del territorio mexicano, y los medios de que se valió para ello, malísimos; por lo que el declarante estuvo siempre en contra de ellos. —Preguntado: por qué en tal concepto no tomó las armas para defender a su patria contra los franceses y sí se adhirió al imperio que fue hechura de la política de Napoleón Tercero, —Respondió: que no tomó las armas contra los franceses porque le pareció que contra ellos no podía hacerse la guerra con buen éxito, cuando los generales del ejército republicano querían tratar con ellos como ha dicho antes; y que comenzó a servir al imperio cuando se retiraba el ejército francés y no lo consideraba, por lo mismo, como obra de la intervención francesa. —Preguntado: si ofreció alguna vez sus servicios al ejército francés que vino a hacer la guerra en México, —Respondió: que no —Preguntado: si reconoció al llamado imperio antes de anunciarse la salida de los franceses y si tuvo alguna comisión o nombramiento de él, —Respondió: que sí reconocía al imperio desde entonces y que a causa de la mala voluntad que el declarante manifestaba contra los franceses, se le impuso un destierro honroso paliado con una comisión militar a Prusia. —Preguntado: por su conducta política anterior a la venida de los franceses y por la que ha observado desde que se puso al servicio del llamado imperio, —Respondió: que su conducta política anterior a la venida de los franceses ha sido uniforme y pública, y que durante los seis meses que ha servido al imperio, ha tenido el mando de las fuerzas del interior hasta su regreso de San Jacinto y La Quemada y aquí en Querétaro últimamente el del cuerpo de ejército de infantería. —Preguntado: qué acciones de armas ha tenido en defensa del llamado imperio, —Respondió: que el ataque y toma de Zacatecas en enero de este año como general en jefe de las fuerzas del interior, la derrota de San Jacinto, la acción de La Quemada y el sitio de Querétaro. —Preguntado: si tenía algo que añadir a su declaración, —Respondió: que no, que lo dicho es la verdad, en que se ratifica y firmó con el fiscal y presente secretario.

Manuel Aspíroz

Ante mí,  
Jacinto Meléndez

Miguel Miramón

## CONFESIÓN CON CARGOS DE MIRAMÓN

En la misma fecha —veintiséis de mayo—, el fiscal, en unión del suscrito escribano, pasó al aposento de don Miguel Miramón, quien - Preguntado: a qué personas encarga de su defensa, dijo: que ha llamado por el telégrafo al licenciado Jáuregui, residente en San Luis Potosí y por extraordinario al licenciado don Joaquín Alcalde, que cree está en México, para que le sirvan de defensores. El fiscal le manifestó que era ya llegada la ocasión de tomarle su confesión con cargos, pudiendo instruirse antes de las piezas de este proceso que le conciernen.—Don Miguel Miramón se impuso de las órdenes que sirven de cabeza al proceso y en seguida, —Preguntado: para que confiese su constante rebelión contra el gobierno constitucional de la República, —Respondió: que no se juzga rebelde al gobierno constitucional de la República, porque nunca lo reconoció, sino que después de la administración del general Santa Anna sirvió al genreal Zuloaga como presidente legítimo y después él mismo tuvo el mando supremo de la nación por elección de una Junta de Notables y, no conforme con ella, como sustituto del presidente Zuloaga. —Reconvenido: cómo niega el cargo, cuando después de la administración de Santa Anna se estableció en la República el gobierno emanado del Plan de Ayutla, que fue reconocido en todo el país y por las potencias extranjeras, no menos que un poco de tiempo por el declarante, quien, estando a su servicio en las armas, se rebeló contra él, con la circunstancia agravante de haberse insubordinado violentando a su jefe inmediato para llevarse al cuerpo que mandaba y con la más agravante todavía de haberse pasado a los pronunciados de Zacapoaxtla que acababan de desconocer al gobierno y a quienes iba a batir por disposición del mismo gobierno. —Respondió: que el gobierno establecido entonces no era constitucional, sino el de don Juan Álvarez. —Vuelto a reconvenir, porque no se libra del cargo con decir que no era

gobierno constitucional el que desconoció, sino de don Juan Álvarez; en primer lugar, porque, como él mismo confiesa, este gobierno se hallaba establecido; en segundo lugar, el declarante lo había reconocido y servido en el ejército y en tercer lugar, si bien en efecto el gobierno de don Juan Álvarez no era Constitucional todavía, porque no se había expedido la Constitución, era sí emanado del Plan de Ayutla, consentido y legitimado por la nación, origen de la Constitución de cincuenta y siete y de los gobiernos constitucionales, de la misma manera que lo había sido del que presidió el general Álvarez, —Respondió: que no juzga ya vivo este cargo, porque derrotado en Puebla el ejército que proclamó el Plan de Zacapoaxtla y celebrada la capitulación en consecuencia con la administración establecida entonces, el declarante perdió su empleo y fue sentenciado a servir como soldado por el artículo cuarto de la capitulación, con cuya pena quedó borrada la responsabilidad que pudo haber contraído. —Vuelto a reconvenir, porque el descargo que pretende dar no hace más que reagravar su rebelión y demostrar que fue en ella reincidente, pues la pena referida que tal vez no llegó a cumplir, lejos de servir para su enmienda, le dio quizá ocasión para volverse a sublevar de nuevo en Puebla, cuya plaza defendió bajo las órdenes de don Joaquín Orihuela, hasta que volvió a ser vencido por las fuerzas del gobierno, contra quien ya dos veces se había rebelado, —Respondió: que confiesa, como lo ha hecho, la primera rebelión ya compurgada, pero no la segunda, porque ya no tenía mando de fuerza ni era militar para el gobierno a quien seguía desconociendo. —Vuelto a reconvenir por el cargo de rebelión, de que no puede disculparse, ni aun la segunda vez, porque en virtud de la capitulación de Puebla, que ha referido, había quedado sometido al gobierno y sólo con esta circunstancia se comprende que haya podido compurgar la primera rebelión; si no, ésta es un nuevo cargo todavía contra él y si quedó sometido al gobierno, su continuación, que confiesa en desconocerlo, es realmente el principio de una nueva rebelión, que cometen, no solamente militares que mandan fuerzas sino también los paisanos que se levantan contra la autoridad reconocida, —Respondió: que vuelve a decir que por la primera rebelión no tiene cargo y por la segunda, lo tiene solamente como paisano, porque

el gobierno lo había destituido de su empleo militar. —Preguntado sobre el cargo de haber cooperado eficaz y principalmente con los jefes rebeldes que han mantenido la guerra civil a turbar la paz de la nación y hacerla víctima de todos los horrores de la guerra, —Respondió: que su descargo consiste en que la nación rechazó la Constitución que desconoció el mismo presidente Comonfort, que debía a ella su existencia política. —Reconvenido: primero: porque dice que la nación rechazó la Constitución, cuando es un hecho que ella continuó rigiendo la República en todos los lugares no ocupados militarmente por los que se levantaron contra ella a consecuencia del golpe de Estado de Comonfort y del Plan de Tacubaya; porque es también otro hecho que el ejército Constitucional venció definitivamente a los pronunciados por el Plan de Tacubaya y, finalmente, porque de entonces acá ha continuado también en pie la Constitución dondequiera que no lo ha impedido la violencia de las armas extranjeras y del usurpador Maximiliano; segundo: porque la defección de Comonfort fue un delito que no podía servir de excusa a los que le acompañaron en ella, —Respondió: que tanto el Plan de Tacubaya como la Constitución han regido donde no ha habido enemigos armados y que el haber sido vencidos los partidarios de este Plan, fue debido al auxilio que prestaron a los constitucionales los buques americanos en las aguas de Antón Lizardo; que además advierte, que no se adhirió al golpe de Estado, sino al Plan de Tacubaya. —Preguntado para que conteste el cargo que le resulta de haberse abrogado el mando supremo de la nación sin otro título que el de la fuerza armada y haber continuado con tal carácter la guerra civil, —Respondió: que ya ha dicho antes que fue presidente de la República por elección de una Junta de Notables; pero que no siendo de su aprobación este título, entró a presidir a la nación en sustitución del general Zuloaga, cuyo gobierno fue reconocido por la mayoría del país y por las potencias extranjeras, incluso entonces los Estados Unidos. —Reconvenido por el mismo cargo, puesto que la sustitución de Zuloaga, título en que hace consistir la legalidad con que tuvo la investidura del jefe de la República, no era en realidad sino el de la fuerza armada a la que debió el mismo Zuloaga su elevación como presidente de la República, la extensión de su poder era el alcance de la

fuerza armada, como lo ha confesado al convenir en que regía el Plan de Tacubaya sólo donde lo sostenían las armas, siendo por lo mismo inadmisibile el reconocimiento de la administración de Zuloaga por la mayoría de los mexicanos y, finalmente, porque el reconocimiento de dicha administración por las potencias extranjeras, incluso los Estados Unidos, ni añade ni quita nada a la consideración de la legitimidad de un gobierno, por ser éste un asunto que pertenece a la soberanía interior de todo Estado, —Respondió: que en el mismo caso se hallaba el gobierno emanado del Plan de Ayutla y de consiguiente el Constitucional, ambos establecidos por la fuerza de las bayonetas. —Añadió: que si hace mención del reconocimiento que prestaron al gobierno de Zuloaga las potencias extranjeras, es porque esta misma razón se le ha dado al tratarse del gobierno emanado del Plan de Ayutla. —Preguntado para que conteste el cargo que tiene de haber mandado ejecutar la pena de muerte en los prisioneros de guerra hechos en Tacubaya el once de abril de mil ochocientos cincuenta y nueve, sin exceptuar a médicos que asistían a los heridos, ni aun al ciudadano Jáuregui, que no tenía delito ni el más leve participio con el ejército vencido, cuyos hechos si no fueron todos ordenados sí fueron aprobados después por él, —Respondió: que las ejecuciones a que se refiere el cargo que se le propone, no fueron ordenadas ni autorizadas por él, sino solamente respecto de los oficiales prisioneros pertenecientes al ejército que se habían pasado al enemigo y a quienes se aplicó una ley; que la muerte de los otros prisioneros le disgustó y la desaprobó y que si no castigó al responsable, que era el general Márquez, fue porque este general era el vencedor y se sabe cuán difícil es administrar justicia en México en casos como el de que se trata. Añadió: que los prisioneros no fusilados el citado día fueron mandados poner en libertad por él, de que son testimonio vivo, entre otros varios, el coronel Chavarría y el licenciado Jáuregui. —Preguntado: para que conteste el cargo que le resulta de haber mandado, con el carácter de presidente de la República, violar los sellos del gobierno de Inglaterra para extraer y consumir, como extrajo y consumió, los fondos destinados por el gobierno constitucional al pago de la convención inglesa, —Respondió: que ordenó la ocupación de dichos fondos, porque sabia que



con ellos comerciaba el encargado de negocios Mathew, como lo prueba el hecho de haber gastado una cantidad; por la imperiosa urgencia en que estaba el gobierno de recursos pecuniarios y por el temor que abrigaba de que esos fondos se perdieran, por ser bien conocida su existencia, en un conflicto de armas que hubiese en la plaza. —Reconvenido: porque su contestación no hace desaparecer el cargo, puesto que nada podía justificar la injuria cometida contra el pabellón inglés y tanto menos cuanto que este hecho ha sido uno de los que principalmente contribuyeron al descrédito de México y a preparar los pretextos que para más tarde había de alegar la Europa para tratar de intervenir a mano armada en los negocios de la política interior de México, —Respondió: que no hubo violación del pabellón inglés, porque no existía en la capital representante diplomático del gobierno de la Gran Bretaña y porque el dinero estaba depositado en un almacén particular y que es falso que este hecho haya servido de pretexto a la intervención europea en México. —Vuelto a reconvenir: cómo dice que no hubo violación del pabellón inglés, cuando es público que se rompieron los sellos de la legación británica que defendían la puerta del almacén, sin que se haga perder a este hecho el carácter de un atentado, la circunstancia de que la legación no se hallara presente en la capital, ni aun la de que pudiera alegar, de que el gobierno de Inglaterra no tuviese un agente diplomático acreditado para con la administración que existía en la Ciudad de México; y cómo niega que fuera éste uno de los varios pretextos que sirvieran para la intervención europea en México, cuando es también de universal notoriedad que se proponía este ejemplo para acusarnos a los mexicanos de que atropellábamos el derecho internacional y no había seguridad en el país para la propiedad extranjera, —Respondió: que justifican el hecho las circunstancias que deja referidas del comercio que se hacía con los fondos y la urgente necesidad que tenía de dinero el gobierno; que en cuanto a que el mismo hecho fuese pretexto para la intervención extranjera, lo ignoraba hasta este momento, pues sólo recuerda que sirvió de fundamento a la convención de Londres de treinta de octubre de sesenta y uno, la suspensión de pagos de la deuda extranjera, decretada por el gobierno constitucional. —Preguntado: para que conteste el cargo

que tiene de haber tratado de desembarcar a principios de sesenta y dos en el puerto de Veracruz, cuando lo ocupaban las fuerzas de la Triple Alianza en virtud de la convención de Londres, para ofrecer sus servicios a la intervención extranjera, o a lo menos para volver bajo el amparo de ella al país de donde había salido a causa de su responsabilidad política anterior; pues que si bien se vio estrechado a alejarse de nuevo del territorio mexicano, porque el representante del gobierno de Inglaterra lo reclamaba para que fuese juzgado o pedía su castigo por la violación de los sellos y apoderamiento de los fondos; la misma protección que los agentes franceses le otorgaron y también tal vez los españoles, para que se salvase del peligro que le amenazaba, es cuando menos un vehemente indicio de su complicidad en los planes del gobierno francés y tal vez del español, que se venía a desarrollar en México y cuya iniquidad él mismo ha conocido, según su propia confesión, al mismo tiempo que el referido amparo de los extranjeros que de hecho estaban en guerra con el gobierno constitucional, es una prueba completa de que se valía de la intervención extranjera para eludir la responsabilidad en que había incurrido por su conducta política en la guerra civil, —Respondió: que niega el cargo, porque su intento de volver al país a principios de sesenta y dos, sólo tenía por objeto el poder ver de cerca la conducta de los interventores extranjeros, con cuyos proyectos no estaba de acuerdo desde entonces y los que más bien trataba de contrariar aunque no le era posible, porque el gobierno de México lo había excluido nominalmente de la amnistía que concedió a todos los demás que le habían hecho la guerra; y que la protección que le concedió el general Prim y por su influencia el representante de Francia, fue un servicio amistoso al mismo tiempo que el deber que tenía dicho general de oponerse al abuso que pretendían cometer los ingleses. —Preguntado: para que conteste al cargo que le resulta de haber vuelto con posterioridad al referido acontecimiento a México bajo la protección de la intervención francesa y de Maximiliano, de quien recibió además la comisión militar con que fue despachado a Prusia, sin que sea bastante a relevarle de este cargo la circunstancia que indica en su declaración preparatoria de que la tal comisión fue más bien un destierro debido a su enemistad con los

franceses, pues debía de considerar que éstos eran el único apoyo de Maximiliano y que el mismo Maximiliano nunca fue otra cosa en el país que un usurpador de los títulos de soberano, —Respondió: que ni aun entonces vino bajo la protección de la intervención francesa, puesto que desembarcó en Brownsville, de donde se dirigió a México, atravesando de incógnito por los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro, ocupados aún por fuerzas constitucionales y en México reconoció al gobierno de hecho, que era la regencia; que en consecuencia admitió después la comisión militar que le dio Maximiliano. —Reconvenido por qué dice que la Regencia que precedió al llamado imperio de Maximiliano era un gobierno de hecho, puesto que el título de un gobierno de esta clase no justificaba el reconocimiento que le prestaba un mexicano, cuya obligación era buscar al gobierno legítimo, tanto más cuanto que ni la consideración de gobierno de hecho merecía la regencia ni ha merecido después el pretendido imperio, porque es bien sabido que no se sostenía ni se ha sostenido después por fuerzas propias sino por la violencia de las armas francesas y porque en realidad Maximiliano sólo ha sido un usurpador del nombre de soberano de México. El fiscal le hizo notar que precisamente en la época de la regencia que él reconoció, era cuando ésta tenía menos visos de gobierno ni de hecho, porque la mayor parte del territorio mexicano estaba sujeta al gobierno de la República, el cual existía como ha existido hasta hoy, sin interrupción de un solo instante, dentro del territorio nacional, sostenido por fuerzas propias y dirigiendo la guerra que constantemente ha hecho a la intervención francesa y al llamado imperio, que fue su resultado, —Respondió: que no podía reconocer al gobierno constitucional que lo había exceptuado de la amnistía y que por la imposibilidad de permanecer viviendo en el extranjero, se vio obligado a volver al país, cuya consecuencia fue el reconocer al poder que halló en la capital y servirle, porque tampoco le era posible que este poder lo dejase retirado en su casa. —Reconvenido: porque cuanto ha dicho para liberarse del cargo anterior no es bastante a salvarle de la responsabilidad en que ha incurrido reconociendo la usurpación de Maximiliano y sirviendo a éste de seis meses acá, según su propia confesión, con mando importante de armas, complicándose con él

en los crímenes que durante dicho tiempo ha cometido, derramando por sí sangre de los mexicanos en Zacatecas, La Quemada y Querétaro y perseverando hasta el fin en defender al pretendido imperio, cuando a toda luz era éste ya insostenible, ni aun de hecho, —Respondió: que como dijo en su primera declaración, creyó que una vez retirado el ejército francés, el imperio se consolidaría, sostenido por mexicanos; y que el servicio que ha prestado en las armas era, por lo mismo, en su concepto, de cumplimiento de su deber.—Y no teniendo que añadir a esta confesión, la leyó y se ratificó en ella; firmando con el fiscal y presente escribano.

Manuel Azpíroz

Miguel Miramón

Ante mí,  
Jacinto Meléndez

MAXIMILIANO RECHAZA SE LE APLIQUE  
LA LEY DE 25 DE ENERO DE 1862

Señor general en jefe del ejército de operaciones

Maximiliano, prisionero de guerra en el ex convento de Capuchinas de esta ciudad, debo exponer: que principios de justicia y de dignidad me estrechan a no aceptar los procedimientos que en mi contra se están practicando con arreglo a la ley de 25 de enero de 1862, ni a reconocer la jurisdicción militar creada por ella, siendo, como es, incompetente para instruir y fallar la causa que deba formárase. Al hacer esta manifestación, que procuraré fundar con brevedad por no tener tiempo para más, estoy bien lejos de querer esquivar un juicio; lo deseo ardientemente, ansío porque mi conducta pública sea conocida de todo el mundo pero, con la justa pretensión de que sea examinada y calificada por jueces competentes y con el detenimiento, medida y circunspección que demanda la naturaleza de un proceso tan grave y excepcional, único en el país.

Mientras más se lee y estudia la citada ley de 25 de enero, se arraiga más la convicción de que su objeto o materia son aquellos delitos, aquellos hechos completos, perfeccionados y de una evidencia tal, que puedan esclarecerse en unas cuantas horas y fallarse por el sentido común sin necesidad de ciencia o conocimientos facultativos. Cualquiera disposición legislativa, por más emergentes que se supongan las circunstancias que la dictan, siempre debe llevar consigo como elemento esencial el ser posible y justa, de otra manera dejaría de ser ley; debiendo atribuir a la que nos ocupa esas indispensables cualidades de posibilidad y justicia; claro está, que los delitos antes indicados y no otros son su materia, porque sería imposible que hechos complicados y cuestiones arduas se sustanciasen en sesenta horas y que el presunto delincuente

fuese defendido en venticuatro, cuando ni aun término probatorio se concede; porque no sería justo que tales hechos y cuestiones, sin el suficiente y debido aclaramiento, fueran resueltos por un Consejo ordinario de Guerra, de cuya resolución depende la vida o la muerte de un hombre. Hechas, esas sencillas y fundadas reflexiones, veamos si cabe en el reducido círculo de la ley de enero, el caso mío de que se trata.

Hallándome tranquilo en mi castillo de Miramar, se me presentó una persona de alta jerarquía de Austria, anunciándome que varios mexicanos proyectaban establecer en su país la forma de gobierno imperial y nombrarme su emperador; contesté que, entretanto no constase ser ésta la voluntad del pueblo mexicano, no aceptaría el nombramiento; pasado algún tiempo, una gran comisión de la Junta llamada de Notables, puso en mis manos un acuerdo de ésta, en virtud del que adoptaba aquella forma de gobierno y me elegía emperador; insistí en ésa mi contestación; transcurridos muchos meses recibí innumerables actas de adhesión al predicho acuerdo; desconfiando de mis propias apreciaciones, pasé en consulta esos documentos a unos sabios jurisconsultos, conocedores de las costumbres, población y de la extensión territorial de México; después de un escrupuloso examen, después de un profundo estudio, dictaminaron aquellos consejeros, que constaba de un modo legal la voluntad de la mayoría del pueblo mexicano por el régimen del imperio y por mi persona para su emperador; entonces resolví aceptar y acepté este nombramiento, disponiéndome a venir inmediatamente y, en efecto, vine sin ejércitos ni en son de guerra, acompañado sólo de mi familia y, con la conciencia del que ha sido llamado y nada ha pretendido, arribé a Veracruz y desde este puerto a la capital; mi camino fue como de triunfo, recibiendo a cada paso inequívocas muestras de aprecio a mi persona, que me confirmaron en mi resolución; a poco tiempo, en varios viajes, recorrí muchos lugares populosos de la nación y se repitieron las mismas muestras de júbilo; bajo estas impresiones favorables goberné por más de dos años en casi todo el país, no faltando a mi gobierno el sello respetable del reconocimiento y aprobación de todas las naciones de Europa y de algunas otras no menos poderosas o importantes.

Llegó vez en que dudé de la firmeza y consolidación de mi trono, y como mi única mira al ocuparlo ha sido el bien y felicidad de México, me ausenté de la capital y me detuve en Orizaba, para pensar y escoger con más detenimiento y madurez una resolución definitiva; libre ya de toda presión extranjera, llamé en mi auxilio a los consejos de ministros y de Estado, a quienes expuse con franqueza los fundamentos de mis dudas; oído su parecer me resolví a volver a la capital, decidido a convocar un congreso para explorar la voluntad nacional; invencibles obstáculos que a nadie se ocultan frustraron mi designio; marché entonces a ponerme al frente del ejército del interior, no con el exclusivo objeto de sostener mi trono con las armas, sino con el de procurar siempre un desenlace pacífico y honroso, un medio que pusiese término a las diferencias sin efusión de sangre; pero, muy a mi pesar, trabóse en esta ciudad una lucha terrible en la que he sucumbido.

El anterior y necesariamente muy compendiado relato, a la simple vista entraña hechos complicadísimos, acontecimientos de inmensa entidad y cuestiones políticas e internacionales de laborioso examen y de difícilísima solución; tales hechos, acontecimientos y cuestiones ¿podrán suficientemente ventilarse en las poquísimas horas de sustanciación que demarca la ley de 25 de enero, cuando ni siquiera concede un término probatorio? ¿Podrán calificarse y decidirse satisfactoriamente con la ordenanza militar y por personas que, aunque pertenecientes a la noble y honrosa carrera de las armas, no se les exige y debe exigírseles la ciencia ni los vastos conocimientos indispensables para aquella calificación y decisión?... General, contestadme con la mano en el corazón; que vuestro gobierno se sirva también responder, puesto que entre sus deberes no puede faltar el de ser justo.

No llevaréis a mal que, en apoyo de mis asertos, cite un ejemplo que nos proporciona la ilustrada República vecina, tan celosa por las libertades públicas cuanto admirable por su respeto a las garantías individuales y por el exacto cumplimiento de sus leyes.

Unos estados se rebelan queriendo constituirse nación independiente; establecen su gobierno y aspiran a que sea reconocido por las demás naciones, no logrando más que el reconocimiento de

beligerantes. No obstante su batallar gigantesco, al fin son vencidos y aprisionado el presidente de la ex confederación. Este jefe, sin embargo de hallarse su causa en circunstancias menos favorables que la mía, hace años que no se le sujeta a juicio; no puede decirse que por falta ahí de energía y de justicia, sino más bien por no encontrar jueces y tribunal competentes para que conozcan y resuelvan las graves cuestiones políticas que envuelve la alta posición que ocupara el preso, conducta mesurada y circunspecta que han aplaudido todas las naciones civilizadas.

Otro caso de actualidad en el país, viene muy a propósito también a favor de mi causa; don Jesús González Ortega se proclama en el extranjero presidente de la República Mexicana. Consigue entrar en ésta y se dirige ocultamente a la capital de uno de los estados más importantes —Zacatecas—, en donde de una manera paladina insiste en su proclamación; es desde luego aprehendido y preso y tampoco se le ha sujetado a juicio; sin duda en espera de que un alto tribunal, revestido de amplias y competentes facultades, falle acerca de la culpabilidad del señor (González) Ortega y declare quién sea el legítimo depositario del Poder Ejecutivo.

No permita el cielo que un distinto procedimiento relativo a mi persona proporcione al mundo civilizado materia para hacer apreciaciones nada convenientes. Yo reconozco y cualquiera confesará, que entre la causa del señor González Ortega y la mía hay diferencias notables. Este señor nació en México y yo nací en Austria, pero la justicia universal confunde los lugares de nuestros respectivos nacimientos. Este señor se proclamó en el extranjero presidente, secundado por unos cuantos partidarios. Hallándome yo en Miramar fui proclamado aquí mismo en México emperador por multitud de aldeas, pueblos y ciudades. El señor (González) Ortega entra ocultamente al territorio mexicano y yo me presento públicamente a la luz del día y ante la faz del universo.

El mismo señor no imperó ni en un palmo de tierra; mi gobierno se extendió en casi todo el país. En fin, el señor González Ortega no es



reconocido siquiera por alguna potencia extranjera y yo lo he sido como emperador por todas las naciones europeas y algunas otras más.

Al hacer las precedentes reflexiones, no abrigo ciertamente la maligna intención de constituirme en censor de vuestro gobierno, señor general, ni tampoco en acusador del señor González Ortega; las he hecho porque las he creído conducentes a la defensa de mis derechos y a la demostración de la incompetencia que vengo sosteniendo.

No debe oponerse a ese mi intento la circunstancia de haberme prestado para la práctica de algunas actuaciones en el proceso que está instruyéndose en mi contra, porque es bien sabido que el vicio de incompetencia material no puede subsanarse ni por el consentimiento ni por la comparecencia de las partes.

No teniendo tiempo para más, concluyo pidiendo:

Primero: que usted se declare incompetente.

Segundo: que mande suspender todo procedimiento en la sumaria que se instruye contra mi persona, con arreglo a la ley de 25 de enero de 1862.

Tercero y consiguiente: que no se nombre, ni menos se instale el Consejo de Guerra, creado por esa ley, cuya competencia no reconozco y niego, declinando desde ahora en toda forma su jurisdicción.

Cuarto y último: que se dé cuenta a quien corresponda para los efectos posteriores.

Finalmente digo: que conforme a la franqueza de mi carácter, no debo ocultar a usted, señor general, que copia a la letra de este escrito queda en poder del cónsul de Hamburgo, para que se trasmita, cuando se pueda, al cuerpo diplomático acreditado cerca de mi persona.

Querétaro, mayo 29 de 1867.

Maximiliano

Devuélvase este oculto al presentante para que ocurra ante quien corresponda.

Querétaro, mayo 29 de 1867.

(Mariano) Escobedo

MEMORIAL DE MIRAMÓN Y MEJÍA  
DECLINANDO LA JURISDICCIÓN MILITAR

Ciudadano general en jefe  
del ejército Republicano

Miguel Miramón y Tomás Mejía, presos políticos en esta ciudad, como mejor lugar haya, respetuosamente exponemos: que dos clases de cargos se nos han hecho en la causa que se nos instruye por orden de ese cuartel general.

Es la una, nuestra complicidad en la usurpación del poder público; es la otra, varios delitos del orden militar y común.

Por lo que respecta a la primera, a poco que se lea y medite la ley de 25 de enero de 1862, se ve que ella no puede estar comprendida en esa disposición. Basta, entre otros fundamentos, la consideración de que para aclarar y discutir los actos todos del archiduque Maximiliano, desde su advenimiento al poder hasta que dejó de ejercerlo, se necesita afrontar cuestiones profundas de derecho internacional y público; es preciso justificar o depurar su buena o mala fe y es, por último, necesario producir las defensas y exculpaciones al caso convenientes. Y todo esto ¿se podrá hacer en sesenta horas concedidas por la ley para la formación de la causa y en veinticuatro para la defensa? Es claro que no.

Síguese de aquí que no pudiéndose suponer que la ley manda imposibles y no debiendo usted ni nosotros suponerlo, se infiere por una consecuencia indeclinable, que el caso de usurpación del poder público, tal cual se atribuye al archiduque, no está ni puede estar comprendido en la mencionada ley.

Pero como si este capítulo de la sumaria no se comprende en dicha ley, que es una ley especial, tampoco pueden ocuparse de él los jueces

que ella misma establece, claro es que son incompetentes para decidirlo y sentenciarlo.

No se nos oculta que la fracción 36ª del artículo 3º de esa ley habla de los que se abrogan el poder, es decir, de los que entran a él fraudulentamente, pero, ciudadano general, esta es la cuestión que se depura, este es el objeto de la causa, esto es lo que se trata de aclarar. Y lo decimos así, porque por regla general de buena jurisprudencia, que siempre tiene lugar en todo proceso, sea cual fuere su naturaleza y tramitación, el hecho, objeto de él, nunca se supone, nunca se da por existente. Es necesario probarlo, de lo contrario, faltaría la base de esencia al procedimiento criminal.

De lo expuesto se infiere directamente, que no estando sujeto a la repetida ley de 1862 el caso para el reo principal, tampoco puede estarlo para sus pretendidos cómplices, los cuales, sin esquivar el juicio ni los jueces que por derecho corresponda, se ven en la precisión de pedir se les ministre cumplida justicia, con total arreglo a las leyes patrias que tengan precisamente lugar y aplicación al caso porque se nos procesa. En tal virtud y sin que se entienda que por la presentación de este escrito concedemos a usted más jurisdicción que la que por derecho corresponda, pedimos: 1º, que se declare usted incompetente para conocer en el delito que se nos atribuye de cómplices en la usurpación del poder público; 2º, que, en consecuencia se mande suspender todo procedimiento ulterior en orden a este punto; 3º, que en la suspensión se comprenda, como es regular, la de la reunión del consejo ordinario que debería pronunciar su sentencia sobre ese particular; 4º, finalmente, que ordene usted se dé cuenta a quien corresponda con los antecedentes que hasta hoy existen, para los efectos a que haya lugar.

Y a fin de que nuestros pedidos se acojan y resuelvan como conviene, en uso del derecho que inconcusamente nos concede nuestra legislación, declinamos la jurisdicción de usted y protestamos contra su competencia legal para conocer en nuestra causa, por el delito de complicidad en la abrogación del poder público. Por tanto:

A usted rogamos provea como solicitamos, por ser así de justicia,  
que protestamos con todo lo necesario.

Querétaro, mayo 29 de 1867.

Miguel Miramón

Tomás Mejía

Devuélvase este ocurso a los presentantes para que ocurran al  
fiscal que conoce de su causa.

Querétaro, mayo 29 de 1867.

(Mariano) Escobedo

MAXIMILIANO INSISTE EN NO RECONOCER  
COMPETENCIA EN EL CONSEJO DE GUERRA

Querétaro, mayo 31 de 1867

Señor presidente don Benito Juárez  
San Luis Potosí

Muy estimado señor mío:

La señora doña Inés Salm regresó de esa ciudad, trayéndome la resolución que el Supremo Gobierno tuvo a bien dar en la solicitud de Maximiliano para que se esperase a que lleguen sus defensores de México y cuya resolución ya se me había comunicado por el telégrafo. Por la diligencia de mañana sale dicha señora para Tacubaya, según entiendo, con el objeto de activar la venida de los defensores de Maximiliano.

El proceso de este señor y de Mejía y Miramón se puso en estado para la defensa en el término de la ley, tomando a los reos sus declaraciones preparatorias y haciéndoles sus confesiones con cargos, aunque respecto de Maximiliano ha sido necesario seguir la causa en rebelión, porque se ha rehusado a contestar a las preguntas y cargos, no reconociendo competencia en mí ni en el consejo para ser juzgado. Hizo un ocurso en que, pretendiendo justificar su venida al país como emperador, declina de mi jurisdicción, pidiendo, en consecuencia, que no se siga la causa que (se) instruye contra él; pasé en consulta el ocurso al asesor y, de conformidad con lo que me ha consultado, he denegado la solicitud; al notificarle esta resolución ha apelado de ella, de la cual todavía no se me da parte oficialmente por el fiscal, para resolver lo que el asesor me consulte.

Puesta la causa en estado de defensa, se entregó al defensor del general Mejía; pero se suspendió el término a causa de haber pedido ampliar su confesión con cargos, lo que le fue por mí concedido, con consulta de asesor. En su ampliación, ha querido demostrar que su conducta en la guerra, con los prisioneros que ha hecho, ha sido siempre generosa y humana y me cita para que yo, como prisionero que he sido de él, lo certifique. Pasé a consulta este incidente; el asesor opinó porque no diera yo la declaración que se me pedía, estimándola inconducente, innecesaria y que podía ser perjudicial a la pronta administración de justicia, por la complicación que pudiera producir el que fuera yo testigo en la causa en que estoy conociendo como juez y así lo he resuelto. Esta disposición se le notificará mañana y volverá a seguir el término de la defensa y procuraremos llevar la causa a término el más pronto posible; aunque para esto necesitamos que el gobierno nos aclare la duda que le he manifestado sobre el primer caso en que permite que se prorrogue el término de defensa, que es el de que no se presenten los defensores de Maximiliano dentro del término; porque esto me parece muy indeterminado y no sé ciertamente si los debo esperar, ni por cuánto tiempo, si no se presentan dentro de dicho término.

Quedo impuesto de que ha recibido usted la lista de los prisioneros y demás documentos que remití a usted y daré cumplimiento a la indicación que se sirve usted hacerme para que remita cuanto antes la averiguación que he mandado practicar sobre los hechos vejatorios y tropelías de todas clases cometidas por muchos de estos prisioneros en esta ciudad.

Tengo noticias de ayer del señor general; me dice que continuaba bien sus trabajos del sitio, con esperanzas de un término pronto y feliz y que hasta entonces no ocurría cosa notable. Me dice también que se le han hecho varias propuestas de dentro de la plaza, para entregarla; pero que ha tenido que desecharlas porque no son conforme a las disposiciones del Supremo Gobierno, de que no puede ni quiere separarse.

Soy de usted, señor presidente, su muy atento y muy obediente  
servidor que besa su mano [q. b. s. m.].

Mariano Escobedo



LOS DEFENSORES DE MAXIMILIANO  
INSISTEN EN RECHAZAR  
LA JURISDICCIÓN MILITAR

Los que suscribimos, defensores del archiduque Fernando Maximiliano, ante el ciudadano general en jefe del ejército del Norte, como más haya lugar en derecho, salvas las protestas oportunas, decimos: que desde que llegó a nuestro conocimiento haber sido nombrados defensores del referido señor archiduque y que debía ser juzgado en consejo ordinario de Guerra, la primera impresión que tales noticias nos causaron, fue una repugnancia instintiva a admitir que la presente causa tan complicada y difícil y en la cual se han de fijar los ojos del mundo entero, pudiera decidirse dignamente por un tribunal militar formado, con excepción del señor presidente, por oficiales que ocupan un grado inferior en el ejército. Son tan complicadas, graves y delicadas las cuestiones que en ella deben tratarse y resolverse, que es imposible que oficiales subalternos, muy dignos de la gratitud nacional por su valor y por los importantísimos servicios que acaban de prestar a la causa de la nación, pero extraños a los conocimientos necesarios para formar un juicio justo de aquélla, pudieran decidirla de manera que no comprometieran en la opinión de los pueblos civilizados el buen nombre del país, cuya causa acaban sin embargo de defender tan heroicamente con sus espadas. Pero si esta fue la primera impresión que nos causaron las primeras noticias que recibimos acerca de este negocio, la meditación detenida de él, el estudio concienzudo e imparcial que hemos hecho del mismo, no han servido sino para confirmar y robustecer esa misma opinión.

La Constitución de 1857 que introdujo en nuestra sociedad reformas tan importantes y radicales y que por esa causa provocó de parte de los enemigos de ella una resistencia cuya tenacidad sólo ha sido sobrepujada por la perseverancia de sus patrióticos defensores, en su

artículo 128 previó el caso de que su observancia se interrumpiera por alguna rebelión, de que por un trastorno público se estableciera un gobierno contrario a los principios que ella sancionaba y determinó, que en ese caso, tan luego como el pueblo recobrara su libertad, se restablecería su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido serían juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a ella. Nuestro defendido el señor archiduque Fernando Maximiliano es juzgado por haber sido jefe de un gobierno que se estableció contrario a los principios de la Constitución de 1857 y, por lo mismo, conforme a lo determinado en el artículo 128 de esa misma Constitución debe ser juzgado con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido.

La misma Constitución, al tratar del Poder Judicial de la Federación, previene en el artículo 97, que corresponde a los tribunales federales conocer, entre otras causas, de aquellas en que la federación fuere parte. La federación es parte en todas aquellas causas en que tiene interés y ¿en cuáles lo tiene mayor que en aquellas en que se trata de juzgar hechos que han lastimado sus derechos, que han tendido a destruir el vínculo federal que une los diversos estados de nuestra gran confederación, estableciendo en su lugar un gobierno unitario cual es el monárquico? Es bien claro, pues, que la causa que se ha mandado formar al señor archiduque Fernando Maximiliano, es de aquellas cuyo conocimiento corresponde según el artículo 97 de la Constitución de 1857 a los tribunales de la federación.

Conforme al artículo 100 del mismo Código Fundamental, de ese código que según las contradicciones que casi inmediatamente después de su publicación sufrió, parecía destinado a muy corta vida y, sin embargo, es el que ha llegado a echar más profundas raíces en el amor del pueblo mexicano, los tribunales de la federación son los juzgados de distrito y circuito y la Suprema Corte de Justicia, así como el Congreso de la Unión cuando ejerce funciones judiciales. A éstos, pues, y no a ninguno otro, a ellos y no a un , ni ordinario ni extraordinario,

corresponde conocer de la causa en que el desgraciado acusado nos ha hecho la confianza de nombrarnos sus defensores.

Pero se nos dirá que las observaciones expuestas serían incontestables, si no existiera la ley de 25 de enero de 1862 con arreglo a la cual se mandó formar el actual proceso y que es nada menos la prevista en el artículo 128 de la Constitución de 1857, al prevenir, que los que hubiesen figurado en el gobierno establecido en oposición con los principios de ella, deben ser juzgados con arreglo a la misma y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido.

Para contestar, pues, a la objeción que nos hemos propuesto, no hay que hacer otra cosa que examinar si la ley de 25 de enero de 1862, conforme a la cual se está sustanciando la presente causa, es de las expedidas en virtud de la Constitución de 1857 y basta enunciar tal cuestión por no poder resolverla sino en un sentido negativo.

Entre las grandes conquistas hechas por ese código, que lo han hecho adoptar como bandera por el gran partido liberal y que se hayan fijado en él las más caras afecciones del pueblo mexicano, la sección 1ª del título 1º que consigna y garantiza los derechos del hombre y asegura su ejercicio con las más robustas sanciones, es la parte de ese código que si hay en él una porción que merezca más elogio que otra, es la más importante para la sociedad, la más digna de las profundas meditaciones del hombre pensador e ilustrado, el mayor título de gloria que pueden presentar a la posteridad y legar a sus descendientes, los patrióticos autores de ese monumento legislativo. En esa sección resumieron en términos precisos y enérgicos todos los grandes principios que la filosofía política y el movimiento intelectual del pasado y presente siglo, habían logrado establecer en favor de la humanidad y del progreso. En ella están registrados los títulos de nobleza del hombre y del ciudadano y establecida su completa inviolabilidad y su completa liberación de todo yugo a excepción del de la ley. Y en esa sección se encuentran consignados principios contra los cuales peca de la manera más clara la ley de 25 de enero de 1862.

El artículo 13 que se halla en esa sección declara, que nadie en la República Mexicana (nadie y por lo mismo, ni nacional ni extranjero)

puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Y la ley de 25 de enero de 1862 es una ley privativa y los consejos ordinarios de Guerra, a que confía el conocimiento de las causas a que dicha ley se refiere, son tribunales especiales. Es cierto que el mismo artículo contiene una excepción y es la de que el fuero de guerra subsiste solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con el servicio militar, pero el archiduque Fernando Maximiliano no pertenecía al ejército de la nación y, en consecuencia, los actos porque se le juzga, no tienen conexión ni exacta ni inexacta con la disciplina militar.

En la misma sección se encuentra el artículo 23, en el que además de anunciarse para más tarde la completa abolición de la pena de muerte en todo género de delitos, para preparar la cual se determina el establecimiento inmediato del régimen penitenciario, se declara ella abolida para los delitos políticos. Y la ley de 25 de enero de 1862, que al pretenderse aplicarla a Maximiliano no tiene otra tendencia que el castigo de un delito político, no impone otra pena que la de muerte a la mayor parte de los hechos que se propuso reprimir y entre ellos a los de que se hace cargo a nuestro defendido.

Es también cierto que el artículo a que nos vamos refiriendo establece también otra excepción y es la de que la pena de muerte podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera; pero es bien claro que no siendo Maximiliano natural de México, sino de Austria, el cargo de traidor a la patria no obra contra él y por lo mismo se encuentra en el caso no de la excepción, sino de la regla general. Es imposible, pues, sin desconocer las más simples inspiraciones del sentido común, pretender que la ley de 25 de enero de 1862 que en su carácter, en los tribunales que establece y penas que impone, está en perfecta contradicción con los artículos 13 y 23 de la Constitución de 1857, deba estimarse como una de las leyes expedidas en virtud de esa misma Constitución.

Es también cierto que el artículo 29 del Código Constitucional a que nos vamos refiriendo, autoriza en casos de peligro público, como los que ha corrido nuestra nacionalidad con la invasión francesa y conatos de establecer una monarquía, a suspender con ciertos requisitos y formalidades las garantías otorgadas por la misma Constitución. Pero lo

es igualmente, que dicho artículo, ni aun en los casos extremos a que se refiere, autoriza la suspensión de las garantías que aseguran la vida del hombre, pues están en él expresamente exceptuadas y de esta clase son las contra que peca la ley de 25 de enero de 1862. Ella, por lo mismo, ni aun en virtud de facultades extraordinarias, otorgadas con suspensión de las garantías individuales, pudo dictarse válidamente. Para hacerlo, puesto que ella importaría la derogación de los artículos constitucionales antes citados y por lo mismo una reforma de la Constitución, habría sido necesario conforme al artículo 127 del mismo código, que ese cambio en la legislación se hubiera hecho con el voto de las dos terceras partes de los individuos del Congreso de la Unión y aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados.

En todos casos, señor, no hay cosa más digna de respeto que la invocación de la ley, sobre todo cuando es la fundamental aquella cuya observancia se pretende. Pero si esto es así aun tratándose de una causa que ni por naturaleza ni por la persona del acusado llamará sobre sí la atención pública, el deber de respetar las prescripciones de la ley sube de punto tratándose de un negocio que ha de tener el mayor eco en todo el mundo civilizado y sobre el cual han de expresar libremente su juicio propios y extraños. Si en él se va a decidir de la suerte de Maximiliano, a su vez todos los países civilizados examinarán con severidad todos y cada uno de los actos del proceso, pronunciarán sobre la conducta de todas las personas que en él intervengan y ese juicio será, tanto más grave, cuanto que si es favorable cederá en honor del país y si es adverso cederá en su mengua. Uno de los mayores deberes del hombre es el que tiene de conservar su propia reputación; pero cuando ella está estrechamente ligada con la de la secta religiosa a que pertenece, con la de la comunión política de que forma parte, con la de la nación en que ha visto la luz, las proporciones de ese deber crecen de una manera casi infinita y de deber privado se convierte en deber público, constituyendo su cumplimiento uno de los actos más relevantes de abnegación patriótica. El hombre público que sobreponiéndose al grito pasajero de las pasiones hace lo que cree que conduce al buen nombre nacional y a su interés bien entendido, merece bien de la patria. Así, el ciudadano

general a quien tenemos el honor de dirigirnos, en los largos días que duró el asedio de Querétaro, resistió a la imprudente impaciencia, que en muchos había, de emprender desde luego la toma inmediata de la plaza, resistiendo hacer operaciones atrevidas que habrían podido comprometer el éxito de la causa que tenía a su cargo, vio dentro de pocos días coronados sus esfuerzos con la victoria más completa que recuerdan los anales de nuestras guerras.

La fuerza de las observaciones que preceden crecen prodigiosamente si se considera que, a consecuencia de la lucha que ha tenido que sostener la nación para salvar su independencia, la organización política y judicial del país exigida por la Constitución de 1857 está incompleta. Los tribunales federales mandados por ella establecer y que conforme los artículos 97 y 128 de la misma debían conocer de los actos de que se hace cargo a nuestro defendido, no existen en estos momentos.

Si ellos existieran, habríamos ocurrido a los mismos para que, en defensa de su jurisdicción Constitucional, reclamaran el conocimiento de la presente causa. Existiendo esa imposibilidad de hecho para usar de ese recurso, nuestro defendido está privado de hecho de uno de los remedios que le otorgan para su defensa las leyes del país en que se le está juzgando. Y esa privación, no legal sino puramente emanada de circunstancias, de hecho causaría ya una prevención desfavorable contra los procedimientos.

Es preciso que la jurisdicción a que se encomendó esta grave causa sea imparcial, inspirando todo género de confianza, de que los altos intereses de la federación, que van a ventilarse, serán bien discutidas y tendrán además el celoso custodio que según el principio Constitucional deben tener.

No existe el tribunal de distrito, ni otro de la federación a que debiera ocurrirse para iniciar una competencia que la justicia exige y la necesidad pública demanda. No hay un tribunal a qué presentarse por denegada apelación y ¿no será esto digno de tomarse en consideración por el señor general en jefe o por el Supremo Gobierno, en la causa más notable que acaso se haya presentado en los anales de los procedimientos políticos de este continente? Los tribunales de apelación tienen un objeto

santo, pues que son una garantía contra la influencia o las resoluciones de una pasión. ¿Qué hacer, pues, en circunstancias tan excepcionales como las de esta causa? El honor de los defensores, su amor al país y a los principios liberales exigen, que si alguna duda, aunque sea ligera, tuvieren el señor general en jefe, el fiscal o el asesor, se consulte al Supremo Gobierno si se organizan esos tribunales para evitar que el acusado quede privado de las defensas legales. Por tanto, de la manera más respetuosa y encarecida, suplicamos al ciudadano general en jefe del ejército del Norte se sirva declarar, que un ordinario no es competente para conocer de la causa que se forma al archiduque Maximiliano, y que deben conocer de ella conforme a la Constitución de 1857 los tribunales de la federación, o por lo menos si esta resolución le pareciere de tal manera grave que no creyese poder tomar sobre sí la responsabilidad de dictarla, consultar sobre los graves puntos que se han tocado al Supremo Gobierno, remitiéndole original o en copia el presente ocurso, pues así es de justicia.

Querétaro, 6 de junio de 1867.

Licenciado Jesús María Vázquez

Licenciado Eulalio María Ortega

SE AMPLÍA POR TRES DÍAS MÁS  
EL TÉRMINO PARA LA DEFENSA  
DE MAXIMILIANO

Telegrama remitido desde San Luis Potosí, junio 5 de 1867, a las siete de la noche.

Ciudadano general Mariano Escobedo:

En vista de la petición que ha hecho el ciudadano Mariano Riva Palacio en nombre de los defensores de Maximiliano, sobre que se le amplíe el término para su defensa, ha acordado el ciudadano presidente de la República, que sobre la prórroga concedida antes, se concedan tres días más, contándose desde la conclusión de la prórroga antes concedida. Estos tres días se conceden como un término común a Maximiliano y a los otros dos procesados, para que puedan aprovecharlo también en su defensa, bajo el concepto de que no se concederá otra prórroga, por ser esta la segunda que ha concedido el gobierno para dar a la defensa la amplitud posible, hasta donde lo ha estimado compatible con la razón y el espíritu de la ley.

Sírvase usted disponer que se haga saber a los tres procesados esta resolución.

(Ignacio) Mejía



MAXIMILIANO RECONOCE SE LE TRATA BIEN

Querétaro, junio de 1867<sup>8</sup>

Soy prisionero de guerra, pero no tened ningún miedo, se me trata de una manera que no es en ningún modo una violación de las leyes y costumbres de los países civilizados.

Maximiliano

---

<sup>8</sup> Correspondencia dirigida a *New York Herald*, bajo la fecha de 2 y 3 de junio por su agente especial en Querétaro.

NO SE LOGRA LA PRÓRROGA DE UN MES

Telegrama. San Luis Potosí, junio 9 de 1867

Señores licenciados don Eulalio Ortega  
y don Jesús María Vázquez

A pesar de mil esfuerzos que hemos hecho para obtener del señor presidente y de su ministerio una prórroga de un mes, se nos acaba de decir, ahora que son las tres y media de la tarde, por estos mismos señores, que no es posible darla ni por un momento más.

Creemos, que aunque camináramos toda la noche, cumpliéndose dentro de poco el término, no llegaríamos oportunamente para la defensa que ustedes habrán preparado ya para presentarla acaso dentro de pocas horas. Perdida tenemos toda esperanza; pero es preciso, sin embargo, que en caso de una sentencia adversa, hagan ustedes porque todo llegue a conocimiento del señor presidente, antes de la ejecución de dicha sentencia.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre

## INSISTEN LOS DEFENSORES DE MAXIMILIANO EN QUE SE SUSPENDA EL CONSEJO DE GUERRA

Ciudadano presidente:

Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, defensores nombrados por el archiduque Fernando Maximiliano, al ciudadano presidente, con el debido respeto, ocurrimos exponiéndole: que en la mañana de hoy, a las diez y media, hemos recibido el certificado que en nueve fojas útiles acompañamos. Al recibir estos pliegos, se nos hace especial encargo, por nuestros compañeros de defensa, de ocurrir al Supremo Gobierno exponiéndole cuanto a nuestro juicio deba decirse, apoyando la incompetencia del consejo ordinario a que se ha sometido al archiduque Maximiliano; pero la premura con que se obra en la causa, no permite más dilación y mayores explicaciones que las precisas para esta idea: un Consejo de Guerra ordinario no puede juzgar de los actos de conducta y administración, en un período de tres años, del archiduque Fernando Maximiliano de Austria, teniendo grandísimo interés la federación en el debate claro, en la justificación plena de todos los actos en que sus derechos se hallan afectados por la violación misma del principio constitucional.

La sola indicación hecha, es superior a todo esfuerzo del entendimiento y los hombres de Estado que gobiernan a nombre de la República alcanzan, sin duda, mejor que nosotros, la necesidad de poner de manifiesto los grandes hechos en el período que corre de 1862 a la fecha y las responsabilidades a que ellos dan lugar. La federación, representada en esta gran crisis por el supremo magistrado de la nación, tiene, sin duda, el más alto interés en prevenir los males de un porvenir dudoso, por lo menos para el país y contra cuyos peligros no puede presentarse arma más poderosa que la verdad bien establecida en un

proceso que resista la severidad del examen a que ha de someterse en el mundo entero.

El Consejo de Guerra, armado por la ley de 25 de enero de 1862, si no se permiten las defensas del acusado, le hará sentir el rigor de esa ley; pero el misterio en esta causa, que tan profundamente afecta los derechos de nuestra patria, la dejará desarmada e impotente para pedir, con evidente justicia, la reparación de los males que una guerra injusta nos trajera.

Sin tiempo para más, y confiados en que se tendrán presentes todas las observaciones que en lo verbal tuvimos el honor de presentar a la consideración del ciudadano presidente y su digno ministerio, concluimos suplicándole se sirva mandar, atendidas las razones que exponen nuestros compañeros de defensa, que pase la causa que se forma al archiduque Fernando Maximiliano de Austria, a los tribunales de la federación; y si este recurso creyere que debe hacerse ante los de Justicia, que se declare así, designando también el punto a que deba ocurrirse, por no haber aún en Querétaro tribunales organizados.

Esta solicitud es de obvio derecho y por lo mismo: Al ciudadano presidente suplicamos se sirva acceder a ella, en lo que procederá conforme a justicia.

San Luis Potosí, junio 10 de 1867.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre

RIVA PALACIO Y MARTÍNEZ DE LA TORRE  
PIDEN EL INDULTO DE MAXIMILIANO

Ciudadano presidente:

Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, defensores nombrados por el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, en la causa que se le formó como prisionero de guerra rendido en la mañana del 15 del próximo pasado mayo, al ciudadano presidente de la República, con el debido respeto, ocurrimos exponiéndole: que próxima a sentenciarse esta causa y temiendo supuesto el rigor de la ley porque se le juzga, que se imponga la pena capital a nuestro defendido, ocurrimos en su nombre pidiendo la gracia de indulto.

Acaso en los anales de los procesos políticos, no se registra uno en que más justificada sea la gracia que solicitamos.

Agobiada nuestra patria por una guerra civil en que han perecido muchos de sus mejores hijos, las pasiones se exacerbaban; y diciéndose agraviadas por una suspensión de pagos, tres naciones de Europa tomaron la resolución de intervenir en nuestros negocios interiores. Debatido el objeto de la invasión en las playas de nuestra patria, se separaron de la empresa los gobiernos de España e Inglaterra. Francia, sola, afrontó los peligros de una lucha en que el espíritu nacional de México debía jugar el heroico papel de vencedor, que desprovisto de elementos de riqueza y de poder, su victoria la debiera al inmenso amor que el pueblo mexicano tiene a su independencia. Errantes anduvieron sus buenos hijos, pero con la frente levantada, porque la causa que defendían era nacional y justa, y el porvenir jamás cierra sus puertas a la justicia.

El supremo magistrado de la nación, después de la lamentable ocupación de Puebla, se vio obligado a abandonar, por la irresistible

fuerza de los acontecimientos, la Ciudad de México y el día 10 de junio de 1863 entró a la capital el ejército francés. Poco tiempo después se preparaban trabajos para que se diera un nuevo gobierno el país.

La historia de este período nadie la ignora y a nosotros sólo nos toca decir, que nombrado el archiduque de Austria, por una Junta de Notables, emperador de México el día 10 de julio de 1863, no bastó este nombramiento para resolverlo a venir; porque no se creyó llamado por la voluntad de los mexicanos. Nuevas condiciones de legitimidad impuso para resolverse. Transcurridos algunos meses, se le presentaron diversas actas que, a su juicio, según nos aseguró, y el de respetables abogados de Europa y América, le daban derecho para poderse reputar, nombrado por México, para ejercer la autoridad o poder de emperador. Esta creencia lo determinó, según nos ha referido también, a venir al país, animado de una firme resolución de defender a toda costa la independencia de México y la integridad de su territorio que creía amenazadas. Muchos actos de su administración así lo acreditan, y un gran número de pruebas pudieran haberse presentado en juicio, si el proceso formado lo hubiera permitido. Documentos de indisputable fe habrían visto los jueces, y acaso se hubiera mitigado el rigor de la ley. Fácil habría sido demostrar, según nuestro mismo defendido con toda sinceridad nos explicaba, la rectitud de sus intenciones al aceptar el trono de México, y su firme resolución de sacrificarse por la independencia de su nueva patria y por la integridad de su territorio.

Envueltos quedan, en el misterio de un proceso meramente militar, los grandes actos de defensa del acusado, quien, con el calor de la más profunda convicción, nos decía: que la historia sabrá presentar más tarde, sin pasión, sus penas y esfuerzos para que México no se complicara en graves cuestiones internacionales. El archiduque nos repetía, que éste era para él su título de orgullo y que si a su limitada defensa no podían acompañarse documentos de su justificada conducta, personas habría más tarde que honraran su memoria, presentando fielmente al pueblo mexicano y al mundo entero la verdad, a la que estaba ligada su rectitud de intenciones.

Embarazada la defensa en ese terreno, que demanda tiempo para aducir las pruebas, creemos de un deber imprescindible que en esta exposición que hacemos a toda prisa, se consignen especies que tienen, en el sentimiento mismo de la nación, cierto carácter de verdad.

Sea cual fuere la responsabilidad que pese sobre el archiduque de Austria, ¿podrá atribuírsele una intención criminal en un grado superior a la escala de delitos comunes? ¿No deberá tomarse en cuenta, que en el fondo de su conciencia, habiendo algún temor sobre la ilegitimidad de su elección, se habían dado pasos que en apariencia justificaban el origen de su nombramiento, y que estas apariencias se le presentaban con el sentido de la verdad?

Al hablar de este punto, el archiduque nos decía: "Yo no he venido a hollar las instituciones de este país, que, agitado por la guerra civil, era víctima, mucho antes de mi llegada, de una invasión que en mis propósitos estaba combatir, obteniendo para mi nueva patria los ofrecimientos de los gobiernos de Europa, sin humillaciones del más puro sentimiento nacional. La probabilidad de buen resultado, el éxito de esta empresa, podrá ponerse en duda; pero no la buena fe de mi conducta. Jamás creí, al venir, que se me hiciera responsable de una situación que no había creado y de la cual, ni Dios ni la posteridad me juzgarán reo. Yo seré responsable de los actos de mi administración; pero jamás de acontecimientos en que ningún participio tuve. En el porvenir del gobierno que debía fundar, comprometía también el mío, mi nombre y el de mi familia; y por muchos meses, con sangre fría, sin el estímulo de la pasión, creí que podría hacer el bien de esta nación, que amaba por gratitud."

¿Puede este error ser un crimen que merezca la pena capital? ¿La pena de una apreciación inexacta, será tan severa como la del mayor delincuente del orden común?

Bien sabemos que al pesarse en la balanza política los daños de un trastorno público, personas hay que los estiman superiores al mayor delito que un individuo pudiera cometer. Pero esa opinión está condenada por los hombres cuerdos; porque el crimen del individuo tiene la

reprobación del universo entero; no hay, para cometerlo, la conciencia tranquila, que es la fuente de lo excusable.

Nuestro defendido no se reconoce, sin embargo, como causa del trastorno del país. La bandera de la República flameaba lejos de la capital y de muchos estados, cuando se presentó como emperador. Ni se reputó conspirador, ni tampoco revolucionario; "y el mal éxito de la empresa —nos decía— acredita la fuerza de los sentimientos republicanos en el país; pero nunca un crimen de mi parte, que al obrar como lo hice, me animaba una recta y patriótica intención. Si el instinto de la humanidad es hacer el bien, yo quise y juzgué que podía hacerlo a un pueblo que creí que me llamaba".

Los defensores, al oír esta instrucción que nos parecía franca y sincera, comprendimos la posibilidad, en personas honradas, de comprometerse en causas políticas que merecen toda la indulgencia del gobernante al ver restablecido su poder. La prueba porque ha pasado la República, mientras más dura ha sido, más la engrandece y su nombre y su porvenir serán más grandes mientras menos severa sea con quien, rendido a la discreción del general en jefe, nunca se conforma con los cargos de una perversidad indisculpable de intención, cuando se acepta por error el poder, como derivado del voto público. Abierto a la razón el cuadro de estos sucesos, la ley de 25 de enero de 1862 no es aplicable, porque no pudo estar en la mente del legislador poner frente al gobierno constitucional, otro, llámese de hecho o de usurpación, que durara tres años y fuera reconocido por toda la Europa", por el Brasil, Rusia, etc.

En la fría razón de los hombres de Estado, no puede caber que se niegue al tiempo y a los acontecimientos su propio nombre, su vida y las consecuencias que se derivan de su existencia. Si la política tuviera ese poder, la omnipotencia del hombre sería un hecho y la verdad estaría subordinada a las facultades del gobernante. Llámese por lo mismo imperio, dictadura, poder usurpado, etc.; la existencia de ese poder ha sido un hecho que no pudo haber estado en la mente del legislador que se juzgase en un Consejo de Guerra, por personas incompetentes para las altas cuestiones de que provenían los cargos al que obraba en virtud de ese poder.



Mas ya que este fue un hecho, a los defensores corresponde, para el desgraciado evento a que se refieren, pedir una gracia, que esperan sea otorgada por las consideraciones que pasan a exponer.

En diciembre de 1861 los españoles invadían ya a Veracruz y el 5 de mayo siguiente, el triunfo de las armas del país acreditaba que sólo Francia luchaba con nuestra patria. En todo este período, si es que había sonado el nombre del archiduque de Austria, ningún compromiso lo ligaba en esa época y retiradas las tropas francesas, casi un año han necesitado para ocupar a Puebla. Transcurrido todo el de 1863, es cuando se le llamó. De entonces a su llegada ha transcurrido otro año y la regencia había legislado y gobernado, no por su encargo o instrucción, como lo justifican los primeros actos del archiduque. Todavía a su llegada; antes de nombrar ministerio, nos ha referido que quiso conocer la opinión del país y que al legislar como emperador, tuvo la convicción de que la República estaba reducida a una extensión muy limitada del territorio.

Tan cierto es esto, que se ha hablado siempre con elogio del número de personas que acompañó hasta Paso del Norte al ciudadano presidente de la República. Esta honra, justo testimonio del patriotismo constante de algunos mexicanos, es un monumento que en lo moral se ha levantado a los sostenedores de las instituciones; pero es también una prueba fehaciente de que ese poder, que se llamó imperio, tuvo una existencia indisputable que miles de hechos la acreditan.

La fuerza física que lo apoyara, no podía reputarla elemento invencible y poderoso, hasta el extremo de callar las voces que proclamaran la República.

Indomables campeones de ésta, en algunos puntos sostenían con su sangre los altos sentimientos de su patriotismo; pero estaban también reducidos a un corto número de defensores que, si confiaban en el porvenir de su causa, era porque al través de esa calma o indiferencia aparente de la nación, veían sólo oculto el grito que un día debiera darse proclamándose por todos la libertad, la República, la independencia de su patria.

Previsión será ésta de un espíritu superior; inspiración acaso sólo de un acendrado patriotismo. El hecho de actualidad lo está acreditando y esos hombres merecen bien de la patria; sus nombres se escribirán un día con el indeleble carácter de una tierna tradición, que las generaciones dan con su memoria a los hombres públicos que honran el lugar en que nacen; pero esto mismo ¿no acredita en Maximiliano que pudo equivocarse de buena fe en sus apreciaciones? ¿que el éxito de sus primeros pasos le haya parecido el afecto de un pueblo que quiere un rey, la obediencia de una nación que se había cansado de la República?

Ésta vivía en el corazón de todos, y el silencio de cierto tiempo fue sólo el estupor de sucesos imprevistos que en nada ligaban el corazón; pero ellos podían perturbar, como perturbaron, el juicio de este príncipe que, en su error, comprometió a otras personas.

¿No deberá ser esta consideración de algún peso en el ánimo de las que forman el gobierno, para atenuar una pena que nuestra misma Constitución repugna? ¡Pena horrible, reservada en los tiempos modernos sólo a grandes criminales!

Reciente está el hecho de una colosal insurrección en la República del Norte y todos los gritos de odio y venganza, en los momentos del conflicto armado, se volvieron calma y reposo cuando el gobierno tuvo la conciencia de haber dominado la revolución. No ha corrido allí más sangre que la de un infame asesino. Las causas políticas no han terminado con el fin dramático de los hombres de la insurrección.

En Europa tenemos también, en nuestros días, ejemplos de indultos otorgados a jefes de rebelión, a pesar de que contaran los gobiernos muchos años de establecidos y a esta gracia se debe, acaso, la paz interior de aquellas naciones.

México, por desgracia, ha visto muertos, entre los primeros de sus hijos, a Iturbide y a Guerrero, figuras colosales de nuestra independencia; la lucha prolongada ha seguido esa escala de exterminio y ningún fruto ha dado en beneficio del país, sirviendo sólo de prueba, que las causas políticas no cuentan menos defensores cuando el patíbulo pone término a la vida de los hombres.

Tal convicción fue, sin duda, la más poderosa causa para que los legisladores de la Constitución de 1857 sostuvieran, con un valor digno de elogio, la extinción de la pena capital por causas políticas y así lo establecieron en su artículo 23.

En la sabiduría de aquellos legisladores, además de la virtud inestimable de hacer el bien, había la máxima de que el extravío de sus semejantes no se castigara con una pena que impide la rectificación del error mismo. Las revoluciones se combaten con las armas; pero ha de haber siempre un fondo de rectas ideas que hagan amar la bandera de los gobiernos; lo contrario, exaspera los sentimientos, excita el delirio fanático de una causa y el cadalso es entonces una escuela de martirio que eleva los principios que se combaten.

La terrible idea que se apodera en los gobiernos vencedores, de armarse de una poderosa energía, que precipita muchas veces en un abismo los más caros intereses de la patria, es acaso el fundamento más sólido de los sostenedores de que la pena de muerte no puede aplicarse por causas políticas. El gobierno, en su victoria, es entonces el acusador, el fiscal, el juez, el tribunal, el ejecutor y, al fin, los gobiernos son hombres capaces de pasiones que pudieran combinarse, sin una premeditada y dañada intención, con una intransigente energía que en nada apreciara los justos motivos de atenuación de las penas. Tal severidad, que en nada estima los errores excusables cerrando los ojos y tapándose los oídos para no ver ni oír las súplicas, las quejas, las disculpas, las excusas del partido vencido, pudiera mirarse como un acto de enemistad, más bien que de recta aplicación de justicia, y en esa transformación de papeles del poder público, la sociedad estaría siempre expuesta a los peligros de una cadena sucesiva de ejecuciones.

Los legisladores de 1857 tenían a la vista el triste cuadro de nuestras revoluciones, que han dado ya materia para escandalizar al mundo entero, y en esa misma época de exaltación, la más profunda que entre nosotros se haya conocido, con un esfuerzo que está reservado al porvenir apreciar, manifestaron, con su conducta pública, que no querían el exterminio de sus enemigos, aspirando sólo a una conversión cuya época no podía ser aquella en la que sólo se depositaba el germen de un

bien que más tarde debiera cosecharse. ¿Qué tiempo pudiera ser más a propósito que éste? ¿Cuándo pudiera presentarse ocasión más oportuna? Jamás los partidos han estado más cerca de entenderse y esa Constitución debe ser el vínculo de unión para mexicanos que, aleccionados por la desgracia, piden a los vencedores una mano de hermanos por medio de la observancia de una prescripción humanitaria de la Carta Fundamental. ¡Cuánto bien encerraría hoy el respeto profundo del artículo 23 de la Constitución! ¡Este ejemplo sería más eficaz que mil cadalsos que se levanten para ahogar en su propia sangre a los vencidos!

Los defensores saben que el ciudadano presidente cree que está en suspenso la Constitución de 1857, aun en sus bases o principios fundamentales; pero esa misma suspensión, aceptándola como una verdad, ¿obliga a imponer de una manera irremisible la pena capital al archiduque de Austria y con él, acaso, a algunas otras personas? ¿No es más lógico y humanitario amoldar el uso de las facultades discrecionales a los principios fundamentales de una Constitución por la que ha luchado la República y quiere que no sea una letra muerta?

Las leyes fundamentales merecen tal acatamiento y respeto, que aun en el uso de ese poder con que se reviste a veces a los gobiernos, se cree, por distinguidos publicistas, que no se pueden tocar. Así lo enseña Vattel diciendo: "Pertenece esencialmente a la sociedad hacer las leyes que han de arreglarla, el modo de gobernarse y la conducta de los ciudadanos cuya potestad se llama Poder Legislativo. La nación puede confiar su ejercicio al príncipe o a una asamblea o a ésta y al príncipe juntamente, los cuales tienen desde entonces un derecho de hacer nuevas leyes y abrogar las antiguas. Pregúntase si su poder se extiende hasta las fundamentales y si se puede mudar la Constitución del Estado. Los principios que hemos establecido, nos obligan ciertamente a decir, que la autoridad de estos legisladores no alcanza a tanto y que deben mirar como un sagrado, las leyes fundamentales, si la nación no los ha autorizado especialmente para mudarlas; porque la Constitución del Estado debe ser permanente; y puesto que la nación la ha establecido primero y ha confiado después el Poder Legislativo a ciertas personas, las leyes fundamentales están exceptuadas de su comisión. Y en fin, si la

Constitución autoriza a los legisladores, ¿cómo han de poder mudarla sin destruir el fundamento de su autoridad?"

Esta doctrina es una consecuencia precisa en este sabio, que antes ha dicho que la Constitución del Estado y sus leyes, son la base de la tranquilidad pública, el apoyo más firme de la autoridad política y la garantía de la libertad de los ciudadanos. La lucha de cinco años por las instituciones, gloriosa para la democracia de México, sería estéril, si a la hora de invocar sus principios, cuando el más espléndido triunfo corona heroicos esfuerzos, se contesta que esas instituciones no tienen valor ni fuerza alguna; que la ley viva es la terrible de 25 de enero de 1862. Pocos defensores tendrían esta doctrina, cuando el emblema de unión, el punto de partida, el objeto de la lucha, ha sido el sacrificio de todo otro principio, de toda otra aspiración que no fuera el reconocimiento absoluto de la Carta de 1857. ¿Para cuándo, entonces, se reserva la aplicación del artículo citado? ¿Para cuando no haya rebeliones? ¿Para cuando no haya a quién aplicarle pena alguna? A tanto equivaldría la severa aplicación de la ley de 25 de enero de 1862, con la cual se pueden levantar tantos cadalsos, que la imaginación huye del cuadro de horror que se le puede presentar. Con ella es omnipotente el ciudadano presidente para llamar al patíbulo a los vencidos; pero en la exageración de patriótico delirio, pudiera esa ley devorar la sangre de muchos amigos de la República.

Si fuera posible ver en dos líneas paralelas la marcha de ésta, siguiendo en una la carrera que trace la sangre y en otra la de la gracia, la de la atenuación, el ciudadano presidente apartaría aterrorizada su vista de la primera, que no hará más que llenar de luto y de amargura el corazón mexicano, toldando para el porvenir las más lisonjeras esperanzas de unión y bienestar de nuestra patria.

Es preciso repetir, que jamás ha habido en la nación sentimientos más francos de adhesión al código de 1857, y que al ciudadano presidente de la República, defensor constante de los principios liberales, toca, que lejos de exacerbar la pena de los vencidos y estimular la ira, la venganza de los vencedores, se procure la reparación sólo de los males de los hijos de esta patria desgraciada. ¿Se remedian éstos con enseñarles la tumba del archiduque de Austria? ¿La reparación será satisfactoria,

diciendo al pueblo mexicano: "Querétaro fue el sepulcro del que por tres años México le vio ejercer un poder usurpado, llamándose emperador?" ¿Preferirá la nación la muerte pronta de Maximiliano, aunque la historia del año de 61 a nuestros días quede sepultada con él en el misterio del proceso militar? Por la muerte de un hombre, ejecutada a toda prisa, ¿querrá el país perder el derecho a sus grandes reclamaciones, desarmarse ante el mundo entero, cuando este mismo archiduque de Austria ha dicho: "quiero que México me juzgue sin la precipitación de un proceso sólo militar, porque deseo que conozca revelaciones importantes para su existencia, para su bienestar"? ¿Cuándo habrá una causa que más interese a la federación? Entonces, ¿para qué sirven los tribunales? ¿qué interés hay en una ejecución misteriosa que pudiera en lo futuro siniestramente interpretarse? La muerte, aplicada por un Consejo de Guerra, llenará transitoriamente de satisfacción la impaciencia de algunos; pero no es esto lo que puede querer el país. La muerte de Maximiliano, prisionero, podrá llamarse por algunos justa venganza nacional; pero nunca merecerá los honores de un gran pensamiento de hombres de Estado. Si la muerte debiera ser la pena de Maximiliano, el proceso que la preparara debía ser, al menos, digno del caso más notable de violación que puede encontrarse en la historia del continente americano. No está aún inquirido el origen de esa invasión que a nuestros puertos mandaron tres grandes naciones de Europa; y antes de tan importante indagación y de saber las inmensas responsabilidades a que da lugar, se ciega la fuente de todo examen, con grave e irreparable daño de toda la República. Vivo Maximiliano, a su honor corresponde esclarecer la verdad y, en su nombre, ofrecemos que así lo hará; porque en las instrucciones que nos dio, repetidas veces marcaba que creía de imprescindible deber que se conociera la historia misteriosa, la parte secreta de nuestras relaciones internacionales. ¡Qué dieran otros pueblos de la tierra por tener a la mano una prenda viviente de tanto interés para su futuro! ¡Cuántas ventajas podrán obtenerse para la existencia de México, como verdadera nación independiente, de la vida de un príncipe, ligado por tantos títulos con los soberanos reinantes hoy en Europa!

La misma República americana ha manifestado un grande interés por la vida de este príncipe; y si la nota que se pasó, para esa recomendación, ha podido herir en algo el sentimiento nacional, que la ha visto como una amonestación, es preciso, con la calma que deben tener los representantes de esta República, ver en ella, no una exigencia de superioridad, sino un buen deseo, por las simpatías y amistad que tiene acreditadas en favor de nuestra independencia, reclamando los derechos de México contra la intervención.

Ésta no es aceptable, ni en el sentido moral, sea cual fuere el gobierno de que venga y, en este terreno, el mejor intérprete de la opinión pública ha sido el Supremo Gobierno. Es éste, sin duda, el título de más estimación que México tiene para su digno presidente los ministros que, en crisis tan peligrosa, lo han acompañado.

¿Pero por esto se deberá desoír un buen consejo, se deberá despreciar una recomendación? El poder de esta nación amiga y el estilo de su nota, ¿da derecho para no estimar en todo lo que valen sus buenos oficios? Si la recomendación se funda en un principio de moral; si es cierto que los principios republicanos detestan esos patíbulos que levantan las pasiones políticas, ¿se deberá, a pesar de ellos, contrariar una verdad, sólo porque se dijo en un estilo que lastimara?

El espíritu de los hombres públicos de México es muy superior a esas apreciaciones de quienes ven las cosas al través de una susceptibilidad que se hiere de las formas, para sacrificar la justicia. Por una cuestión de estilo, no deben olvidarse los servicios que en la adversidad se reciben; y si se ha pedido algo que la justicia y los principios liberales aprueban, esa voz debe ser escuchada con toda la atención que merece el interés de hermanos que deben tener un lazo de unión.

Podrá haber persona que quisiera contestar esa nota con la muerte inmediata de Maximiliano; pero no hay temor de que tan ilustrado gobierno pueda dar oído siquiera a esos gritos de una pasión que, aunque fuera patriótica, se parecería más a un delirio, que a la expresión prudente y discreta del verdadero amor al país.

Nada más cuerdo, que en las ocasiones en que México pueda acreditar su gratitud, hacerla patente; y hoy se presenta la más a propósito, para justificar que México es reconocido a los buenos oficios de las naciones amigas.

La muerte de Maximiliano será una demostración de energía; pero no será, es preciso repetirlo, un acto de prudente política ni de habilidad de gobierno. Desarmar al país de sus incontestables derechos que podía hacer valer en lo futuro, matando al archiduque de Austria, podrá ser muy bueno; pero si la nación pudiera ser escuchada, no serían sus mejores intérpretes los que quieren esa muerte, que se lleva la ocasión de presentar a México grande y digno del lugar a que está llamado.

En esas confidencias de solemnes momentos que un acusado tiene con sus defensores, mucho nos impresionó el tono de verdad con que el archiduque nos decía: "Siento en el alma que mi muerte vaya a causar a la República algunos días de pena. Mi vida no sería nunca nociva al país, por cuya felicidad hago mil votos".

Abundante es la materia bajo el aspecto internacional; pero esta gracia de indulto debemos más bien apoyarla, contestando a los cargos que se hacen a nuestro defendido. El pormenor de ellos exigiría una extensión que debemos excusar, presentando lo capital de esos cargos y sus defensas.

"Se me ha acusado de un crimen que se quiere identificar o hacerlo parecido, al menos, al delito de traición a la patria, y sólo se me puede juzgar —decía Maximiliano— por mi conducta práctica y las disposiciones que dicté".

Encargo muy especial nos hizo de llamar la atención de sus jueces sobre diversos actos que nos marcó; y ya que por la premura del tiempo y la necesidad de venir a hablar con el ciudadano presidente y su digno ministerio, no pudimos regresar a tiempo para formar parte en la defensa, habiéndonos negado toda prórroga y todo término para rendir alguna prueba, séanos lícito insertar aquí algunas de esas piezas en que creía el archiduque encontrar la absolución de cargos tan injustos, a su juicio, que no han podido ser objeto del breve y ligero examen de un Consejo de Guerra. Nos marcó, por principio, como descargo de toda idea de atentar



contra la independencia nacional, su juramento espontáneo presentado ante la comisión de Notables el día 10 de abril de 1864, diciendo: "Yo, Maximiliano, emperador de México, juro a Dios por los Santos Evangelios, procurar, por todos los medios que estén a mi alcance, el bienestar y prosperidad de la nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio".

Notable fue su discurso del 16 de septiembre en el pueblo donde se proclamó la independencia de México, 54 años antes, por el benemérito Hidalgo.

Con Francia, nos aseguró que jamás había tenido compromiso ni pacto alguno que comprometiera su honor y que, sobre el particular, de grande interés sería para la República el conocimiento pleno de la historia de estos cuatro años; que ningún tratado celebró con las potencias extranjeras, que pueda ocasionar el menor gravamen para México.

En cuanto a la política interior, grande empeño tuvo en que se leyera el decreto de 6 de julio de 1864, en que se concedió una amnistía general; y que, para quitar toda ocasión de discordia que avivase los resentimientos, dictó una circular, en 27 del mismo mes y año, que dice así:

Secretaría de Estado y del despacho de Gobernación.—  
Circular.— México, julio 27 de 1864.

Siendo el más vivo deseo de S. M. el emperador, y su más constante anhelo, borrar aun las huellas de las disensiones que por tanto tiempo han afligido al país, y anudar los vínculos de fraternidad de la gran familia mexicana, no puede ver con indiferencia que, al hablarse de algunos individuos, se empleen calificaciones odiosas que pugnan con su política y benévolos sentimientos.

Por esto, en el decreto que se sirvió expedir el día 6 del corriente, llamando a su derredor a los que habían combatido y combaten al

imperio, sin mancillarse con crímenes, no se lee la palabra indulto.

S. M., pues, me manda prevenir a V. S., no exija a las personas que, deponiendo las armas, quieran retirarse a la vida privada, otra manifestación que la de vivir quieta y pacíficamente, sin tomarles cuenta de sus opiniones y sentimientos.

Me manda igualmente recomiendo a V. S. la mayor circunspección y mesura en el lenguaje oficial, eliminando las frases y calificaciones con que hasta aquí se han zaherido los partidos y que sólo sirven para mantener vivo el fuego de la discordia.

Manda, en fin, S. M., que esta vigilancia se extienda a todas las publicaciones de la prensa, dictándose contra los infractores las providencias que merezcan sus faltas y que reclaman la unión y la concordia que debe reinar entre los mexicanos.

El subsecretario de Estado y del despacho de Gobernación, José M. González de la Vega.

En idéntico sentido se dictó otra circular de 2 de diciembre del mismo año, que en su primer párrafo dice:

Con profundo desagrado ha visto el emperador las providencias dictadas por esa prefectura, respecto de los jefes, oficiales y empleados del antiguo gobierno y que han vuelto a buscar seguridad al abrigo del imperio. El regreso de esas personas indica por sí mismo una protesta de obediencia, sin que sea necesario exigirles otras demostraciones que, pudiendo humillarlas, no son de utilidad alguna para la seguridad pública... etc., etc.

Hay un cargo, que es el de la publicación de la ley de 3 de octubre de 1865, que se nos explicó diciendo: que un inexacto supuesto sobre el abandono del territorio nacional por el presidente de la República fue tal

vez la sola causa de una ley que más tarde tuvo que derogar el mismo Maximiliano, aprovechando cuanta ocasión se le proporcionó de moderar ese rigor que, según nos dijo, fue tomado de otra ley dada con anterioridad por alguno de los gobiernos mexicanos.

Otorgó todos los indultos en causas políticas, aunque en la misma ley se negara el pase a la solicitud.

Tan ajeno estaba de sentir algún desagrado siquiera con la defensa que México había hecho en la guerra extranjera, que mantuvo el respeto que le inspiraban las acciones heroicas, y pública ha sido la demostración de simpatía por la memoria del general Zaragoza.

"La persona del señor Juárez no encontrará —nos dijo— una sola especie, en la multitud de leyes y decretos promulgados, que lastime su reputación. Creí siempre que era honrosa la constancia de sus esfuerzos." Y al hablar de la alta estimación de ellos, añadió: "Mi regreso de Orizaba no tuvo otro objeto que no complicar más al país con una nueva entidad de discordia, que pretendía levantarse por las fuerzas francesas, obligándome a salir del país para apresurar el resultado de trabajos iniciados, con algunos meses de anticipación. Regresé con el firme propósito de procurar un allanamiento con el jefe de la República, por medio de un congreso que diera la paz al país y cuya idea habían aceptado con gusto las personas que me acompañaban. El choque militar y la firme resolución del señor Juárez de no aceptar transacción alguna me hizo perder toda esperanza. Alimenté, sin embargo, alguna, viniendo a Querétaro para ese objeto y comisioné al señor licenciado don Antonio García, para preparar los medios de avenimiento. Nada se obtuvo y el resultado es el juicio que se me forma. Presintiendo la desgracia en que debía caer, si el Congreso u otro medio de pacificación no se aceptaba, hice depositar, en persona en quien tenía toda confianza, mi abdicación, para el caso precisamente de que se me aprehendiese. Era un acto libre de mi parte, al que no quise se diese por algunos la interpretación de forzado. Todo lo encaminaba a la pacificación, que no tuve la dicha de lograr".

Tiempo es ya de que los defensores, sin más recuerdo de lo que era una instrucción para la defensa, nos ocupemos sólo del indulto que se

pide, no para quien la sentencia haya declarado absuelto, sino para quien, condenado a muerte, solicita la vida. Se suplica que esa pena, reservada por los hombres pensadores de este siglo sólo para ciertos delitos del orden común, no se ejecute en la persona del archiduque de Austria.

Venimos a nombre de la humanidad, de la democracia, de la libertad, de la Constitución, a pedir se suspenda el golpe de la muerte sobre Maximiliano. No sólo hay en los códigos esta pena; y al pedir el perdón de la vida, recordamos al ciudadano presidente, que esta gracia que otorgue es una de las más nobles prerrogativas de su poder.

La clemencia es la virtud de los republicanos y de ella jamás vienen males irreparables, que son siempre conquista funesta del poder de la tiranía, que con el rigor marca las huellas de un desenfreno que arranca mil lágrimas a la sociedad.

La reflexión, después de cierto tiempo, ha producido, aun en el ánimo de los más descontentos, la profunda convicción de que la paz sólo puede venir del triunfo del principio Constitucional y la grande esperanza del país es, que templada la situación por la observancia de los principios mismos que se proclaman, sean un vínculo que ligue a los partidos, sin dar cabida a la agitación amenazadora de pasiones desenfrenadas.

¡Qué bello porvenir tiene el pueblo mexicano, si a la sabiduría del gobierno y al prestigio de su triunfo pudiera agregar la observancia precisa, indeclinable, de los principios que sostiene la Constitución!

La gracia de perdón puede ser para nuestra patria una fuente inagotable de bienes, que más se estiman cuando más se necesitan. Hoy la sociedad pide la paz y ésta no viene con la sangre que derrama el luto y la consternación. Al derramarla, si el país tiene algunos que aplaudan, la generalidad verá abrirse un abismo sin fondo de desgracias; porque el rigor es un mal de funesto contagio que lleva a los vencedores adonde no se piensa, adonde no se cree, adonde no se conoce; pero que por todas partes encuentra lágrimas y desolación.

Hay en las grandes crisis un estupor que sólo se disipa cuando el gobernante habla como padre que ama la sociedad que gobierna, cuando se ahuyenta ese amago terrible de la muerte, que es el fruto de la discordia; cuando se reciben con limpio corazón las excusas de los

extraviados. México es una nación, donde diseminados lloran la mayor parte de sus hijos las desgracias de una lucha fratricida, y la señal de nuevos patíbulo sería un fatídico anuncio de calamidades nuevas que amargarían la existencia de los vencidos y también la de los vencedores.

Perdón de la vida de Maximiliano pedimos nosotros y él será, sin duda, bien visto de este país generoso que conoce ya todo lo que vale la filantropía de los principios liberales. En estos días se abrieron las puertas de la prisión de Jefferson Davis y su libertad fue aplaudida por el mismo pueblo que sintió los horrores de una discordia civil. Nosotros, los defensores de Maximiliano, al interponer para su caso este recurso, cumplimos con un deber penoso, pero de honra; porque elegidos, sin duda, por la distancia a que estábamos de su política, mayor ha debido ser el empeño de nuestro encargo en su infortunio. Obligados, por desgracia, a venir a esta ciudad, el tiempo no permitió ya nuestra presencia ante el Consejo y este sagrado deber se habrá llenado por nuestros compañeros de defensa.

Débil acaso será, por la premura con que se habrá hecho sin apoyarla en pruebas, que de tanto interés han parecido a nuestro defendido, para él y para el país. ¡Ojalá y sus jueces, penetrados de la imposibilidad de juzgar de actos superiores a su competencia militar, mitiguen el rigor de una ley que, hija de circunstancias excepcionales, fue producida *ad-terrorem* contra los que pudieran traicionar a la patria! Maximiliano y sus actos de administración, están, a nuestro juicio, fuera de la mente del legislador que, al promulgar la ley de 25 de enero de 1862, quiso sólo aterrorizar en la gran lucha de nuestra patria con las fuerzas extranjeras, o imponer esas penas en una crisis pasajera, que no dejara, a nuestro pesar, los rastros de una administración, por ilegal que fuera, en un período de años, funcionando con el reconocimiento de diversos gobiernos del mundo y de la obediencia pasiva de diversos estados, aunque no fuese espontánea.

No cabe, sin duda, el proceso de un gobierno de largo tiempo de usurpación, en los estrechos límites de esa ley; y esta circunstancia, con muchas otras, hace muy justificado un indulto, que no es sólo un caso de

humanidad, sino de alta política, que reconocerán nuestra patria, nuestras hermanas las repúblicas y el mundo entero.

Si no nos hubiese detenido aquí el interés de procurar la salvación de la vida del archiduque Maximiliano, con los datos a la vista propios para su defensa, por diminutos que fueren, habríamos procurado apoyar esta solicitud, puntualizando las ventajas que el país obtendría de no cerrar con la tumba de Maximiliano la indagación de una preciosa historia para México, que con honra salió de la más crítica y ruda situación. La Providencia veló por su vida como nación y los pormenores de tantos episodios de este paréntesis parcial de la República, debieran consignarse como un rasgo de valor en el ejército, de inteligencia en los hombres de Estado, y de abnegación y amor a la patria del pueblo mexicano.

Para que esa historia sea toda de honra, pedimos el indulto del archiduque de Austria. Si se obtiene, la patria sabrá apreciar los rasgos de valor de sus dignos hijos en la lucha y su generosidad en los días de su victoria.

La República y la democracia tienen hondas raíces en el corazón mexicano y no necesitan derramar sangre en los patíbulos para dar solidez a sus instituciones. Ellas vivirán sin nuevo peligro; porque la experiencia ha enseñado a los mexicanos, divididos en otro tiempo, que el mayor de los males es confiar sus penas al alivio que ofrecen las bayonetas extranjeras. Éstas sintieron la enérgica resistencia que la decisión del pueblo de México opuso y su incontrastable resolución de no aceptar otras instituciones y otro gobierno que el que su voluntad soberana se diera, marcó sin duda para siempre una nueva era para este país, que vio retirarse al ejército invasor de la manera que el mundo ha calificado ya. No hay, pues, peligro que conjurar; y la vida de Maximiliano, si el ciudadano presidente se sirve otorgar el indulto, en caso de que sea condenado a la pena de muerte, será el testimonio más grande de que el gobierno que supo conjurar la injusta guerra extranjera, fue generoso con los vencidos, engrandeciendo así el nombre de México independiente y libre.

San Luis Potosí, junio 12 de 1867.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre

EXPOSICIÓN VERBAL DEL SEÑOR  
DON SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA <sup>9</sup>

Hemos venido debatiendo una cuestión de indulto antes de tiempo, porque ustedes ven el fallo del Consejo como el anuncio seguro de la muerte de Maximiliano; y sin que pueda decir que la resolución del gobierno está tomada, pues que es un punto reservado a un detenido y serio examen, deseo dar a ustedes alguna respuesta sobre las consideraciones que han presentado en esta conferencia:

El perdón de Maximiliano pudiera ser muy funesto al país, porque en lo conocido de su variable carácter, no habría gran probabilidad de que se abstuviera de toda otra seducción. La guerra civil puede y debe acabar con la reconciliación de los partidos; pero para ello es preciso que el gobierno quite los principales elementos de un trastorno que fuera probable. La justicia cumple, con este proceso, uno de sus deberes y la nación nos pediría cuentas de una indulgencia que la expusiera a los peligros de una nueva agitación. Para lo interior, lejos de ser el indulto un vínculo de unión eterna, sería la recriminación entre los mismos sostenedores de la nacionalidad mexicana; él sí produciría una inquietud peligrosa que pudiera comprometer todo el porvenir, relajando todos los resortes de la autoridad. El gobierno ha pensado, antes y ahora, con el mayor detenimiento, los peligros del perdón, las consecuencias de la muerte, y si el gobierno llega a denegar el indulto, del cual se ocupará cuando llegue su caso, estén ustedes seguros de que ha creído que así lo exige el sentimiento nacional, la justicia, la conveniencia pública y la necesidad de dar paz a un país que, sin ese nuevo elemento de la

---

<sup>9</sup> En las conversaciones celebradas entre el 10 y 12 de junio con los defensores Riva Palacio y Martínez de la Torre en San Luis Potosí.



monarquía, había tenido lo bastante para hacerse pedazos en más de cincuenta años.

¿Quién puede creer que estarían tranquilos los hombres intransigentes, para quienes los adelantos de la sociedad, su progreso, sus instituciones, son un pecado que los lastima y excita a la revolución? ¿Quién puede asegurar que Maximiliano viviera en Miramar o adonde la Providencia lo llevara, sin suspirar por el regreso a un país del cual se ha creído el elegido? ¿Qué garantías pudieran dar los soberanos de Europa de que no tendríamos una nueva invasión para sostener el imperio? Europa no quiere ver en los mexicanos hombres dignos de formar una nación. Tiene de nosotros la más pobre idea; se figura que las instituciones republicanas son el vértigo de un pueblo demagogo, y a grande servicio y a mayor honra para el país tendría, acaso, el comprometer antes de mucho tiempo a Maximiliano para que tentase nuevamente la fundación del imperio. La inspiración fatal que animó la intervención podría revivir, y los gobiernos de Europa, con el pretexto de moralizarnos, hiriendo la moral más pura, armarían nuevas legiones que, aunque extranjeras, portarían bandera mexicana, para fundar otra vez el poder del que llamaron emperador.

El indulto pudiera ser funesto entonces, y al desdén e ingratitud con que se viera esta conducta, agregaríamos tal vez, en mayor grado, la repulsión de los partidos; encenderíamos más sus odios y más y más se levantaría el grito terrible de reproche a la traición. Volviendo siempre los ojos un partido a Miramar, no sería remota una nueva violación de los principios de derecho público y la independencia de México pudiera entonces pasar por mayores peligros, que los que a costa de tantos sacrificios ha podido, en la presente crisis, conjurar. Es preciso que la existencia de México, como nación independiente, no la dejemos al libre arbitrio de los gobiernos de Europa; es preciso que nuestras reformas, que nuestro progreso y nuestra libertad, no se detengan ante la voluntad de algún soberano de Europa que quiera apadrinar a quien, llamándose emperador de México, pudiera aspirar a ser el regulador del grado de libertad o servidumbre que conviniera. La vida de Maximiliano podría ser la tentativa de un virreinato, y esa esperanza alimentar las

recriminaciones de partido, las sediciones de una desesperada situación, el alimento de una antipatía de más hondas raíces que las que hasta aquí habían tenido los odios políticos. La vuelta de Maximiliano a Europa pudiera ser un arma entregada a los calumniadores y enemigos de México, de que se servirían como restauración, provocando siempre un conflicto para llegar a la transformación de las instituciones de la República. Cerca de cincuenta años hace que México viene ensayando un sistema de perdón, de lenidad, y los frutos de esa conducta han sido la anarquía entre nosotros y el desprestigio en el exterior. Ahora, o acaso nunca, podrá la República consolidarse.

NO SE PUEDE CONSIDERAR EL INDULTO  
MIENTRAS NO SEA CONDENADO

Ciudadanos Mariano Riva Palacio y  
licenciado Rafael Martínez de la Torre

En vista del ocurso fecha de anteayer que presentaron ustedes en la tarde de ayer, pidiendo que si fuere condenado a la pena capital Fernando Maximiliano de Habsburgo, en el juicio a que está sometido, se le conceda la gracia de indulto, el ciudadano presidente de la República ha acordado manifieste a ustedes, que no es posible resolver sobre una solicitud de indulto antes de saber si el procesado ha sido condenado en el juicio; y que en el caso de ser condenado, si entonces se sometiere en tiempo oportuno a la decisión del gobierno, resolver sobre si se concede o no la gracia de indulto, en tal caso, entre todas las consideraciones que deba pesar el gobierno, tendrá presente lo expuesto por ustedes en su ocurso.

Independencia y Libertad. San Luis Potosí, junio 14 de 1867.

(Ignacio) Mejía

REQUISITORIA DEL FISCAL AZPÍROZ <sup>10</sup>

37.—El primer cargo de Maximiliano consiste en haberse prestado a servir de instrumento a la intervención de los franceses en la política interior de México.

Está probado por todos los hechos referidos en este escrito desde el párrafo 11 hasta el 27.

Este cargo le constituye ante la nación cómplice en el delito que se comete contra la independencia y seguridad de ella, por la "invasión armada hecha al territorio de la República, sin previa declaración de guerra", de que habla la fracción 1ª del artículo 1º de la ley de 25 de enero de 1862; conforme a las fracciones 4ª y 5ª del propio artículo, en las cuales se condena el hecho de "contribuir a que en los puntos ocupados por la invasión se organice cualquiera simulacro de gobierno, [...] aceptando empleo o comisión, sea del invasor mismo o de otras personas delegadas por éste", y "cualquiera especie de complicidad para [...] favorecer la realización y buen éxito de la invasión".

Le constituye también cómplice en la infracción del Derecho Internacional y de la Guerra; por cuanto la de intervención que nos hicieron los franceses y en que él tomó una parte tan principal, fue ilegítima, por no haber precedido la demanda de una justa satisfacción ni la declaración de guerra (Grocio, *Derecho de la guerra y de la paz*, libro 2º, capítulo 3º, párrafo 4º; Vattel, *Derecho de gentes*, libro 3º, capítulo 4º, párrafos 66 y 67); injusta y atentatoria por el fin que se propuso, de atacar a un pueblo independiente y constituido para mudar su Constitución y arreglar a su placer la forma de su gobierno. (Wheaton, *Elementos del Derecho Internacional*, 2ª parte, capítulo 1º, párrafos 12 y 14; Vattel, *Derecho de gentes*, libro 1º, capítulo 3º párrafos 30, 36 y 37; libro 2º,

---

<sup>10</sup> Parte del documento en que el fiscal precisa los cargos.

capítulo 4º, párrafo 54; libro 3º, capítulo 2º, párrafos 24, 26 y 28; libro 3º, capítulo 11, párrafos 183 y 184); finalmente, desleal y bárbara, porque los franceses, después de haber faltado cobardemente a sus compromisos (párrafo 16 y 17 de este escrito), cometieron muchos de los asesinatos, saqueos, incendios y todos los horrores que marcaron el paso de la intervención francesa (párrafo 26 de id. Vattel, *Derecho de gentes*, libro 3º, capítulo 3º, párrafo 24 y capítulo 16, párrafo 263). El que favorece de cualquiera manera, el que se une al injusto agresor, se convierte en enemigo del agredido y merece ser tratado como tal (El mismo autor y obra citados, libro 3º, capítulo 6º, párrafos 83, 85, 98, 99 y 102).

38.—El segundo cargo consiste en el título de emperador con que vino a secundar las miras de la intervención francesa (párrafo 21). La ilegalidad de este título le convierte en usurpador de los derechos de un pueblo soberano.

El título es ilegal en la forma; porque constituida la nación mexicana bajo los principios y reglas consignadas en su Carta Fundamental de 1857, "el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de su competencia (artículo 41) y porque el modo establecido para la reforma de la Constitución Política de México no es otro que el siguiente: "Se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas... las reformas (artículo 127 de la Constitución)". El ofrecimiento de algunos mexicanos, el acuerdo de la Asamblea de Notables, el voto de los pueblos oprimidos y el dictamen de jurisconsultos, en que hace consistir Maximiliano la legalidad de su título, no son la forma establecida por la Constitución de México para conocer la soberana voluntad del pueblo ni para la reforma de sus instituciones políticas.

En la sustancia, tampoco es legal el título que vengo examinando: 1º porque hubo en él aquella violencia que, según derecho, anula el acto en que intervino; 2º, porque su objeto, a saber, el cambio de la forma de

gobierno de México, era ilegítimo en medio de un trastorno público, como el que causó la intervención francesa.

La violencia que hubo en los votos de los pueblos está puesta en evidencia, con sólo considerar que los franceses invadieron el país, obligaron al gobierno constitucional de la República a mudar de residencia, lo persiguieron e hicieron una guerra bárbara a los republicanos; que en tales circunstancias, pueblos oprimidos por los enemigos de la República dieron votos en favor de la forma monárquica de gobierno y del archiduque Maximiliano, forma de gobierno promovida y planteada, y monarca elegido y propuesto a los mexicanos por el emperador de los franceses, que nos invadía con las armas. Fuerza presente, miedo grave, injusticia en el empleo de la fuerza, falta de ratificación del acto en ausencia de ella; todos los caracteres que las leyes, desde las romanas, asignaron a la violencia para que fuese capaz de anular los actos en que interviniese, y caracteres todos que nos presenta la intervención francesa, bajo la cual se hicieron, la proclamación del imperio y el llamamiento de Maximiliano.

El objeto de los votos, a saber, la mudanza de la Constitución Política de México en medio de un gran trastorno público, es otra causa de nulidad del título, prevista por nuestro Código Fundamental, que en su artículo 128 dice; "Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta".

De intento me abstengo de entrar en el examen de las importantísimas cuestiones no resueltas, de si fue o no la mayoría de los mexicanos la que dio sus votos, si está probada la autenticidad de éstos y otras muchas; porque aun decididas a favor de Maximiliano en nada disminuyen la nulidad del título, por los vicios de forma y de materia que dejo demostrados.

Este cargo le hace cómplice en el delito contra la independencia y seguridad de la nación, que explica la fracción 3ª del artículo 1º de la ley de 25 de enero de 62, en estos términos: "La invitación hecha por mexicanos o extranjeros a los súbditos de otra potencia, para... cambiar la forma de gobierno que se ha dado la República, cualquiera que sea el pretexto que se tome". Conforme, asimismo, a la fracción 5ª antes citada, del propio artículo de la ley.

39.—El tercer cargo que resulta del anterior, es la usurpación misma de los derechos de un pueblo soberano y libremente constituido.

El hecho está probado desde el párrafo 22 hasta el 32 de este escrito, donde se ve, en resumen, que Maximiliano tuvo el ejercicio del poder que corresponde a la soberanía nacional; y la ilegitimidad de este ejercicio, que es lo que lo caracteriza de una usurpación, se deduce sin esfuerzos de las consideraciones legales precedentes relativas a la nulidad del título que tomó de emperador y a su complicidad en la atentatoria intervención de los franceses en la política interior de México.

Este cargo le constituye reo ante el derecho de gentes, según la doctrina de Vattel (obra citada, libro 1º, capítulo 3º, párrafos 30, 36 y 37), que sirve de regla a las naciones.

Por él también es reo del delito contra la paz pública y el orden, que define así la fracción 10 del artículo 3º de la ley de 25 de enero: "Abrogarse el poder supremo de la nación... funcionando de propia autoridad o por comisión de la que no lo fuere legítima".

40. El cuarto cargo es el de haber dispuesto, con la violencia de la fuerza armada, de los intereses, los derechos y la vida de los mexicanos.

Es una especialidad del cargo precedente y sus pruebas están consignadas en el párrafo 26 de este escrito.

Por este cargo, la citada ley, artículo 4, fracción 2ª, le declara reo de delitos contra las garantías individuales, a causa de la violencia ejercida en las personas, con objeto de apoderarse de sus bienes y derechos que constituyen legítimamente su propiedad.

41. El quinto cargo consiste en el género de guerra que hizo Maximiliano a la República, al lado de los franceses, por las responsabilidades que contrajo, a causa de los excesos cometidos por el ejército francés en nombre del imperio.

Las pruebas de este cargo se hallan especificadas en el párrafo 26.

Las consideraciones legales que he tenido presentes al examinar el primer cargo, que se reduce a la complicidad de Maximiliano con la intervención francesa, obran aquí de lleno contra él, como autor principal de la guerra que en su nombre continuaron los franceses, desde que tomó el título de emperador; porque ni la arregló a los principios del derecho internacional, y autorizó las vejaciones y horrores de todo género que se cometieron en su nombre.

Este cargo le hace reo principal de delitos contra el derecho de gentes y lo pone en la condición del salteador y del pirata.

Vattel enseña que "las empresas sin ningún derecho y aun sin motivo aparente, no pueden producir efecto legítimo ni dar ningún derecho al autor de ellas. La nación atacada de esta suerte por los enemigos, no está obligada a observar para con ellos las reglas prescritas en la guerra en forma, y puede tratarlos como bandidos. Después que Ginebra se libró del famoso asalto, mandó ahorcar a los prisioneros saboyardos que había cogido como ladrones que habían venido a acometerla sin motivo y sin declaración de guerra y no la acriminaron por una acción que hubieran detestado en una guerra en forma (*Derecho de gentes*, libro 3º, capítulo 4º, párrafo 568)".

Nuestra circular de 15 de noviembre de 1839 manda que se cumpla la suprema orden de 30 de diciembre de 1835, por la que se previno que los extranjeros que desembarcaran en algún puerto de la República, o penetraran por tierra a ella, armados y con objeto de atacar nuestro territorio, serían tratados y castigados como piratas.

42.—El sexto cargo consiste en haber hecho Maximiliano por sí mismo la guerra con extranjeros; súbditos de potencias que no estaban en guerra con la República (párrafo 24).



Le constituye reo del delito contra la independencia y seguridad de la nación que explica la fracción 3ª del artículo 1º de la ley de 25 de enero en estas palabras: "La invitación hecha [...] a los súbditos de otras potencias, para [...] cambiar la forma de gobierno que se ha dado la República, cualquiera que sea el pretexto que se invoque," y del de piratería que se explica en la suprema orden de 30 de diciembre de 1835 y confirma la circular de 15 de noviembre de 1839 ya citadas.

43.—El séptimo cargo que le hice, tiene dos partes: 1º la de ser autor del célebre decreto de 3 de octubre de 1865; 2º la de haber mandado ejecutarlo.

Ambos puntos se hallan comprobados en el párrafo 26 de este escrito, y le constituyen reo de un grave delito, contra el derecho de la guerra, por el cual, como por los anteriores, merece ser tratado cual bandido y pirata.

La ley del derecho de la guerra que ha infringido es la que consigna Vattel en estas palabras: "Luego que un enemigo se somete y rinde las armas, no se le puede quitar la vida, por consiguiente, se debe dar cuartel a los que deponen las armas en un combate (*Derecho de gentes*, libro 3, capítulo 8, párrafo 140).

"Dar muerte a los prisioneros no puede ser un acto justificable, más que en casos extremos, en que la resistencia por su parte, o por la de los que quieran libertarlos haga imposible su custodia (Wheaton, *Der. Intern.*, 4ª parte, capítulo 2º, párrafo 2º)".

Cuando a prisioneros rendidos, como Arteaga y sus compañeros, Chávez y otra multitud se quita la vida, se viola el derecho de la guerra. En este caso se halla Maximiliano.

También Vattel enseña (párrafo 151, lugar y obra citados), que "hay un caso en que se puede negar la vida a un enemigo que se rinde, y toda capitulación a una plaza en el último apuro; y es cuando este enemigo ha cometido algún atentado enorme contra el derecho de gentes, y particularmente cuando ha violado las leyes de la guerra".

44.—El octavo cargo es el de haber dado un manifiesto el día 2 de octubre de 1865, en que falsamente asentó que el gobierno republicano había abandonado el territorio nacional, y de cuya falsedad dedujo que las fuerzas republicanas no tenían bandera conocida, eran bandas de salteadores y debían ser tratados, como por su decreto del día 3 lo dispuso (párrafo 29).

Este cargo lo hace reo de un nuevo delito contra la paz pública y el orden, por ser el caso de la fracción 12 del artículo 3º de la ley de 25 de enero de 62 de "esparcir noticias falsas alarmantes o que debilitan el entusiasmo público, suponiendo hechos contrarios al honor de la República, o comentándolos de una manera desfavorable a los intereses de la patria".

45.—El noveno cargo es el de haber continuado la guerra después que se retiró de México el ejército francés; con las circunstancias agravantes de haberse rodeado de los hombres que se hicieron más famosos por sus crímenes en la guerra civil de México; de haber puesto en duda él mismo la legalidad de su título de emperador y de haber continuado empleando medios de violencia, de muerte y de destrucción, hasta que cayó rendido a discreción en esta plaza (párrafo del 27 al 31).

Es el mismo que ya se le ha hecho por sostener una guerra ilegítima e injusta, y que le convence de su obstinación hasta el fin, de tratar de mantener la usurpación con desprecio del derecho de las naciones y de nuestras leyes; siéndole aplicable como a principal autor el contenido de la fracción 1ª, artículo 1º, de la de 25 de enero de 62.

46.—El décimo cargo es el de la abdicación del título que hasta el fin procuró defender con las armas (párrafo 32).

Esta es otra circunstancia agravante de su obstinación en defender la usurpación de los derechos del pueblo mexicano; pues sólo quería desprenderse por la muerte, del título de soberano, y aun para ese caso disponía como absoluto de la sucesión del mando en el imperio; por lo que reagrava el cargo de usurpación que queda examinado.

47.—El undécimo cargo consiste en la indicación de que se le deberían guardar las consideraciones de un soberano vencido en guerra justa (fojas 5 vuelta, 33 y 46); y es una circunstancia que reagrava nuevamente el cargo de la usurpación y su obstinación en defenderla.

48.—El duodécimo es el de no querer reconocer la autoridad de la ley de 25 de enero de 1862, ni la competencia del Consejo de Guerra para que juzgue su causa (fojas 5 vuelta, 33 y 46).

Es un cargo, porque en derecho está obligado a reconocer la autoridad de la citada ley y la competencia del Consejo de Guerra ordinario. Procuraré fundarlo legalmente.

Según el derecho internacional, las leyes del Estado obligan a todos los que se encuentran en él, con la sola excepción de las que suponen la calidad de ciudadanos o súbditos del Estado, que no obligan a los que en él gozan la consideración de extranjeros. Más el extranjero que perturba el orden, altera la paz, y más, el que ataca la Constitución del Estado, queda sometido a las leyes del mismo, que castigan estos delitos (Vattel, *Derecho de gentes*, libro 2, capítulo 8, párrafo 55, 104, 105 y 108).

Los delitos que afectan la soberanía, las instituciones, la paz y el orden del Estado, deben ser juzgados por las leyes del mismo; principalmente y sin excepción, si fueron cometidos y aprehendidos el delincuente dentro de los límites del mismo Estado (Wheaton, *Elem. del Der. Intern.*, 2ª parte, capítulo 2º, párrafo 13.—*Huberus praelectiones*, tomo 11, libro 1, título 3, de *conflictu legum*).

De conformidad con estos principios, nuestra Constitución impone expresamente a los extranjeros (artículo 33) la obligación de obedecer y respetar las instituciones y leyes del país. Una de estas leyes es la de 25 de enero de 1862, que define y castiga delitos de que está convicto y en general confeso Maximiliano, quien, por tanto, se halla obligado a reconocer la autoridad de dicha ley en su aplicación a la causa porque se le juzga.

No es menos favorable la doctrina del derecho de las naciones a la competencia de los tribunales que establecen las leyes para el juicio y

castigo de los delincuentes. Esencial es a la soberanía de un Estado reprimir los delitos por medio de sus tribunales; cuando éstos son creados por la ley, tienen jurisdicción sobre los extranjeros lo mismo que sobre los nacionales, para la persecución y castigo de los delitos que se cometen dentro de los límites del Estado. (Vattel, *Derecho de gentes*, libro 1, capítulo 13, párrafo 169. Wheaton, 2ª parte, capítulo 2, párrafo 13).

Nuestra Constitución (cit. artículo 33) impone también a los extranjeros la obligación de obedecer y respetar a las autoridades del país, sujetándolos a los fallos y sentencias de los tribunales sin que puedan intentar otros recursos que los que las leyes conceden a los mexicanos. La de 25 de enero de 62, dada por el Ejecutivo en virtud de las facultades que el Congreso le concedió en 11 de diciembre de 1861, conforme al artículo 29 de la Constitución, establece, para juzgar los delitos contra la nación, la paz pública y el orden, el derecho de gentes y las garantías individuales que especifica el Consejo de Guerra ordinario. Lejos de ser el fuero militar contrario, es conforme al artículo 13 de la Constitución por el cual se declara que subsiste para los delitos militares que fije la ley. Esta ley es la de 15 de septiembre de 1857, que declara sujetos al conocimiento de la jurisdicción militar en tiempo de guerra los delitos que suponen inteligencia con el enemigo y desobediencia a los bandos publicados por la autoridad militar, aunque sean cometidos por paisanos. También puede considerarse como reglamentaria de la parte citada del artículo constitucional que estoy examinando, la ley de 25 de enero de 1862 en tiempo de guerra.

Es bien sabido que en este tiempo calamitoso, la autoridad militar puede ejercer todas las funciones de la judicial en el ramo criminal, y expresamente lo dice así la ley Constitucional que tenemos sobre estado de guerra y de sitio; en la cual se declara que la autoridad militar puede revestirse de todos los poderes de la sociedad dejando sólo aquellos que no juzgue necesario ejercer.

De todo esto resulta que Maximiliano tiene obligación estrecha de someterse a la ley de 25 de enero de 1862 y consiguientemente de reconocer el fuero militar como competencia para juzgarle. Se deduce

esta obligación también del hecho de haberse rendido a discreción del gobierno republicano, cuya voz y autoridad llevaba el general en jefe del ejército de operaciones al hacerlo prisionero, y estar dispuesto este juicio, y repetida con autoridad legítima, la observancia de la referida ley, por orden expresa del ministerio de la Guerra, que obra como cabeza del proceso.

El negarse Maximiliano a reconocer la autoridad de la ley de 25 de enero y la competencia del fuero militar, es, pues, un cargo verdadero que tiene.

49.—El último consiste en la contumacia y rebeldía en que ha incurrido, por no haber querido declarar, ni responder a los cargos que le hice. "Está obligado el reo a contestar a las preguntas que se le hicieren, aunque crea que el juez que se las hace no es competente; sin perjuicio de protestar en el acto, si lo estimase oportuno. Lo que el juez puede hacer para obligar al reo a prestar su declaración es manifestarle, que su silencio no le favorece, que es un indicio de su criminalidad; que desde luego dará lugar a que se le trate como a culpable para todos los efectos legales del sumario, y que habrá de tenerse presente y acumularse con las demás pruebas que resulten contra él, al tiempo de dar la sentencia." (Escriche, *Dicción.*, artículo "Juicio criminal", párrafo 40).

50.—Examinados los cargos de Maximiliano, paso ahora a fijar la criminalidad de los hechos en que se fundan los de Miramón y Mejía.

En el párrafo 33 he reducido a las tres especies siguientes los que son comunes a ambos.

1º, su rebelión contra el gobierno legítimo de la República.

Este cargo nos presenta dos fases que miran, una al tiempo anterior al 25 de enero de 1862, y a ella es aplicable la fracción 1ª del artículo 3 de la ley de 6 de diciembre de 1856, y la otra al tiempo transcurrido del 25 de enero de 62 en adelante, comprendida en la fracción 1ª del artículo 3º de la ley vigente desde la segunda fecha. En ambas leyes "la rebelión contra las instituciones políticas bien se proclame su abolición o

reforma", está clasificada entre los delitos que se cometen contra la paz pública y el orden.

## ACTA DEL CONSEJO DE GUERRA

Manuel Azpíroz, teniente coronel de infantería, ayudante de campo del ciudadano general en jefe del ejército de operaciones, fiscal de esta causa.

Certifico: que hoy día 13 de junio de 1867 se ha juntado el Consejo de Guerra en el teatro Iturbide de esta ciudad de Querétaro, bajo la presidencia del teniente coronel de infantería, ciudadano Rafael Platón Sánchez y compuesto de los vocales capitanes ciudadanos José V. Ramírez, graduado comandante; Emilio Lojero, graduado también comandante; Ignacio Jurado, José C. Verástegui, Lucas Villagrán<sup>11</sup> y Juan Rueda y Auza, con asistencia del asesor licenciado ciudadano Joaquín M. Escoto; habiéndose hecho relación de este proceso, leyeron sus defensas los procuradores de los reos, en el orden siguiente: primero, el licenciado ciudadano Próspero C. Vega, que lo es de Tomás Mejía; en segundo lugar los licenciados ciudadanos Ignacio Jáuregui y Ambrosio Moreno, de Miguel Miramón y a lo último los licenciados ciudadanos Jesús M. Vázquez y Eulalio M. Ortega, de Maximiliano; en presencia, el primero, de su defendido Tomás Mejía, quien fue preguntado por el presidente si tenía que decir algo en su defensa y respondió que no; y los dos segundos en presencia de Miguel Miramón, quien preguntado igualmente dijo: que nada tenía que agregar en su descargo; y no habiendo comparecido Maximiliano, aunque fue llamado, porque expuso que estaba enfermo, según consta en una diligencia del proceso, que había consignado en él cuanto tenía que decir y que para lo demás que debiera presentar en su defensa lo representarían sus procuradores, en quienes había depositado su confianza. El fiscal leyó su conclusión,

---

<sup>11</sup> Este apellido aparece escrito como Villagrán en la mayoría de los casos, pero en el voto particular y en la sentencia aparece Villagrana.

después de la cual el presidente permitió a los defensores que volviesen a hablar y, en efecto, expusieron verbalmente nuevos alegatos impugnando la conclusión y terminaron haciendo los licenciados Moreno y Vega las protestas siguientes: primera, contra la denegación de los recursos hasta ahora entablados; segunda, contra la formación del proceso contraria a la ordenanza militar, a las leyes de 25 de enero de 1862 y 15 de septiembre de 1857; tercera, contra la infracción de los artículos relativos de la Ordenanza en la audiencia posterior a la defensa; cuarta, contra la presentación extemporánea de papeles y documentos de que no se corrió traslado a los defensores y que debían haber figurado en el sumario. Los licenciados Vázquez y Ortega dijeron que reiteraban las protestas que tienen hechas en el proceso y dejaban nuevamente a salvo los derechos de su defendido contra todas las imputaciones que el fiscal le hace en su conclusión. Practicado todo esto, pasó el consejo a votar a la una de la tarde del 14 de junio. Y para que conste lo pongo por diligencia y firmo.

Manuel Azpíroz



SENTENCIA DE MUERTE DICTADA  
POR EL CONSEJO DE GUERRA CONTRA MAXIMILIANO,  
MIRAMÓN Y MEJÍA

Vista la orden del ciudadano general en jefe del día 24 del pasado mayo para la instrucción de este proceso; la de 21 del mismo mes del ministerio de la Guerra que se cita en la anterior, en virtud de las cuales han sido juzgados Fernando Maximiliano de Habsburgo, que se tituló emperador de México, y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, por delitos contra la nación, el orden y la paz pública, el derecho de gentes y las garantías individuales; visto el proceso formado contra los expresados reos con todas las diligencias y constancias que contiene, de todo lo cual ha hecho relación al Consejo de Guerra el fiscal, teniente coronel de infantería, ciudadano Manuel Azpíroz; habiendo comparecido ante el Consejo de Guerra que presidió el teniente coronel de infantería permanente ciudadano Rafael Platón Sánchez; todo bien examinado con la conclusión y dictamen de dicho fiscal y defensas, que por escrito y de palabra hicieron de dichos reos sus procuradores respectivos, el Consejo de Guerra ha juzgado, convencidos suficientemente de los delitos contra la nación, el derecho de gentes, el orden y la paz pública que especifican las fracciones primera, tercera, cuarta y quinta del artículo primero, quinta del artículo segundo y décima del artículo tercero de la ley de 25 de enero de 1862 a Fernando Maximiliano; y de los delitos contra la nación y el derecho de gentes que se expresan en las fracciones segunda, tercera, cuarta y quinta del artículo primero y quinta del artículo segundo de la citada ley, a los reos Miguel Miramón y Tomás Mejía; con la circunstancia que en los tres concurre, de haber sido cogidos *in fraganti* en acción de guerra el día 15 del próximo pasado mayo en esta plaza, cuyo caso es el del artículo veinte y ocho de la referida ley y, por tanto, condena con arreglo a ella a los expresados reos Fernando Maximiliano,

Miguel Miramón y Tomás Mejía, a la pena capital, señalada para los delitos referidos.

Querétaro, junio 14 de 1867.

R. Platón Sánchez  
Ignacio Jurado  
Emilio Lojero

Juan Rueda y Auza  
Lucas Villagrana  
José C. Verástegui

José V. Ramírez

EL ASESOR PROPONE SE CONFIRME  
LA DISCUSIÓN DEL CONSEJO DE GUERRA

(General Mariano Escobedo)  
Ciudadano general en jefe:

El proceso instruido contra Fernando Maximiliano de Habsburgo y sus llamados generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, por delitos contra la independencia y seguridad de la nación, el orden y la paz pública, el derecho de gentes y las garantías individuales, ayer ha sido devuelto a usted por el ciudadano fiscal, a fin de dictar ya lo conveniente sobre su final resolución.

Una simple ojeada a este proceso basta para comprender, desde luego, que pertenece a los que, por la naturaleza misma de los hechos que le sirven de materia, se separan en un todo de la esfera de los del orden común, sujetándose por lo mismo a disposiciones muy particulares aun en su misma tramitación.

El de que me vengo ocupando es tanto más excepcional cuanto que su punto objetivo no es la averiguación de los hechos criminales que lo motivan, porque éstos están ya comprobados con su pública notoriedad, sino que sólo se ocupa de hacerlos constar para entrar desde luego en su examen y apreciación, oídas que hubieren sido las exculpaciones de los reos.

Cualquiera especie de delito, por leve e insignificante que sea, como que envuelve un ataque a la misma sociedad, el que estuviere encargado de velar por sus garantías, debe cuidar de reprimirlo, evitando su repetición y dando, al mismo tiempo, la satisfacción debida a la vindicta pública, imponiendo la pena proporcionada a su gravedad al que de este modo hubiere faltado a los deberes de asociación.

El punto de partida para la graduación de los delitos debe, pues, tomarse de las consecuencias más o menos funestas que por ello se siguieren a las sociedades donde se hubieren perpetrado y, siguiendo este principio, no creo se pueda señalar mayor graduación en esta escala que los que se dirigen a atacar directamente la existencia y derechos primordiales de toda una nación o sea una sociedad.

A esta clase pertenecen los de que son acusados Fernando Maximiliano y los llamados generales Miramón y Mejía; el primero como usurpador de los poderes públicos de la nación mexicana, prestándose de este modo a servir de instrumento para el mejor desarrollo de la invasión francesa entre nosotros, y los segundos, como sus cómplices. Veamos, pues, lo que el proceso ministra y si las exculpaciones de los reos han sido suficientes para destruir la acusación y eximirlos por lo tanto de la responsabilidad en que se dice han incurrido.

En cumplimiento de la suprema orden de 21 del pasado, que obra en las primeras fojas de este expediente, la sustanciación del proceso, no obstante la premura del tiempo por lo angustiado de los plazos, ha sido en todo conforme a las prescripciones de la ley de 25 de enero de 1862 y a las relativas consignadas en la Ordenanza General del ejército.

Maximiliano se negó desde un principio a contestar a las preguntas que se le hicieron, porque dijo, eran cuestiones de política a las que aquéllas se contraían y que, por lo mismo, no podía reconocer la competencia de un tribunal militar para juzgarlas y, sobre todo, que ignoraba el idioma español en el sentido legal.

La causa siguió todos sus trámites, aunque en rebeldía contra él, con arreglo a lo prevenido en este caso por nuestra legislación.

Durante el curso del proceso, por medio de sus defensores, elevó varios ocursoos contraídos a hacer observaciones sobre lo impracticable de la ley de 25 de enero y declinando la jurisdicción militar a que por ella se le ha sujetado, sosteniendo esta declinatoria en todas sus instancias.

Concluidas las diligencias del sumario, concretadas a la declaración preparatoria de los reos y a su confesión con cargos, se declaró que el proceso estaba en estado de defensa, comenzando desde

luego a correr el término que la ley señala a los defensores para evacuarla.

Don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, por medio de sus defensores, siguieron el mismo camino en cuanto a los recursos interpuestos por Maximiliano, teniendo todos a la vez un mismo resultado, es decir, denegación completa de sus pretensiones, fundada en el espíritu y letra de las disposiciones conforme a las cuales se les mandó procesar.

El Supremo Gobierno, única autoridad a quien está reservado conceder mejores franquicias a los encausados, decretó varias ampliaciones, prorrogando el término que por la ley de 25 de enero está concedido a los procuradores para la formación de su alegato, y una vez expirado el último plazo, con arreglo a lo prevenido en el artículo 7º de la ley antes citada, se dictaron las providencias convenientes para reunir el Consejo de Guerra.

Este acto tuvo lugar el 13 del corriente, donde fueron oídas las defensas de cada uno de los reos, el pedimento fiscal y las observaciones que sobre él quisieron hacer los abogados defensores. Discutido entonces el examen del proceso y recogida la votación sobre la absolución o la pena que debía imponerse a los reos, el consejo tuvo a bien formular la sentencia que se lee a fojas 294 y 295 frente.

Tal es hasta aquí la historia de este proceso. Como se ve por las constancias que ministra, el cargo principal hecho a Maximiliano se reduce a haberse prestado para ser el instrumento principal de la intervención francesa en México, coadyuvando con su aquiescencia y conducta posterior a la realización de los inicuos planes de Napoleón III contra las instituciones de la República y su forma de gobierno. Sobre esto poco tendré que añadir a las observaciones expuestas por el ministerio fiscal en su pedimento leído ante el consejo.

Es un hecho, y a nadie se le oculta, que en las miras bastardas de Napoleón III para contrariar la democracia americana, entraba el ocupar militarmente una parte de este continente, para influir en su política haciéndola desarrollar como mejor cuadrara a sus propósitos. Con este motivo y aprovechándose de nuestras disensiones intestinas y de algunos

malos mexicanos, promovió el establecimiento de un trono en México que debía ser ofrecido al príncipe Fernando Maximiliano de Austria.

Consecuente a este programa, sólo se pensó después en efectuarlo. Pretextando reclamaciones contra nuestro gobierno, las huestes francesas en unión de las de España e Inglaterra desembarcaron en las costas de Veracruz. Lo demás, de todos es bien conocido. Separados los franceses de la Triple Alianza, rompiendo con mengua de toda civilización los preliminares que conocemos con el nombre de "La Soledad" y hollando el derecho de gentes, desconocieron a nombre del gobierno de su emperador, los compromisos a que se habían sujetado, mientras tenían lugar las negociaciones del arreglo que se estaban trabajando, y sin más declaración, y ya entonces sin pretexto alguno, comenzaron sobre México sus operaciones de guerra.

Los defensores de Maximiliano antes de descender a la impugnación de los cargos que se le formularon, comienzan por sostener de nuevo la incompetencia del tribunal militar, repitiendo con más extensión las observaciones que antes habían hecho impugnando la legítima expedición de la ley de 25 de enero.

Demostrado como está que esta ley ha sido dada por autoridad legítima y en virtud de facultades extraordinarias y omnímodas que el Congreso le concedió en diciembre de 1861, creo que no se debe ni aceptar la discusión en este punto, puesto que sólo está reservado al Congreso de la Unión, cuando llegue el caso de que el Ejecutivo le dé cuenta del uso que hizo de las facultades que aquél le concediera.

Descendiendo después a la impugnación y examen de los cargos, alegan en favor del encausado que no puede llamarse usurpador, porque el ejercicio que ha hecho de los poderes públicos fue en virtud de la buena fe con que creía ser llamado por la nación para regirla.

Es de advertir, que antes de hacer esta manifestación, comienzan por confesar que la multitud de actas de adhesión que motivaron su error, eran realmente arrancadas por la fuerza y opresión de las armas francesas, negando la posibilidad de haber conocido este error aun después de su arribo al territorio.

Que no fue un instrumento de los franceses, lo fundan en que sus esfuerzos se redujeron en lo posible a disminuir la influencia de la política francesa y que la expedición de la bárbara ley de 3 de octubre fue debida a la triste necesidad en que se veía algunas veces de hacer ciertas concesiones a la intervención, y que aun en esa ley se encuentran algunos artículos redactados por el mismo Mariscal Bazaine.

Estas son las defensas por las que, comprobadas en la opinión de los abogados que las emitieron, el encausado debe ser absuelto.

Quiero suponer por un momento que con la mayor buena fe se hubiera creído llamado por la voluntad nacional para regir los destinos de México, ¿no era un hecho público y notorio que la nación estaba entonces invadida por el ejército francés? e invadida como estaba, ¿podría suponerse de algún modo que la multitud de adhesiones que se dieron eran emanadas y extendidas con la mejor libertad? si se sabía la presencia de las bayonetas francesas ¿cómo poner en duda su influencia para actos como éste de tanta importancia y trascendencia? Si, como según dicen, le constaban los propósitos del gobierno francés para desmembrar nuestro territorio, ¿cómo pudo creer que la intervención tenía un fin loable en su programa? Francamente, ciudadano general, esto no me parece creíble ni tampoco está probado; pero suponiendo, como llevo dicho, que ese error le hubiese mantenido en todo aquel tiempo, al llegar a nuestro territorio ¿se le pudo ocultar también que el flujo y reflujo de los límites del imperio, era decidido únicamente por las victorias o derrotas del ejército francés? Pero pasemos adelante.

Que no fue un instrumento de los franceses para la opresión de nuestros nacionales, se exculpa con decir que sus esfuerzos se redujeron a disminuir la influencia de la intervención; pero luego, casi a renglón seguido, incurre en una contradicción por la respuesta que antes dije daba al negar la responsabilidad que pudiera reportar por la ley de 3 de octubre.

¿Qué clase de compromisos podían existir entre el encausado y los jefes de la intervención para hacerles concesiones en que se atropellaba de la manera más cruel el mismo derecho de la guerra a que tratan ahora de apelar? Yo por mi parte no lo comprendo, ni mucho menos cuando

veo que se admitía la redacción de esa ley del mariscal Bazaine. Había, pues, una coacción respecto de él para sus actos, pero que no consigue disculparlo.

Además, el enganche de extranjeros pertenecientes a naciones que no habían estado en guerra con nuestra República para que viniesen a ayudar la intervención, a más de ponerlo como jefe y director de esa nueva invasión filibustera, prueba también de una manera inequívoca la convicción que tenía de que el sostenimiento de su trono jamás podría deberlo a los nacionales y que para esta empresa no juzgaba suficientes los esfuerzos aislados de los franceses.

Nunca, pues, hubo motivo para suponer otro objeto en la intervención, que establecer en México un gobierno que, aunque contrario a la opinión nacional, debía favorecer los intereses de la Francia ¿ni cómo suponerlo de otra manera? Napoleón III ha dicho "que la intervención en México es el pensamiento más feliz de su reinado", y ya la historia nos prueba que el pensamiento de la familia reinante de la Francia, jamás ha sido la felicidad, sino la ruina de los pueblos.

Pero se dice que antes de admitir la corona de México, consultó a respetables jurisconsultos de Inglaterra, sobre si estaría bien manifestada la voluntad nacional con las actas de adhesión que se le remitieron y que, en virtud de su respuesta afirmativa, se decidió a aceptar el llamamiento.

Ciertamente no hace mucho honor a los jurisconsultos de que se habla, la resolución emitida en tal sentido, porque, para la sola duda, bastaba la reflexión de que al proclamar el imperio, México estaba en guerra e invadido, y mal podía suponerse libertad para tal proclamación.

Tiempo es ya de ocuparnos de lo relativo a don Miguel Miramón y don Tomás Mejía. El primero niega absolutamente el cargo de complicidad en la intervención, asegurando que lejos de tener algún participio en ella, siempre fue de opinión contraria, y que en virtud de la constante oposición que hacía a los jefes intervencionistas, se le obligó a salir del territorio nacional, paliando su destierro con una comisión al extranjero.

Como se ve por esta contestación y lo que con motivo de ella se alega en su defensa, se sienta el principio de que, por no haber querido



nunca servir bajo las órdenes de ningún jefe francés, se infiere, por lo mismo, que jamás quiso ni sirvió a la intervención.

La consecuencia no me parece arreglada a los principios de una buena lógica, como paso a demostrarlo.

Cuando don Miguel Miramón regresó de Europa, al empezarse a extender el ejército francés en el interior de la República, como él mismo lo confiesa, aceptó una comisión para marchar a Guadalajara. ¿Es de suponerse que esta comisión se le confió sin haber sido antes aceptados sus servicios por el imperio? Y si el imperio era conocido ya como obra sólo de la intervención, ¿cómo se puede suponer que al prestar sus servicios al primero no coadyuvaba a las intenciones de la última? Unidas como estaban la intervención y el imperio, mal se podría servir directamente a cualquiera, sin que estos servicios fueran de igual importancia para la otra.

Si se le mandó a Berlín, porque su presencia aquí era nociva a los intereses de la intervención, como que no consta ninguna especie de protesta por parte del encausado contra esta determinación, es claro que, al admitirla con tanta subordinación, o reconocía su delito y trataba de expiarlo con la más ciega obediencia, o en realidad existió la comisión, y por tanto sirvió al imperio y en consecuencia a la intervención francesa.

Se añade, que al regresar de este destierro, cuando los franceses efectuaban su reembarco, supuesto que la intervención había ya desaparecido, se creyó con más perfecta libertad de acción para tomar parte en la lucha que los franceses sólo pudieron comenzar, pero no llevar a cabo; como si por haberse retirado la intervención no hubiera quedado su proyecto de la erección de un trono, pudiendo mantener su influencia moral sobre él, y aplazar para más tarde la realización de los proyectos que esta vez fracasaron en su cuna.

Pasemos a ocuparnos de lo relativo a don Tomás Mejía.

Las excepciones que en su favor alega este encausado, se reducen a las siguientes: como que constantemente ha hecho oposición al gobierno constitucional, porque su fe política le dice que no es el que quiere ni conviene a la nación, por esto es que, cuando se acercó la intervención lo encontró con las armas en la mano. Hace advertir que desde ese momento

permaneció neutral, aunque sin deponer las armas, aguardando que la nación diera su fallo para luego decidirse él por su parte, y que en el momento que se proclamó la regencia y el imperio, se creyó obligado a reconocer ese gobierno mexicano, cuyas instituciones cuadraban mucho con las que siempre ha defendido.

De todos estos antecedentes intenta luego deducir que fue víctima de un error, y que como tal, no debe suponersele culpable.

No opino yo de esa manera.

El señor Mejía tuvo oportunidad, como que estuvo en puntos ocupados por el invasor, de observar muy de cerca la manera con que eran extendidas y arrancadas las actas de adhesión al régimen imperial y, sobre todo, mal podía reputar legítimo ese gobierno cuando su principal apoyo se hizo consistir desde entonces en los mismos cuyo rigor trataba él de templar a cada paso, es decir, en los franceses; y no obstante la convicción que al poco tiempo abrigó de que el imperio tenía que sucumbir a pesar del formidable apoyo de la Francia por ser contrario a la opinión nacional, continuó prestándole con toda eficacia sus servicios concurriendo a varias acciones de guerra que decidieron en gran parte la prolongación de ese gobierno.

Cuando una nación como México se encuentra envuelta en los horrores de una guerra civil, por más de medio siglo sostenida, nada más natural que sus fuerzas parezcan agotarse; y si cuando el enemigo extranjero, aprovechándose de esta misma debilidad, se propone invadirla, nada más natural que los hijos de esa nación, olvidando sus reyertas intestinas, se apresten a defender su nacionalidad; y el que lejos de acudir a ese llamado se uniese al enemigo de su patria, su acción es tanto más criminal cuanto alevosa, y si por algún acaso puede admitírsele error como disculpa, por los que en virtud de él se hubieren adherido a la invasión, secundando sus proyectos, siempre simulados en el programa de la humanidad, en el momento que las dudas siquiera sustituyeran al error, desde ese mismo instante la criminalidad no reconoce límite, porque en materia de nacionalidad e independencia, el sólo titubear constituye otro delito.

El señor Mejía al militar bajo las órdenes del comandante en jefe de la intervención, contribuyendo por su parte a aumentar las víctimas de su patria en los campos de batalla, en el momento que desconfió de la veracidad y buena fe de los que lo habían comprometido al reconocimiento y defensa del imperio, desde ese mismo instante su deber de mexicano era deponer luego las armas decidiéndose por la causa nacional, o si continuaba en las filas imperiales, cosa que ya repugnaba a su convicción, debió hacerlo en la inteligencia de que entonces ni el error podía alegar como defensa respecto de sus actos anteriores, porque su conducta equivalía nada menos que a ratificarse en lo pasado.

Otra objeción se hace que abraza a todos los encausados.

Según los sanos principios, se dice, de la verdadera civilización, los vencidos sólo pueden ser juzgados conforme al derecho de la guerra y no por leyes *ad hoc*. En apoyo de esta verdad, citan los defensores todas las doctrinas de Wheaton, Vattel y otros respetables publicistas, deduciendo, por consecuencia final, que la pena de muerte jamás debe imponérseles a los reos de que nos vamos ocupando porque el derecho antes citado lo prohíbe, por la consideración que deben tener a nuestros ojos como prisioneros de guerra.

Cierto es y sin que nadie lo cuestione, que los prisioneros de guerra no deben ser tratados con ese rigor en virtud de la ley recibida en todas las naciones civilizadas. Pero estamos absolutamente fuera del caso que ella se supone. No se trata aquí de una guerra justa o legal seguida contra nosotros con arreglo a los principios adoptados por la civilización. Se trata de una guerra injusta, bárbara e ilegal en la que se ha despreciado el derecho de gentes, declarando fuera de la ley no sólo a los que tomaban las armas en la defensa de su nacionalidad sino aun a los que mantenían algunas relaciones con ellos; se trata de personas que son responsables cada una solidariamente de atentados cometidos contra el derecho de gentes y las garantías individuales, caso también previsto por los mismos publicistas que acaban de citar, y que, en opinión de sus mismos autores, forman la excepción de la regla antes citada.

Además, el Supremo Gobierno con anterioridad a la comisión de estos delitos expidió la ley de 25 de enero, donde con toda regularidad

fueron previstos los casos de que hoy nos ocupamos. En ella se trataba de impedirlos, con la imposición de penas severísimas, a los que se decidieran a cometerlos, porque, antes que todo, se quería salvar a la sociedad de los trastornos de que pudiera ser víctima con la guerra que entonces se iniciaba, y nada más justo y natural que, en cumplimiento de su deber, recurriera a medidas tan severas como ésa para precaver males mayores, como la pérdida de nuestra nacionalidad.

Éstas son, ciudadano general, las apreciaciones que en mi opinión deben hacerse de los descargos de los reos y que, por lo mismo, no habiendo sido suficientes éstos para destruir los cargos que se les formularon y encontrando perfectamente fundada la sentencia que el Consejo de Guerra ordinario pronunció el 14 del corriente contra los reos de esta causa, soy de opinión que confirmándose en todas sus partes por los fundamentos en que se apoya, se condenen a la pena capital a los reos Fernando Maximiliano de Habsburgo llamado emperador de México y sus llamados generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía.

Querétaro, junio 15 de 1867.

Licenciado Joaquín María Escoto

EL GENERAL ESCOBEDO  
CONFIRMA LA SENTENCIA

Conformándome con el dictamen que antecede del ciudadano asesor, se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada el día 14 del presente por el Consejo de Guerra, que condenó a los reos Fernando Maximiliano de Habsburgo y a sus llamados generales don Miguel Miramón y don Tomás Mejía a ser pasados por las armas.

Devuélvase esta causa al ciudadano fiscal para su ejecución.

Querétaro, junio 16 de 1867.

Mariano Escobedo

CONTESTACIÓN DE MIRAMÓN  
A LA NOTIFICACIÓN QUE SE LE HIZO DE SU SENTENCIA

(Querétaro, 16 de junio de 1867)

Oída la sentencia dijo: que con arreglo al artículo 58 del tratado 8º, título 5º, de la Ordenanza General del ejército, pide se suspenda la ejecución de la sentencia por la injusticia notoria que envuelve, aplicándosele el párrafo 4º del artículo 5º del decreto de 25 de enero de 1862 que ni remotamente hace al caso, siendo además anticonstitucional la pena, lo que fundarán los defensores ante la suprema autoridad única que hay en el país y que reemplaza al Consejo Supremo de Guerra, a la vez que debe de ir a ella por conducto del secretario de Guerra.

Miguel Miramón

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA  
A MAXIMILIANO

(Querétaro, 16 de junio de 1867)

Acto continuo el ciudadano fiscal pasó, acompañado de mí (y) el escribano, a la prisión militar donde se halla el reo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien hallándose presente le fue leída la sentencia que lo condena a la última pena y enterado de ella contestó: que estaba pronto y para que conste lo firmó dicho señor fiscal, de que doy fe.

González

Félix G. Dávila

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA  
A MIRAMÓN

(Querétaro, 16 de junio de 1867)

A continuación, hallándose, en la misma prisión el reo Miguel Miramón y estando presente, le fue leída por mí la sentencia que lo condena a ser pasado por las armas y enterado de ella pidió expresar lo que de su propio puño consta en la anterior página de esta misma foja, lo cual el señor fiscal permitió y, para constancia, lo firmó dicho señor fiscal, de lo que doy fe.

González

Félix G. Dávila



NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA  
A MEJÍA

(Querétaro, 16 de junio de 1867)

Finalmente, hallándose en la misma prisión militar el reo Tomás Mejía y estando presente, se leyó por mí la sentencia que lo condena a la última pena, quien enterado de su contenido nada dijo en contestación y para que conste lo firmó conmigo el ciudadano fiscal, de lo que doy fe.

González

Félix G. Dávila

## SE PIDE EL INDULTO PARA MAXIMILIANO

Ciudadano presidente:

Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, al ciudadano presidente de la República, con el debido respeto, ocurrimos exponiéndole: que ha llegado ya a esta ciudad la noticia del adverso fallo que recayó, en el Consejo de Guerra que se ha seguido en la ciudad de Querétaro, contra el archiduque Maximiliano de Austria. Ha sido sentenciado a la pena capital, y nosotros, sus defensores, recordando al Supremo Gobierno el anterior ocuro que hemos presentado, para su caso, solicitando el indulto, de nuevo repetimos nuestra súplica pidiendo el perdón de la vida del archiduque.

El fallo que se pronunció, es resultado indefectible, según habíamos previsto en las circunstancias actuales, de la aplicación de la terrible ley de 25 de enero de 1862, que depositando en ciertas manos un inmenso poder para salvar la libertad, la expone a humillar y perderse con el sacrificio de todas las formas de un juicio, que son las tutelares de la vida y de la honra. Por esa ley, todo queda al libre albedrío de jueces incompetentes, para estimar debidamente cierto género de excusas y defensas del acusado.

La muerte de Maximiliano y demás personas que lo acompañan, rendido a la discreción del general Escobedo, podrá ser, en la balanza política de la justicia, pena merecida; pero ésta, moralmente, ha sido satisfecha ya por la sentencia pronunciada, y su ejecución es innecesaria e inconveniente. El término del imperio es definitivo, porque es segura la existencia de la República. La lucha de la nación en esas dos formas no tiene posibilidad. Las pasiones y los intereses de partido tomarán acaso otra bandera, si la discordia y las agitaciones anárquicas no se conjuran

por el ciudadano presidente, que con tanto acierto ha podido librar al país de los peligros de una dominación extranjera.

El medio para esto, no hay que dudarlo, era la más intransigente energía. La intervención no tenía otro enemigo digno que la más completa resistencia a todos sus esfuerzos militares y diplomáticos. Fueron sus soldados, sin embargo, muchas veces libertados de la pena capital, y procedió sin duda bien el gobierno moderando una disposición que no puede ser regla invariable de conducta. Sobre lo que está escrito en la ley, hay la discreción de los gobiernos que, guiada por un recto criterio, es el poder más eficaz para el bien. Acabado el poder que se llamó imperio, la necesidad urgente es la paz que vendrá con la moderación del excesivo rigor de leyes dadas en circunstancias muy excepcionales.

La intransigente energía para combatir la intervención, no puede ser del mismo efecto para la cuestión interior; aquélla tenía por término la salida de la fuerza extranjera por los puertos de la República y ésta debe tener una solución que no sea de exterminio, aunque por una ley pudiera autorizarse.

Aleccionados por una triste experiencia los vencidos, el recuerdo de los dolorosos sucesos que hemos visto, bastará para la quietud, que no se obtendrá exacerbando sus penas y amagando su existencia, como es de temerse, al ejecutar la sentencia del consejo.

Precaver el mal, es la más grande sabiduría de los gobiernos, y en el orden de las probabilidades, más prepara que excusa el rigor, lamentables escenas que precipitan a los pueblos en la división o en la anarquía.

¡Cuántas lágrimas y sacrificios habrían economizado algunos pueblos, si sus gobernantes hubieran podido prever las tristes consecuencias de un excesivo rigor! Jamás ha sido éste un vínculo de paz.

Perdone el ciudadano presidente que hayamos renovado algunas especies de las vertidas en nuestro anterior escrito; pero al mismo tiempo que somos defensores del archiduque Maximiliano, para quien

imploramos el perdón de la vida, somos mexicanos amantes de nuestra patria, a quienes interesa su porvenir y su buen nombre.

La distancia a que nos encontramos del lugar del juicio y la violencia con que pudiera ejecutarse el fallo, nos obliga a suplicar al ciudadano presidente, que si no puede, desde luego, otorgar el indulto, se sirva mandar suspender los efectos de la sentencia, hasta que se resuelva definitivamente.

Esta súplica es tanto más urgente, vista la resolución que se dio a nuestra anterior solicitud. No pretendíamos un acuerdo prematuro; y para conciliar nuestra pretensión con lo resuelto por el ciudadano presidente, hoy le hacemos nuestra súplica en los términos que se acaban de marcar.

Triste sería que una falta material del telégrafo, que un incidente que privara de tiempo, impidiera que fuese tomado en consideración el indulto, y que una causa que en lo moral es para el país de la más alta importancia, tuviera un mal suceso por la privación accidental de los medios de comunicación.

El mundo, que en los grandes episodios de la historia de una nación, la sigue en todos sus pormenores, tendría un motivo de censura, si temiendo nosotros una incomunicación momentánea con Querétaro, no procurásemos que este caso se previese.

Ya que hemos hablado de los que fuera de nuestro país se interesan en este proceso, permítanos el ciudadano presidente llamar su atención hacia este respecto.

México, por sus relaciones con Europa, necesita fijar su atención en nuestro derecho internacional, del qué puede derivarse, en gran parte, la felicidad de la nación. ¿Vivirá ésta aislada? ¿Podrá cortar sus relaciones, casi todas, por haber tomado la iniciativa de la cuestión, España, Francia e Inglaterra y haber mandado Bélgica y Austria algunas de sus fuerzas como legión extranjera?

Las naciones, en sus diferencias o conflictos, tienen sus obligaciones o derechos que, establecidos justamente por la habilidad o sabiduría de los gobernantes, hacen la felicidad del país; así como su daño, si menospreciando las ocasiones de hacer el bien, lo exponen a un

aislamiento y enemistad general y constante, siempre peligrosa y de funestas consecuencias.

Las naciones, como los hombres, tienen sus oportunidades propicias para encaminar sus negocios, y la mejor ocasión es aquella en que universalmente se proclama la justicia de una causa. Al llegar a Francia las últimas fuerzas de la intervención, del fondo de cada conciencia salía un grito de condenación a esa aventura sin resultado. Al terminar el imperio, la diplomacia europea, lanzando una mirada diez años atrás, tiene que reconocer el buen derecho de México para establecer de una manera justa esas reglas de conducta para con las naciones.

Tan brillante oportunidad será, sin duda, de feliz éxito, si se salva por el indulto la vida del archiduque Maximiliano, en cuya tumba, si muriera, sepultaría el país, por desgracia, desde su historia internacional en cinco años, hasta los grandes elementos de reparación exterior. Con este sacrificio, México habría dado el triste testimonio de deshacer con una mano, en un segundo, el más poderoso elemento de su victoria. México habría dicho, por satisfacer una mal entendida exigencia de momento: "Cierro el mejor camino que el esfuerzo de mis hijos me había abierto para su futuro de bienestar." México entonces, con la ejecución del archiduque Maximiliano y sus compañeros, al empuñar con energía esa bandera siempre fratricida, no sería prudente, ni grande, ni generoso. Sacrificar todos los frutos que pudiera dar una gran victoria, por halagar las pasiones de la discordia civil, no podrá jamás aprobarse por la nación. La historia y la posteridad dirán si había algún error en estas apreciaciones. ¡Ojalá y ese juicio no recaiga sobre un hecho irreparable!

Con nosotros está el sentimiento nacional. Los hombres de todos los partidos verán, en el indulto de Maximiliano, un acto de alta política que pide la clemencia y apoya el pensamiento de la paz.

San Luis Potosí, junio 15 de 1867.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre

EL GOBIERNO ELUDE RESOLVER  
POR NO ESTAR CONFIRMADA LA SENTENCIA

Ciudadanos Mariano Riva Palacio y  
licenciado Rafael Martínez de la Torre  
Presentes

Han expuesto ustedes, en su nuevo ocurso, fecha de hoy, que teniendo noticia de que el Consejo de Guerra, reunido en Querétaro, ha condenado a la última pena a Fernando Maximiliano de Habsburgo, pedían ustedes, como defensores suyos, (sic) que el gobierno le concediera la gracia de indulto o que si aún no podía resolver sobre ese punto, entretanto pudiera resolverlo, mandase suspender los efectos de la sentencia.

Impuesto de este nuevo ocurso, el ciudadano presidente de la República ha acordado diga a ustedes que, según les manifesté en oficio de ayer, no es posible resolver sobre una solicitud de indulto, antes de saber la condenación en el juicio, no habiendo una condenación que pueda surtir los efectos de tal, mientras el fallo del consejo no sea confirmado por el jefe militar, con arreglo a la Ordenanza y leyes respectivas y que, en lo demás, diga también a ustedes, como les manifesté en mi oficio de ayer, que no alterando el gobierno las disposiciones de la ley, si en el caso de ser confirmado el fallo del consejo, se somete entonces en tiempo oportuno a la decisión del gobierno, resolver sobre si se conceda o no la gracia de indulto, en tal caso, entre todas las consideraciones que deba pesar el gobierno, tendrá presente lo expuesto por ustedes en sus dos ocurso.

Independencia y Libertad. San Luis Potosí, junio 15 de 1867.

(Ignacio) Mejía

EL EMBAJADOR DE PRUSIA  
INTERVIENE A FAVOR DE MAXIMILIANO

San Luis Potosí, junio 14 de 1867

Excelentísimo señor don Sebastián Lerdo de Tejada  
Presente

Señor:

Me siento obligado a manifestar a V. E. mi más profundo agradecimiento por la benévola acogida que encontraron ayer las observaciones verbales que tuve el honor de hacer en favor del desgraciado príncipe que se halla preso en Querétaro, tanto a S. E. el señor Juárez, como a V. E. mismo y los señores Iglesias y Mejía.

En este momento he sabido que ayer comenzaron los debates en el Consejo de Guerra y que, según todas las probabilidades, hoy se pronuncia la sentencia.

El instante crítico y solemne de esta última resolución se acerca, pues, para los hombres inteligentes de Estado en cuyas manos ha puesto la suerte de las armas la vida del ilustre prisionero.

Permítanle por lo tanto V. E., en estos momentos supremos y de consecuencias tan graves, agregar humildemente a nuestra conferencia franca de ayer, las siguientes observaciones:

Ante todas cosas, repito a V. E., que el gobierno de S. M. el rey de Prusia, a quien tengo el honor de servir, ha mantenido, desde la independencia de México, las relaciones más amistosas con este hermoso país; por consiguiente, consideré de mi deber venir violentamente a esta capital, en circunstancias angustiadas, cuando se versa el porvenir de México, para interesarme, a nombre de mi gobierno, por la vida de un

príncipe y por virtud de su sincera amistad, destituida absolutamente de interés directo político sino guiado sólo por el bienestar y la paz de México del modo más confidencial, sin pretensión alguna y libre de todo carácter oficial.

El fiel consejo de una amistad franca, nunca interrumpida y comprobada por bastantes años, debe interesarse con toda decisión, a fin de que se conserve la vida a este príncipe, digno de lástima, mucho más cuando en ello se interesa altamente la nación mexicana; porque V. E. comprenderá muy bien, que la historia eleva tanto más a las naciones, cuanto son más nobles y generosos los actos que ejerce; y el mayor de todos es compadecerse del vencido.

A la alta penetración que distingue a V. E. como hombre de Estado, no puede ocultarse que, tanto los Estados Unidos como los gobiernos europeos, estiman la vida del príncipe prisionero como una prenda del más alto valor; por lo mismo, la gratitud hacia los que se la concedan, los obligará a ofrecer aquellas garantías que pudiera desear la nación mexicana para conservar su independencia y su libertad.

Mi alto gobierno ha tenido siempre un interés sincero por la paz y la suerte de México, y lo tiene aún, y si mi mediación, tan insistente como respetuosa, por salvar la vida del príncipe prisionero, surtiera efecto, no dudo que el gobierno de S. M. el rey de Prusia, gustoso trabajará y ayudará por el bienestar y la paz de México hasta donde está en su poder hacerlo.

Así, pues, por el bien, por el porvenir de México, por el interés de la humanidad, me permito repetir a V. E. de nuevo, con entera confianza, mi súplica muy respetuosa; aprovechando esta ocasión para asegurar a V. E. mi alta consideración.

A. V. Magnus



TAJANTE, PERO CORTÉS RESPUESTA  
AL EMBAJADOR DE PRUSIA

San Luis Potosí, junio 15 de 1867

Señor barón A. V. Magnus, etc., etc., etc.

Señor barón:

En la comunicación que se ha servido usted dirigirme con fecha de ayer, se refirió usted de nuevo a lo que me manifestó en la conferencia del día anterior, de un modo enteramente confidencial y libre de todo carácter oficial, acerca de la situación del archiduque Maximiliano de Habsburgo sometido a juicio en Querétaro.

En la conferencia de anteayer y en la comunicación de ayer, se ha referido usted a las buenas relaciones amistosas del gobierno de Prusia con México, desde su independencia.

Las personas que componen el gobierno de la República aprecian justamente esas buenas relaciones de amistad que con él había mantenido el gobierno de la Prusia. Igualmente aprecian y respetan los sentimientos que guían a usted al tomar interés por la suerte del archiduque en su desgracia.

En debida respuesta a la comunicación de usted de ayer, repetiré, como ya he tenido ocasión de manifestar a usted en nuestra conferencia anterior, que en un caso de tan grave importancia y tan digno de la más profunda atención, como el de la suerte del archiduque Maximiliano y de todos los presos de Querétaro, las personas que componen el gobierno de la República han meditado y meditarán, juntamente con lo que usted ha expuesto, todas las consideraciones que deben tenerse presentes, para

pasar con la más madura deliberación todos los motivos de clemencia y benignidad, con todos los deberes de la justicia y de la necesidad de asegurar la paz de la República.

Aprovecho esta ocasión de asegurar a usted, señor barón, que soy su muy respetuoso y obediente servidor.

Sebastián Lerdo de Tejada

MATÍAS ROMERO SE INCLINA  
POR EL FUSILAMIENTO DE MAXIMILIANO

Washington, junio 15 de 1867

Ciudadano ministro de Relaciones Exteriores  
México

Aunque supongo que a esta hora se habrá decidido definitivamente de la suerte de Maximiliano y que por consiguiente esta comunicación llegará a manos de usted después de haber adoptado el Supremo Gobierno la resolución que haya creído conveniente, respecto de dicho usurpador, creo de mi deber hacer aquí algunas indicaciones que si por accidente llegaren aún a tiempo, podrían servir de algo en la determinación de este delicado incidente.

Mi opinión respecto de lo que convenga hacer sobre esto está suficientemente explicada en la parte a que podía darse publicidad en la carta que escribí a Mr. Barney, el 31 de mayo próximo pasado, y de la cual envié a usted copia y traducción con mi nota número 231 de 4 del actual.

Por las cartas e impresos que he recibido de la República, me parece que gana mucho terreno la opinión en favor del fusilamiento del ex archiduque. Una vez sometido a Consejo de Guerra no puede haber duda ninguna de que será sentenciado a muerte, y en este caso y en vista del estado de la opinión pública a este respecto, dudo mucho que el presidente se decida a perdonarlo. Además las dilaciones del juicio habrán dado lugar a que lleguen a ese ministerio mis notas números 141, 152, 156, 157, 160 y 162 de 6, 14, 18, 19, 21 y 23 de abril último, con ayuda de las cuales podrá usted haber formado idea aproximada de los resultados que uno u otro extremo podrían producir en el gobierno, el

Congreso y el pueblo de los Estados Unidos y obrar, por lo mismo, con más conocimiento de causa.

Para el caso, pues, a mi juicio remoto, de que el Supremo Gobierno considerase preferible perdonar la vida a Maximiliano, creo de mi deber manifestar a usted que a mi juicio no convendría por ningún motivo dejarlo ir sin condiciones. El partido más prudente sería, en mi concepto, dirigirse entonces al gobierno de los Estados Unidos para decirle: "Este hombre nos ha hecho mucho mal, se ha manchado con crímenes de toda especie, el tribunal competente que lo ha juzgado y la opinión pública lo han condenado a la pena de muerte; nosotros, sin embargo, no teniendo empeño especial en fusilarlo y deseando complacer a los Estados Unidos, estaremos dispuestos a perdonarle la vida, siempre que los Estados Unidos lleguen a un arreglo con los gobiernos europeos más empeñados en salvar a Maximiliano, como el Austria y la Francia, en virtud del cual se comprometan a impedir que este aventurero intente otra expedición filibustera contra México, y a renunciar todas las reclamaciones que nos pudieran hacer en lo futuro por cuenta de la expedición pasada".

Por supuesto que no sería nada fácil que tal cosa se consiguiera; pero el mal resultado de ese paso preliminar sería otra razón más que nos justificaría en tratar a Maximiliano con todo el rigor de la ley; pues podríamos decir con razón, después, que estuvimos dispuestos a perdonarlo si las naciones interesadas nos garantizaban que no se nos seguiría mal ninguno de ese paso; pero que no habiendo podido obtener esa garantía y debiendo cuidar de nuestra seguridad antes que todo, nos vimos obligados a hacernos justicia con nuestras propias manos.

He hablado en este sentido con algunas personas de este país. Al general Grant le pareció muy buena la idea. A Mr. Seward se la mencioné sucintamente, como idea exclusivamente mía, la última vez que le vi y no pareció recibirla mal, y me aventuro a creer que aquí tendría buena aceptación de parte de la opinión pública.

Reproduzco a usted las seguridades de mi muy distinguida consideración.

Matías Romero

POSTRERA PETICIÓN DE INDULTO  
A FAVOR DE MAXIMILIANO

Ciudadano presidente:

Mariano Riva Palacio y Rafael Martínez de la Torre, al ciudadano presidente de la República, con el debido respeto, exponemos: que el fallo del Consejo de Guerra ha sido confirmado por el general en jefe, imponiendo la pena capital al príncipe Fernando Maximiliano. Por última vez debemos molestar al supremo magistrado de la nación, pidiéndole hoy clemencia para nuestro defendido.

El fallo de los tribunales, que han conocido de esta causa, es ya un hecho y, ante este acontecimiento, omiten los defensores hacer nuevas observaciones a la ley, para implorar sólo la gracia del indulto.

Cuanto hemos expuesto en nuestros anteriores ocursos, se ofrece tomarlo en consideración por el ciudadano presidente y a nosotros sólo nos toca protestar: que amantes de la libertad, estimamos, como uno de nuestros mayores bienes, exponer, con verdad, cuanto puede ser útil a la nación. La vida de Maximiliano no será motivo jamás de trastorno interior en el país y puede elevar a México, moral y positivamente, en el exterior. Su muerte entraña un grave germen de mal; porque para la discordia civil, es un punto de partida que comienza con sangre y no se sabe su término; en cuanto al exterior, significa el aislamiento de Europa y un motivo de sentimiento para la nación vecina. ¡Sombrio cuadro de un futuro que no quisiéramos profetizar!

No hablaremos ya de consideración alguna de orden público. Al recto espíritu del ciudadano presidente no puede ocultársele cuánto puede pesar este perdón en un partido vencido, que ve en las manos de este supremo magistrado el poder de la salvación pública.

No es posible que el corazón del ciudadano, que más ha luchado por los filantrópicos principios de la libertad, quiera amargar la existencia de las familias con una pena que reduce a la nada al reo de la ley. Esa nada en que se resuelve la muerte, es una negra sombra de la existencia cuando se pierde en el patíbulo por un delito político; pero esa sombra que no se ve al ejecutar a un reo, a nombre de la justicia política, la historia nos refiere que muchas veces, a través del tiempo que corre, ha conmovido el corazón de quien enérgico creyera que llenaba un deber que impone la ley.

Buen padre de familia el ciudadano presidente y educada ésta en los sentimientos que repugnan el horrible espectáculo de la sangre que se derrama por delitos políticos, puede creer, que si escuchara la voz de sus apreciables hijos y digna esposa, le pedirían, a nombre de la respetable madre de Maximiliano y de la desventurada princesa Carlota, la vida de este príncipe desgraciado que, al iniciarse en la política de nuestra patria infortunada, cayó en ese abismo sin fondo ni luz que crían (sic) las disensiones civiles. ¡Pobre madre! ¡Qué distante estará de tener a su hijo al borde del sepulcro, si antes no le salva el ciudadano presidente, abriendo las puertas a su corazón generoso, que debe ser el reflejo del pueblo que gobierna!

Ese sentimiento puede estar hoy dominado por esa terrible presión de una exigencia, mal calificada por algunos de patriótica, pero ese mismo sentimiento debe ser superior a un extravío, de que vendría muy pronto un cordial arrepentimiento.

Que piensen con el ciudadano presidente los que sean llamados a votar en este indulto, cuál sería la súplica de las personas de su familia, si estuvieran en esta ciudad y estamos seguros del perdón que imploramos.

Al otorgarlo, el ciudadano presidente habrá satisfecho una inspiración de su propia conciencia y habrá sido digno intérprete de los sentimientos de la República.

Todo lo esperamos de su corazón generoso, pidiéndole se sirva otorgar el indulto, dictando luego sus órdenes para que se suspenda la

ejecución, a fin de evitar que la más pequeña dilación en el despacho de este recurso, lo hiciera ineficaz, porque llegase fuera de tiempo.

San Luis Potosí, junio 16 de 1867.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre



EL GOBIERNO REPUBLICANO  
NIEGA EL INDULTO

Ciudadanos Mariano Riva Palacio  
y licenciados Rafael Martínez de la Torre  
Presentes:

Al ocurso presentado por ustedes, con fecha de hoy, al ciudadano presidente de la República, solicitando se conceda la gracia de indulto a Fernando Maximiliano de Habsburgo, que ha sido sentenciado en Querétaro, por el Consejo de Guerra que lo juzgó, a sufrir la última pena, ha recaído el acuerdo siguiente:

Examinadas con todo el detenimiento que requiere la gravedad del caso, esta solicitud de indulto y las demás que se han presentado con igual objeto, el ciudadano presidente de la República se ha servido acordar que no puede accederse a ellas, por oponerse a este acto de clemencia las más graves consideraciones de justicia y de necesidad de asegurar la paz de la nación.

Y lo comunico a ustedes para su conocimiento y como resultado de su ocurso citado.

San Luis Potosí, junio 16 de 1867.

(Ignacio) Mejía

LOS DEFENSORES COMUNICAN LA NEGATIVA

Telegrama de San Luis Potosí para Querétaro, junio 16 de 1867

Señores licenciados don Eulalio M. Ortega y  
don Jesús M. Vázquez:

Nuestros esfuerzos han sido estériles. El indulto se negó, fue una orden para que la ejecución sea el miércoles.

Escribimos a ustedes mañana.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre

EL FUSILAMIENTO SERÁ  
EL DÍA 19 DE JUNIO

San Luis Potosí, junio 16 de 1867

Ciudadano general M. Escobedo  
Querétaro

Los defensores de Maximiliano y de Miramón acaban de ocurrir a manifestar al gobierno, que se ha confirmado la sentencia del Consejo de Guerra que les impuso a ellos y a Mejía la pena de muerte y que se ha ordenado hacer la ejecución en la tarde de hoy. Se ha pedido para los tres sentenciados la gracia de indulto, que el gobierno ha denegado, después que ha tenido sobre este punto las más detenidas deliberaciones.

Con el fin de que los sentenciados tengan el tiempo necesario para el arreglo de sus asuntos, el ciudadano presidente de la República ha determinado que no se verifique la ejecución de los tres sentenciados, sino hasta en la mañana del miércoles 19 del mes corriente. Sírvasse usted dar sus órdenes conforme a esta resolución y avisarme, desde luego, el recibo de este mensaje.

(Ignacio) Mejía

MAXIMILIANO SOLICITA DINERO  
PARA QUE SE EMBALSAME SU CADÁVER

Querétaro, 16 de junio de 1867

Señor don Carlos Rubio

Lleno de confianza me dirijo a usted estando completamente desprovisto de dinero, para obtener la suma necesaria para la ejecución de mi última voluntad. Esta suma será devuelta a usted por mis parientes en Europa, a los que instituyo mis herederos.

Deseo que mi cadáver sea llevado a Europa cerca de la emperatriz, confío este cuidado a mi médico el doctor Basch. Usted le entregará el dinero que necesite para el embalsamamiento y transporte, así como para el regreso de mis servidores a Europa. La liquidación de este préstamo se hará por mis parientes, por la intervención de las casas europeas que usted designe o por pagarés enviados a México. El doctor antes citado hará con usted estos arreglos.

Doy a usted las gracias más anticipadas por este favor que le deberé; envío a usted mis saludos de despedida y deseándole felicidades quedo suyo.

Maximiliano

DA INSTRUCCIONES SOBRE SU CADÁVER

Querétaro, junio 18 de 1867

(General Mariano Escobedo)

Señor general:

Deseo, si (es) posible, que mi cuerpo sea entregado al señor barón de Magnus y al señor doctor Basch, para que sea conducido a Europa, y el señor Magnus se encargará de embalsamarlo, conducirlo y demás cosas necesarias.

Maximiliano

LOS DEFENSORES SE DAN POR VENCIDOS

Telegrama de San Luis Potosí para Querétaro. Junio 18 de 1867

Señores licenciados don Eulalio M. Ortega y  
don Jesús M. Vázquez

Amigos:

Todo ha sido estéril. Lo sentimos en el alma y suplicamos al señor Magnus presente a nuestro defendido este sentimiento de profunda pena.

Mariano Riva Palacio

Rafael Martínez de la Torre

MAXIMILIANO ESCRIBE AL PAPA

Prisión en el monasterio de Capuchinas  
en Querétaro, a 18 de junio de 1867

A su Santidad Pío IX

Beatísimo padre:

Al partir para el patíbulo a sufrir una muerte no merecida, conmovido vivamente mi corazón y con todo el afecto de hijo de la Santa Iglesia, me dirijo a vuestra santidad, dando la más cabal y cumplida satisfacción, por las faltas que pueda haber tenido para con el vicario de Jesucristo y por todo aquello en que haya sido lastimado su paternal corazón; suplicando alcanzar, como lo espero, de tan buen padre, el correspondiente perdón.

También ruego humildemente a vuestra santidad, no ser olvidado en sus cristianas y fervorosas oraciones y, si fuere posible, aplicar una misa por mi pobrecita alma.

De vuestra santidad, humilde y obediente hijo que pide su bendición apostólica.

Maximiliano

PATÉTICA CARTA DE MAXIMILIANO  
A JUÁREZ

Querétaro, junio 19 de 1867

Señor don Benito Juárez

Próximo a recibir la muerte, a consecuencia de haber querido hacer la prueba de si nuevas instituciones políticas lograban poner término a la sangrienta guerra civil que ha destrozado desde hace tantos años este desgraciado país, perderé con gusto mi vida, si su sacrificio puede contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria.

Íntimamente persuadido de que nada sólido puede fundarse sobre un terreno empapado de sangre y agitado por violentas conmociones, yo conjuro a usted, de la manera más solemne y con la sinceridad propia de los momentos en que me hallo, para que mi sangre sea la última que se derrame y para que la misma perseverancia, que me complacía en reconocer y estimar en medio de la prosperidad, con que ha defendido usted la causa que acaba de triunfar, la consagre a la más noble tarea de reconciliar los ánimos y de fundar, de una manera estable y duradera, la paz y tranquilidad de este país infortunado.

Maximiliano



MAXIMILIANO PIDE EL INDULTO  
DE MIRAMÓN Y MEJÍA

Telegrama oficial depositado en Querétaro, recibido en San Luis Potosí a la una hora y cincuenta minutos de la tarde, el 18 de junio de 1867

Ciudadano Benito Juárez:

Desearía se concediera conservar la vida a don Miguel Miramón y a don Tomás Mejía, que anteayer sufrieron todas las torturas y amarguras de la muerte, y que, como manifesté al ser hecho prisionero, yo fuera la única víctima.

Maximiliano

MIRAMÓN AGRADECE LOS ESFUERZOS  
DE SU DEFENSOR

Convento de Capuchinas, junio 16 de 1867

(Licenciado Ignacio de Jáuregui),

Querido licenciado y amigo:

Le estoy muy reconocido a usted por todo el trabajo que se ha tomado para salvarme y, no pudiendo darle las gracias personalmente, lo hago por medio de estas líneas.

Suplico a usted defienda mi honra como lo ha hecho hasta aquí. No soy traidor; si lo fuera aún duraría la dominación extranjera, porque la habría sostenido con mi espada; pero he amado a mi patria demasiado para permitir en ella un yugo extranjero.

Por lo que hace a los acontecimientos de Tacubaya, usted verá tal vez una orden mía en la que mandaba fusilar a los jefes y oficiales, pero de ningún modo a los médicos y mucho menos a los particulares; lo declaro en estos momentos, presto a comparecer en la presencia de Dios.

Adiós, querido licenciado; de nuevo le suplico defienda mi nombre y, juntamente con mis agradecimientos, reciba usted las protestas de adhesión de su amigo afectísimo.

Miguel Miramón

ÚLTIMOS DESEOS DE MAXIMILIANO  
SOBRE SU CADÁVER

Querétaro, en la prisión de las Capuchinas, junio 17 de 1867

(Al ministro barón de Lago)  
Querido barón:

Nada tengo ya que ver en el mundo y mis últimos deseos se limitan a mis restos mortales, que pronto quedarán libres de padecimientos, y en favor de los que me sobrevivan.

Mi médico, el doctor Basch, hará transportar mi cuerpo a Veracruz. Dos sirvientes, Gull y Tudos, serán los únicos que le acompañarán. He dado orden de que se conduzca mi cuerpo a Veracruz sin ninguna pompa y que a bordo no se haga ninguna ceremonia extraordinaria. He esperado la muerte con calma y quiero, igualmente, gozar de calma en el féretro.

Procurad, querido barón, que en uno de los dos buques de guerra el doctor Basch y mis dos criados sean transportados a Europa.

Quiero que se me entierre al lado de mi pobre esposa. Si no tuviere fundamento la noticia de la muerte de mi pobre mujer, deberá depositarse mi cuerpo en un sitio cualquiera, hasta que la emperatriz se reúna conmigo por la muerte.

Tened la bondad de transmitir las órdenes necesarias al capitán de navío del *Greeller*. Tened igualmente la bondad de hacer cuanto esté de vuestra parte para que la viuda de mi fiel compañero de armas Miramón, pueda ir a Europa en uno de los dos buques de guerra. Cuento tanto más con que se cumpla este deseo, cuanto que la he encargado que se traslade a Viena cerca de mi madre.

De nuevo os doy las más cordiales gracias por todas las incomodidades que os causo y soy con la mayor benevolencia, vuestro.

Maximiliano

## EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

En el Cerro de las Campanas, sito a 700 metros de la orilla occidental de la ciudad de Querétaro, a las siete y cinco minutos de la mañana del día 19 de junio de 1867, yo, el infrascrito escribano, doy fe, que en virtud de la sentencia pronunciada por el Consejo ordinario de Guerra y confirmada con el decreto asesorado del ciudadano general en jefe del cuerpo de ejército del Norte, de ser pasados por las armas los reos Fernando Maximiliano de Austria, llamado emperador de México, y sus generales Tomás Mejía y Miguel Miramón, se les condujo con segura custodia al punto citado, donde se hallaban situadas las tropas para la ejecución de la referida sentencia, mandadas por el ciudadano general Jesús Díaz de León, y habiéndose publicado por dicho señor el bando de ordenanza, fueron simultáneamente ejecutados los precitados reos a la hora y en el lugar referidos, y para constancia, el ciudadano fiscal mandó se pusiera por diligencia, que firmó conmigo el presente escribano.

González

Félix G. Dávila

EL GOBIERNO DA INSTRUCCIONES  
SOBRE LOS CADÁVERES DE LOS SENTENCIADOS

San Luis Potosí, junio 18 de 1867  
a las nueve de la mañana

Ciudadano general Mariano Escobedo  
Querétaro

Se ha pedido al gobierno, que una vez que se verifique la ejecución de Maximiliano, permitiera disponer del cadáver, para llevarlo a Europa.

No se ha concedido esto; pero con motivo de tal petición, el ciudadano presidente de la República ha acordado que se sirva usted proceder conforme a las instrucciones siguientes:

Primera: Una vez que se verifique la ejecución de los sentenciados, si los deudos de don Miguel Miramón y don Tomás Mejía piden disponer de los cadáveres, permitirá usted que, desde luego, puedan disponer libremente de ellos.

Segunda: Sólo usted dispondrá lo conveniente respecto del cadáver de Maximiliano, rehusando que pueda disponer algo cualquiera otra persona.

Tercera: Oportunamente mandará usted hacer cajas de zinc y madera para guardar, de un modo conveniente, el cadáver de Maximiliano y también para los de don Miguel Miramón y don Tomás Mejía, si no los piden sus deudos.

Cuarta: Si alguno pidiera que se le permita embalsamar o inyectar el cadáver de Maximiliano o hacer alguna otra cosa que no tenga inconveniente, rehusará usted que lo disponga otra persona, pero en tal caso usted lo dispondrá previniendo que, sin rehusarse la presencia de

extranjeros, se haga por mexicanos de la confianza de usted y que todo se haga de un modo conveniente por cuenta del gobierno.

Quinta: Una vez que se verifique la ejecución, prevendrá usted que, desde luego, se cuide del cadáver de Maximiliano y también de los otros, si no los piden sus deudos, con el decoro que corresponde después que se ha cumplido la justicia.

Sexta: Dispondrá que el cadáver de Maximiliano se deposite en lugar conveniente y seguro, bajo la vigilancia de la autoridad.

Séptima: Para el depósito del cadáver de Maximiliano y de los otros, si no los piden sus deudos, encargará usted que se hagan los actos religiosos acostumbrados.

Sebastián Lerdo de Tejada

EL MINISTRO DE AUSTRIA  
PIDE EL CADÁVER DE MAXIMILIANO

Telegrama depositado en Tacubaya el 19 de junio de 1867, recibido en San Luis Potosí a las nueve horas venticinco minutos de la noche el 20 de junio

Ciudadano presidente:

Ruego a usted concederme el cadáver de Maximiliano para conducirlo a Europa.

Barón de Lago



EL GOBIERNO RECHAZA LA PETICIÓN

San Luis Potosí, junio 20 de 1867,  
a las diez y quince minutos de la noche

Al señor barón de Lago  
Tacubaya

El señor presidente de la República ha acordado diga a usted en respuesta a su telegrama de ayer, recibido en la noche de hoy, que por motivos graves no se puede conceder a usted que disponga del cadáver de Maximiliano.

Sebastián Lerdo de Tejada

EL MINISTRO DE PRUSIA  
TAMBIÉN PIDE EL CADÁVER DE MAXIMILIANO

San Luis Potosí, junio 29 de 1867

Excelentísimo señor don Sebastián Lerdo de Tejada

Señor:

El príncipe prisionero de Querétaro, la víspera de su muerte, ha expresado en una carta firmada de su mano y dirigida al señor general Escobedo, el deseo de que sus restos mortales nos fueran confiados a mí y al doctor Samuel Basch, médico del difunto, a fin de que el doctor Basch acompañe el cuerpo a Europa y yo me encargue de hacer embalsamar el cadáver, así como de todo lo que concierne a su traslación a Europa.

Conforme a la voluntad del finado príncipe, que me ha expresado verbalmente, la traslación de sus restos debe hacerse sin ninguna ostentación y de manera que se evite cuidadosamente todo lo que pudiera excitar demostraciones o aun la sola curiosidad pública.

Reiterando, en consecuencia, la demanda que he tenido el honor de exponer a S. E. de servirse hacer dar las órdenes necesarias para que los restos mortales me sean confiados, me conformaría de buena voluntad con los deseos que pudieran existir, relativamente a la traslación del cuerpo hasta la costa y a bordo de uno de los navíos de la marina austríaca estacionados en Veracruz.

Aprovecho esta ocasión, para repetir a V. E. las protestas de mi alta consideración.

A. V. Magnus

TAMPOCO A MAGNUS  
SE LE CONCEDE EL CADÁVER DE MAXIMILIANO

San Luis Potosí, junio 30 de 1867

Al señor Barón A. V. Magnus, etc., etc., etc.

Señor:

He recibido la comunicación que se sirvió usted dirigirme ayer, acerca de que el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, en la víspera de su muerte, expresó el deseo de que sus restos mortales fuesen confiados a usted y al doctor Samuel Basch, para trasladarlos a Europa.

Según he tenido la honra de manifestar a usted antes, el gobierno de la República cree que, por varias consideraciones, no puede permitir que los restos mortales del archiduque sean llevados a Europa.

Por este motivo, tengo el sentimiento de contestar a usted que el gobierno no puede dictar las órdenes que usted ha deseado con aquel fin.

Aprovecho esta ocasión para repetir a usted señor barón, que soy su muy respetuoso y obediente servidor.

Sebastián Lerdo de Tejada

EL DOCTOR BASCH INSISTE EN LLEVAR A EUROPA  
EL CADÁVER DE MAXIMILIANO

Ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada,  
ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores

El que abajo firma, con el respeto debido, tiene la honra de hacer presente ante usted, ciudadano ministro, que:

Como médico particular del finado archiduque Maximiliano, he sido encargado por él de llevar su cadáver a Europa, con el objeto de entregarlo a su familia.

Que tal haya sido su voluntad, resulta tanto de la carta firmada por él mismo que en fecha 16 de junio próximo pasado dirigió a don Carlos Rubio en Querétaro y cuya copia tengo la honra de adjuntar —sub A— cuanto también de la del día 18 del mismo mes, cuyo original se halla en poder del ciudadano general Escobedo, como es manifiesto de la carta del ciudadano coronel Ricardo Villanueva, que —sub B— se halla aquí adjunta.

El cumplimiento de esta orden, lo considero como un deber sagrado y me atrevo, en su desempeño, a suplicar a usted ciudadano ministro, tenga a bien mandar que el mencionado cadáver me sea entregado, apoyando esta solicitud con el hecho de que por orden superior, los cadáveres de sus dos compañeros de infortunio han sido entregados a sus familias y que jamás y en ningún tiempo el Supremo Gobierno se había negado a entregar algún cadáver a los deudos que lo pidieron.

Suplico por fin se digne contestar a ésta mi respetuosa solicitud, cualquiera que fuera la respuesta para que, regresando a mi tierra, pueda justificarme delante de la familia del finado archiduque de haber, por mi

parte, hecho todo lo que podía para conseguir la extradición del cadáver del que se trata.

En lo que recibirá favor de usted el más respetuoso y seguro servidor.

Dr. Samuel Basch

EL GOBIERNO NO ACCEDE  
A LA PETICIÓN DEL DOCTOR BASCH

México, julio 27 de 1867

Al señor doctor Samuel Basch

En vista de la petición de usted fecha de anteayer, para que se le permita llevar a Europa los restos mortales del archiduque Maximiliano, ha resuelto el ciudadano presidente de la República, que por varias y graves consideraciones, no se puede acceder a la petición.

Independencia y Libertad. México, julio 29 de 1867.

Sebastián Lerdo de Tejada

JUAN J. BAZ PRESENTA EXCUSAS  
A JUÁREZ

Tacubaya, junio 19 de 1867

Señor don Benito Juárez

Mi querido amigo y señor:

Hoy hemos recibido el parte del fusilamiento de Maximiliano y yo felicito al gobierno por la indomable energía que en este acto ha demostrado. Compadezco al hombre lo mismo que a los mexicanos que hay que sacrificar; pero este acto de severidad era indispensable para matar el principio que la persona representaba y quitar el pretexto de revolución a los trastornadores del orden. Este ejemplo hará que en Europa se nos respete y quitará las ganas a otros aventureros de venir por acá.

Tengo que pedir a usted excusas por la carta que escribí a usted, en la que le manifestaba temores de que el gobierno no obrase en esta vez como debía. Mis temores eran infundados y me complazco en reconocer mi falta.

Queda suyo.

Juan J. Baz

JUÁREZ RECOMIENDA QUE LA FAMILIA  
SE CUIDE EN EL REGRESO

San Luis Potosí, junio 17 de 1867

(Señor don Pedro Santacilia)  
(Nueva York)

Mi querido hijo Santa:

No recibí carta de usted en el correo de ayer; pero Berriozábal me dice que le escribió usted diciéndole que se había usted resuelto traerse la familia por Matamoros, de lo que infiero que recibió usted mi carta en que le indicaba ya a usted esta idea. Deseo que lleguen ustedes sin novedad a Matamoros de donde deben tomar carruajes particulares y carros ligeros para los equipajes. Ya he dicho a Berriozábal que facilite escolta de confianza que pueda relevarse en Monterrey.

Continúan activándose las operaciones sobre México.

Fue denegada a Maximiliano, Miramón y Mejía la gracia de indulto. En la mañana del día 19 del corriente deben ser ejecutados.

Cuiden mucho a María en el camino. Carguen sus provisiones de boca, pues ya sabe usted lo que son nuestras posadas y mesones, donde nada se encuentra en ciertas horas y que desde María hasta Margarita todas traigan su velo verde para que no las mortifiquen los rayos del sol.

Memorias a todos y muchos besos a María.

Su afectísimo padre y amigo.

Benito Juárez



JUÁREZ EXPLICA A CORONA  
POR QUÉ SE NEGÓ EL INDULTO

San Luis Potosí, junio 17 de 1867

Señor general don Ramón Corona  
Guadalupe Hidalgo

Mi estimado amigo:

Recibí la carta de usted de 13 del corriente con la copia de la que escribió a usted don Manuel Lozada, pidiendo la gracia de indulto en favor de Castillo, Maximiliano, Miramón y Mejía.

Desea usted que yo le dé a conocer mi opinión respecto de ese paso dado por Lozada y lo haré así manifestándole a usted que, en mi concepto, nada tiene de extraño que Lozada y otras personas hagan tal solicitud, porque como hombre y como partidario debe interesarse en la salvación de sus correligionarios y como él deseaba que usted fuera el conducto por donde me llegara su petición, hizo usted muy bien en mandármela y en contestarle del modo que aparece en la copia que me mandó usted de su contestación.

En cuanto a la resolución del gobierno respecto de la gracia que no sólo el señor Lozada sino otras personas y los defensores de Maximiliano, Miramón y Mejía han solicitado, alegando, entre otras razones, las mismas que Lozada expresa en su carta, ya se dio ayer denegándose dicha gracia, después de haberse considerado profunda y concienzudamente todos los alegatos y razones que han expresado los interesados, así como las de justicia y conveniencia nacional que el gobierno está en el deber de respetar.

Tendré presente lo que me dice usted respecto de la aduana de Guaymas que no pierdo de vista, pues tengo interés en extirpar los abusos, aunque, como usted comprenderá, no puede hacerse tan pronto como quisiéramos; pero, habiendo constancia, todo quedará remediado.

Soy de usted amigo, etc.

(Benito Juárez)

Manuscrito hológrafo.

YA FUERON FUSILADOS MAXIMILIANO,  
MIRAMÓN Y MEJÍA

San Luis Potosí, junio 21 de 1867

(Señor don Pedro Santacilia)  
(Nueva York)

Mi querido Santa:

Hoy he recibido las cartas de usted de 24 y 31 de mayo último que he leído con mucho gusto porque veo que usted y nuestra familia siguen sin novedad.

Hoy se ha rendido México y es natural que Veracruz se rinda también dentro de pocos días. En tal caso, de Nueva Orleáns pueden dirigirse para aquel puerto o, por lo menos, esperar algunos días si el vómito no es tan fuerte en Nueva Orleáns, mientras tienen noticias de Veracruz. En fin, lo que usted haga y arregle será lo mismo que si yo lo hiciera.

Recibí el retrato de Nelita que le agradezco, pues algún consuelo es verla, aunque sea en retrato.

El día 19 fueron fusilados en Querétaro Maximiliano, Miramón y Mejía.

No hay tiempo para más.

Mil besos a María y memorias a la vieja y al resto de la familia.

Suyo afectísimo padre y amigo.

Benito Juárez

JUÁREZ COMUNICA A BERARDO REVILLA  
EL FUSILAMIENTO DE MAXIMILIANO

San Luis Potosí, junio 22 de 1867

Señor don Berardo Revilla

Mi estimado amigo:

Participo a usted que el día 19 del corriente fueron fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía y hoy se ha rendido México, por cuyo suceso importante felicito a usted y a toda la familia, a la que se servirá usted decir muchas expresiones cariñosas de mi parte.

Suyo afectísimo amigo q. b. s. m.

Benito Juárez

## ACTA DE DEFUNCIÓN DE MAXIMILIANO

Un SELLO CON LAS ARMAS NACIONALES.— Otro SELLO que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. —JUZGADO DEL ESTADO CIVIL.— QUERÉTARO, QUERÉTARO.— ESTADO DE QUERÉTARO DE ARTEAGA.

AÑO DE 1934

En nombre de la República de México y como juez del Estado Civil de este lugar, hago saber a los que la presente vieren y certifico ser cierto, que en el libro número 6 seis, sección tercera de defunciones correspondiente al juzgado del Registro Civil que es a mi cargo a fojas 120, ciento veinte, frente, se encuentra una acta del tenor siguiente:—Al margen.—Acta número 716, setecientos dieciséis.—Al centro.—FERNANDO MAXIMILIANO JOSÉ.—En la ciudad de Querétaro, a las ocho de la mañana del día dieciocho de julio de 1867, mil ochocientos sesenta y siete, el C. juez que suscribe, dispuso se levantara la presente acta en que constaran las generales de MAXIMILIANO DE HABSBURGO, tomadas del periódico de la capital titulado *El Globo* por no haber otros datos:—FERNANDO MAXIMILIANO JOSÉ, falleció en el Cerro de las Campanas, según oficio de la comandancia, el diecinueve de junio próximo pasado, a las siete de la mañana, de treinta y cinco años, casado que fue con doña Carlota Amalia, originario de Seholorum y vecino de México. Son testigos de este acto los CC. Cesario Frías, de treinta y seis años, viudo, empleado, originario y vecino de esta ciudad, en la calle de la Flor Baja número doce y Francisco Servín de cincuenta años, viudo, empleado, originario y vecino de esta ciudad en la calle de la Alhóndiga casa sin señal. Se dio lectura a esta acta así como a los artículos que previene la Ley General y a los de la Reglamentaria del

Estado, y terminó este acto que firmaron los que supieron, con los CC. juez y secretario.—Doy fe.— Cenobio Díaz.—Secretario.—M. Rubio.—Rúbricas.—Al margen.— Una nota que dice.—Por orden del gobierno de esta fecha se quedó el cadáver depositado en el palacio del mismo.—Adulto.—Primera Clase.—Doy fe.—

Para los efectos legales a que hubiere lugar y compulsada fielmente de su original se extiende la presente copia certificada en la ciudad de Querétaro, a los veinticuatro días del mes de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.—Doy fe.

El C. juez del Estado Civil  
J. A. Santos

Un sello con el ESCUDO NACIONAL que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—JUZGADO DEL ESTADO CIVIL.—Querétaro, Querétaro.

El C. secretario  
Miguel G. Herrera

ACTA DE DEFUNCIÓN  
DE MIGUEL MIRAMÓN

Un SELLO CON LAS ARMAS NACIONALES.—Otro SELLO que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. —JUZGADO DEL ESTADO CIVIL.—QUERÉTARO, QUERÉTARO. —ESTADO DE QUERÉTARO DE ARTEAGA.

AÑO DE 1934

En nombre de la República de México y como juez del Estado Civil de este lugar hago saber a los que la presente vieren y certifico ser cierto, que en el libro número 6 seis, sección tercera de defunciones correspondiente al juzgado del Registro Civil que es a mi cargo a fojas 73, setenta y tres, frente se encuentra una acta del tenor siguiente:—Al centro.—MIGUEL MIRAMÓN. En la ciudad de Querétaro, a las cinco de la tarde del día veinticuatro de junio de mil ochocientos sesenta y siete, se presentó ante el C. juez que suscribe el C. Alberto Lombardo, de veinte años de edad, soltero, agricultor, originario de México y vecino de esta ciudad, en la calle de la Flor Alta, número seis, dijo que, el día diez y nueve del corriente como a las seis y media de la mañana falleció sobre el Cerro de las Campanas Don MIGUEL MIRAMÓN, de 35 años, casado que fue con doña Concepción Lombardo. Presentó por testigos de este acto a los CC. Agustín Reyes, de cuarenta años, casado, médico, originario de Puebla y vecino de ésta en la calle de la Flor Alta número seis y a Rafael López, de cuarenta y tres años, casado originario de México y vecino de esta ciudad, en la calle tercera de San Antonio, casa sin señal. Se dio lectura a esta acta así como a los artículos que previene la Ley General y a los de la reglamentaria del Estado, y terminó este acto

que firmaron los que supieron, con los CC. juez y secretario.—Doy fe.—Cenobio Díaz.—M. Rubio.— Secretario.—(Rúbricas.)

Al margen.—Una nota que dice.—Se trasladó para México, el cadáver de Don Miguel Miramón sin derechos ningunos, según oficio del gobierno de fecha once de julio de mil ochocientos sesenta y siete, pagó por la memoria cuatro pesos.—Adulto.—Primera Clase.— Doy fe.

Para los efectos legales a que haya lugar y compulsada fielmente de su original, se extiende la presente copia certificada en la ciudad de Querétaro, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos treinta y cuatro.—Doy fe.

El C. juez del Estado Civil  
José Antonio Santos

Un sello con el ESCUDO NACIONAL que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—JUZGADO DEL ESTADO CIVIL.—Querétaro, Querétaro.

El C. secretario  
Miguel G. Herrera



ACTA DE DEFUNCIÓN  
DE TOMAS MEJÍA

Un SELLO CON LAS ARMAS NACIONALES.—Otro SELLO que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. -JUZGADO DEL ESTADO CIVIL.—QUERÉTARO, QUERÉTARO—ESTADO DE QUERÉTARO DE ARTEAGA.

AÑO DE 1934

En nombre de la República de México y como juez del Estado Civil de este lugar hago saber a los que la presente vieren y certifico ser cierto, que en el libro número 6 seis, sección tercera de defunciones correspondiente al juzgado del Registro Civil que es a mi caigo a fojas 64, sesenta y cuatro, frente se encuentra una acta del tenor siguiente:—Al margen.—Acta número 381. trescientos ochenta y uno.—Al centro.—En la ciudad de Querétaro, a las cuatro de la tarde del día diecinueve de junio de mil ochocientos sesenta y siete, se presentó ante el C. juez que suscribe, el ciudadano Rafael López, de cincuenta y un años, casado, comerciante, originario y vecino de esta ciudad en la calle segunda de Santa Clara número dos, dijo: que hoy a las seis y media de la mañana falleció en el Cerro de las Campanas Don TOMAS MEJÍA, de 41 cuarenta y un años de edad, militar, casado que fue con doña Agustina Castro, originaria de Pinal de Amoles. Presentó por testigos de este acto a los CC. Pascual Zorilla, de cuarenta y cuatro años, casado, corredor, originario y vecino de esta ciudad, en la calle de la Cruz Baja número dos y Juan Cuéllar, de treinta y cuatro años, casado, comerciante, del mismo origen y vecindad en la calle del Chirimollo número dieciocho. Se dio lectura a esta acta así como a los artículos que proviene la Ley General y a los de la reglamentaria del Estado y terminó esta acta que firmaron los que supieron, con los CC. juez y secretario.—Doy fe.—Cenobio Díaz.—

Pascual Zorilla.—Rafael López.—M. Rubio.— Secretario.—  
(Rúbricas).—Al margen.—Una nota que dice: Panteón número uno, en  
un nicho por 5 cinco años, pagó \$25.00. Los deudos del expresado señor  
Mejía, dispusieron después de expedida la boleta y memoria que se  
embalsamara el cadáver y no se inhumara en esta ciudad sino en la  
capital de México; se le concedió el permiso de traslación y pagaron  
\$25.00 más, se repuso la memoria primero con otra de papel sellado sin  
que por ésta hubiera satisfecho nada.—Julio 18 dieciocho de mil  
ochocientos sesenta y siete.—Adulto.—C.—Primera clase.—Doy fe.

Para los efectos legales a que haya lugar y compulsada fielmente  
de su original, se extiende la presente copia certificada en la ciudad de  
Querétaro, a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos  
treinta y cuatro.—Doy fe.

El C. juez del Estado Civil  
José Antonio Santos

Un sello con el ESCUDO NACIONAL que dice: ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS.—JUZGADO DEL ESTADO CIVIL.—  
Querétaro, Querétaro.

El C. secretario.  
Miguel G. Herrera